

Pero, sobre todo, el discurso de la competitividad reenvía a la mediación de la clase en esta movilización y a los enmascaramientos retóricos que vistieron esas ideologías de interés e identidad colectiva (3; 3.2.1). En noviembre de 1992 Giner (1994) apuntaba en Zaragoza la tendencia de los discursos nacionalistas a ser mercantilistas y a impulsar o participar en proyectos de modernización económica o social; esos mismos días el Gobierno autónomo llevó a cabo un programa de promoción económica de Aragón que incluyó la presentación del Plan Estratégico en París y Nueva York o la realización de misiones comerciales a Méjico, Chile, Argentina y Estados Unidos. En esas oportunidades el Presidente de la Comunidad destacó la influencia del grado de autogobierno en las posibilidades de desarrollo o en la calidad de vida. Según Bandrés (1985), el Estatuto de Autonomía entonces vigente incluía el principio del progreso como uno de los objetivos del autogobierno. Aunque ese mandato estatutario latiera en la ligazón que el Presidente de Aragón (113) estableció entre la demanda de autonomía plena y la necesidad de contar con igualdad de oportunidades para construir el futuro (ver 4.1.1), los beneficios que este discurso abría a algunos sectores sociales y territoriales reenvían al protagonismo de lo zaragozano, lo urbano y lo burgués en esta movilización. Incluso, este tipo de asociación reenvía menos al irredentismo de algunos discursos aragonesistas de este siglo (Mairal, 1996) que a la lectura económica del autogobierno y del proyecto nacionalista que caracterizó al PSA y al entorno de Andalán (Garcés, 1997).

Keating (1996: 70) adjudica a los *nacionalismos regionales* la tendencia a rediseñar el concepto del territorio dándole un sentido identitario propio. El mismo modelo francés de gestión territorial está en la base del concepto de cultura nacional que el pensamiento liberal español ha construido durante los tres últimos siglos (ver 4.2.1.2). Y, en el marco de lo global, Mattelart (1993, 1994) ha hecho notar la importancia cultural, y no sólo económica, del *espacio vital* que asegura el control de los flujos económicos y sociales; Hamelink (1981) o Schiller (1976, 1996) también han enfatizado las relaciones de poder que establecen las redes técnicas y los procesos de dominación identitaria o de clase que activan o perpetúan. El tendido eléctrico, la red de ferrocarril, el trazado radial de las carreteras españolas se revelan, a la manera apuntada por Fox (1997), instrumentos y estrategias de quienes construyeron el Estado español y lo dotaron de una identidad nacional uniforme; y una apropiación similar late tras lo que Keating (1996) denomina reinvencción del territorio por parte de los Gobiernos vasco y catalán, porque ambos han buscado consolidar sus propias redes de telecomunicaciones. Así el empeño del Gobierno de Aragón por vertebrar su territorio a través de las carreteras o de la televisión revela que una parte de la clase dirigente aragonesa había interiorizado esa estrategia de construcción social de la comunidad y que intentaron ponerla en práctica. En el convenio audiovisual el Gobierno de Aragón enfatizó el objetivo de romper la dependencia informativa y

cultural a través de una programación audiovisual aragonesa; Heraldó asoció el convenio televisivo con el trasvase de la creatividad social y la colonización cultural subsiguiente. Antes ese mismo Ejecutivo había ofrecido al Gobierno Central colaboración financiera para anticipar la autovía Zaragoza-Nueno o para mantener abiertas las líneas deficitarias de Renfe en Aragón (114) y había financiado los ejes carreteros del Cinca o del Jalón y pretendía invertir ciento veinte mil millones en el Plan de Carreteras de la Comunidad. Como luego ha puesto de manifiesto su entonces Presidente (Eiroa, 1995: 127), esta apuesta por poner en marcha contenidos y redes de carácter aragonés denota un intento de modificar ese modelo que ha contribuido a la aculturación de lo aragonés. En cambio, la escasa valoración social de esta política gubernamental indica que este discurso no acabó siendo interiorizado por la sociedad.

Según Keating (1996: 69), los gobiernos territoriales y los movimientos políticos buscan algo que les permita consolidar su identidad territorial y formular a partir de ahí su proyecto. Desde esa lectura la serie de reivindicaciones que conformaron esta movilización aparecen como estrategias de legitimación social del Gobierno Autónomo (4.2.2). Sin embargo, al ser incorporadas al mundo cotidiano de amplios sectores sociales como intereses colectivos, estas demandas territoriales activaron procesos de identificación con lo aragonés. Respecto a otros procesos subestatales de movilización o construcción identitaria, esta manera de imaginarse como comunidad a través de las realidades territoriales y no de la historia o de la lengua sugiere que, a la manera apuntada por Keating para Cataluña (Ibid, 155), la producción de identidad abandonó los componentes etnoculturales para enfatizar los cívicos territoriales. Vivido como un conjunto de relaciones sociales, económicas y políticas o como una estructura de sentimiento, el territorio aparece como una de las ideas fuerza que vehiculó el posible proyecto nacional y, sobre todo, que permitió a amplios sectores sociales vivirse como miembros de una comunidad. Los discursos políticos y mediales identificaron el ser aragonés con el apoyo a estas aspiraciones colectivas; el nacionalismo moderado sostuvo que la lucha de territorios había sustituido a la de clases, por lo que la decisión de vivir y trabajar en Aragón obligaba al compromiso con lo colectivo; y los actores, incluidos los populares, tradujeron esa toma de conciencia en apoyo a las manifestaciones:

"Desde Madrid se nos ve casi en exclusiva [...] como tierra de obligado paso. [...] Al margen de ese interés de *estado* [...], hemos tenido que soportar desprecios, olvidos e incumplimientos. En algunos casos, como los convenios con Renfe o el frustrado para la anticipación de la autovía hasta Nueno, los presupuestos de la Comunidad Autónoma

han debido acudir a completar la financiación estatal. Aunque suene duro: Podíamos elegir entre esa opción o la nada" (Eiroa, 1995: 116).

"Aragón ha sido siempre un camino despejado y no un barranco de separación entre Castilla y Cataluña [...] La historia acredita a Aragón como medio y mediación, tierra de pactos y compromisos, tierra de libertades, tierra abierta que sólo ofrece resistencia a los invasores" (Bada, J. 1995: 77).

"[...] El tan polémico acuerdo debe verse como una forma de impedir que Aragón siguiera durante tres años más al margen del mundo audiovisual, mientras una mayoría de españoles -los que disfrutaban de Autonomía Plena- disponían de un bien que la legislación española define -se preste mediante gestión pública o privada- como un servicio público esencial" (Mur, J.M. *Un convenio legal*, Heraldo, 28.8.1993).

Trasvasar la idea, la palabra y la imagen produce peor sequía que el trasvase de las aguas (Zapater, A. '*Operación Monegros*' para aumentar el secano, Heraldo, 11.7.1993 [Contraportada, sumario]).

4.1.1.5. Fiesta y reivindicación

Bajtín (1995) o Martín Barbero (1993) anotan que, dentro de la reinterpretación que hizo de lo popular, la Ilustración resemantizó también lo festivo quitándole sus elementos más carnavalescos o críticos con el poder. La Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas realizada por Jovellanos (1979) se sitúa en esa lógica ilustrada de racionalizar el ocio popular y someter sus virtualidades festivas al lado educativo y moral. Bajtín (Ibid, 36-7) considera ese proceso político una "reducción, falsificación y empobrecimiento progresivos de las formas de los ritos y espectáculos carnavalescos populares". Apoya esa valoración en que, de esa forma, la fiesta fue dejando de ser a lo largo de los siglos XVII y XVIII la *segunda vida del pueblo*; mutó, más bien, en realidad de poder o una práctica social de ámbito privado y familiar. Pero, si atendemos al espesor cultural y social de esa aculturación de lo popular, la propuesta de Jovellanos (1979) explicita que esa reformulación incluyó también la integración de las identidades territoriales, de sus fiestas y culturas tradicionales, en lo español. Rousseau ensalzó la función educativa de la fiesta y, de forma especial, alabó la capacidad de los juegos, celebraciones y fiestas para alentar sentimientos patrióticos. Por eso, su apuesta por enseñar las costumbres tradicionales o de organizar festivales públicos que propiciasen la participación civil y celebraciones que hicieran del amor por el país su pasión más fuerte, su única pasión (Ibid, 219) dialoga con el discurso de Jovellanos y le da cobertura ideológica.

En su intento por comprender el sentido de las identidades desde dentro de la cultura de masas, Martín Barbero (1993: 217) da por supuesto que las sociedades y los sujetos no se piensan a sí mismos en espacios como el mercado o el lugar de trabajo, sino en la familia, la calle o la casa. Esta lógica argumental rompe con el reduccionismo marxista que explica la identidad colectiva y las relaciones sociales a partir de las determinaciones económicas; o con el racionalismo liberal que desvaloriza el ocio, el tiempo libre y la fiesta popular para enfatizar las prácticas sociales o culturales urbanas y burguesas. Como urge en la vivencia de la comunitario desde lo cotidiano y lo social, esta investigación se apoya en esa capacidad de la fiesta popular para exaltar "el nosotros local, comarcal y regional" (Lisón, 1992: 155) o para construir identidades subestatales "en su ligazón y enfrentamiento con lo nacional" (Martín Barbero, 1993: 252). Situada entre el ocio y la construcción de identidad, la fiesta popular le parece a Lisón una forma de captar y representar subjetivamente lo real; pero, trasladada a la lucha sobre la hegemonía social, se revela como un espacio donde las clases sociales y los pueblos comparten significados o luchan desde posiciones diferentes para darle su sentido o, en todo caso, para resaltar valores, prácticas y concepciones.

En la movilización autonomista la fiesta adquirió valor político desde el momento que el Presidente de la Comunidad Autónoma sugirió la celebración de una manifestación el 23 de abril, festividad de San Jorge y Día de Aragón. La elección de esa fecha, confirmada luego por la Mesa de Partidos, entrecruzaba desde el punto de vista temático fiesta y reivindicación política, pero al mismo tiempo ponía al servicio de esa convocatoria todos los componentes populares e institucionales de la festividad. Su capacidad para convocar a la comunidad partía de los lemas de las manifestaciones. Sin embargo, a ellos se sumó el carácter comunitario del Día oficial de Aragón y los componentes emocionales simbólicos asociados a la figura mítica y religiosa de San Jorge. Para Bajtin (1995: 14), las festividades, como forma primordial de la civilización humana, portan un contenido esencial, un sentido profundo. En este caso, la apropiación de esa capacidad de la festividad por parte de los impulsores de la demanda autonomista reenvía a estrategias de valor político identitario; y la amplia participación social en las manifestaciones sugiere que ese tipo de apelación facilitó que algunos sectores sociales se vivieran como parte de una comunidad y se comportaran en consonancia con esa percepción. A ello ayudó, también, el diálogo simbólico que los discursos establecieron con el imaginario cultural (3.1.2) y la fuerza de las lecturas preferidas que se propusieron durante las semanas previas a los dos actos (3.1.1):

"La fiesta de San Jorge, Día de Aragón, alcanzó ayer su máxima expresión en la impresionante manifestación que congregó a más de cien mil personas en las calles de

Zaragoza para reclamar Autonomía plena ya" (Heraldo, *Una fiesta por la autonomía*, entradilla. 24.4.92)

"No faltó la música de charangas, tunos y grupos regionales ataviados con trajes típicos y llegados de numerosas localidades de la Comunidad que animaron con sus jotas y sus cánticos el recorrido de la marcha" (Diario 16: *Zaragoza fue un carnaval autonomista*. 24.4.93)

"PSOE y PP, traidores a Aragón"; "Aragón ye nazion" (slogans, cantados en la manifestación de 1993).

Según Bada (1995: 70), el nombre de Aragón opera como un símbolo que "reúne o con-voca a los aragoneses". La presencia de ese nombre a través del carácter comunitario de aquellas fiestas enriqueció una isotopía que, a través de otros tópicos con las demandas de carácter territorial o la actualización de la historia y la cultura común, propiciaba que aquel acontecer fuera leído socialmente como una puesta en juego de la colectividad, de su presente y su futuro (4.1.1). Si tomamos como referencia sus declaraciones a los medios informativos (DGA, 1992d; 1993a/b), los participantes se sintieron convocados a través de un universo semántico que, yendo más allá de las ideas fuerza recogidas en las pancartas que encabezaban las manifestaciones, apelaba a su sentimiento de aragoneses. Lisón (1992: 142) destaca que las fiestas comunitarias producen una explosión de energía emotiva y catártica, porque suman la "escenificación de la corporatividad moral y solidaria"; su valor identitario descansa, pues, en lo que supone de "rito, mito o expresividad emotivo simbólica, alteridad y solidaridad, formas de percibirse, imaginarse y relacionarse". La comunicación del Gobierno autónomo enfatizó el valor comunitario de esos actos, lo que había en ellos de afirmación aragonesa (ver 4.1; 4.2); ocultó, en cambio, los intereses particulares que latían tras esas convocatorias: En 1992 el título *23 de abril, la fiesta de todos los aragoneses* encabezó un artículo de su Presidente publicado en los diarios editados en Aragón; la publicidad institucional lo enunció con una estructura similar de frase: *Día de Aragón, fiesta y participación* (DGA, 1992d, 1993a); y los medios legitimaron ese discurso institucional, como prueba este texto *Los tambores y las charangas animaron el recorrido de los miles de participantes y banderas, pancartas y pegatinas aportaron la nota colorista a una marcha de carácter popular* (Heraldo, Sumario, crónica del acto, 24.4.92).

Para Bada (1995: 93), la festividad de San Jorge y su simbolismo no ha alcanzado entre los aragoneses la magnitud sociológica del Ebro, el Pilar o la Jota. Sin embargo, un estudio previo de mercado encargado por el Gobierno autónomo (Malo de Molina, 1992a) avisó de que una parte importante de los encuestados identificaban el 23 de abril con el nombre de su patrón. A partir de esa

capacidad de identificación, el Gobierno Autónomo concentró su discurso en ligar la manifestación al día de San Jorge; los mismos relatos mediales valoraron esos actos a favor de la autonomía plena como la culminación de esa festividad social (Heraldo, *Una fiesta por la autonomía*, 24.4.92). Lisón (1992: 143) atribuye al *binomio santo-fiesta* la máxima capacidad simbólica y sensorial de unidad e identidad comunitaria, por lo que esa continua referencia a la fiesta de San Jorge en discursos y comportamientos sociales sugiere que ese entrecruce del patrono de Aragón con la fiesta de la comunidad y la demanda de mayor autogobierno multiplicó la capacidad de identificación social de aquellos actos. De hecho, Bada (1995: 93) ha reconocido después que las manifestaciones autonomistas han favorecido "la recuperación de esta fiesta y símbolo tradicional". Con todo, la suma de referentes colectivos aportados por la fiesta religiosa, la festividad institucional y la demanda política llena de espesor cultural e ideológico la vivencia identitaria de este acontecer por parte de gran parte de los aragoneses. La fuerza emocional y simbólica de esta apelación sugiere que el sentido cívico de lo festivo se mestizó con el etnocentrismo de la conexión establecida entre el mito religioso y el folklore.

El discurso sobre lo aragonés está más cerca de la tendencia romántica a considerar los mitos fuente de la cultura humana que de la posición ilustrada de rechazarlos como expresión de la superstición. Si la historiografía romántica recurrió con frecuencia a los mitos para imaginar las naciones o la nacionalidad, el pensamiento social sobre lo aragonés ha convertido algunos de ellos en estereotipos sobre la identidad. Lacarra (1972) ya puso de manifiesto la instrumentalización de lo histórico que suponía el uso de algunos mitos de origen, como los Fueros de Sobrarbe o el proceso de *Alzar Rey* (Lacarra, 1972), pero eso no ha impedido que sus élites sociales los hayan mantenido vivos en los discursos cultos del derecho o la historia o que, más recientemente, hayan atravesado la cultura de masas. De hecho, lecturas culturales de esa mitificación del origen aragonés han enfatizado la presencia del Santo Grial en Aragón y su relación con el Monasterio de San Juan de la Peña, asociando Monsalvat con el monte Oroel y la Sierra de Gratal con el Grial (Domínguez Lasierra, 1991: 144). Llobera (1996) destaca la capacidad de los mitos de origen para legitimar identidades, por lo que estos usos sociales, desde las instituciones a los participantes pasando por los medios, de la leyenda de San Jorge o del *pactismo aragonés* se revelan semantizaciones sociales de unas lecturas preferidas escritas en diálogo con la historia y la cultura. Ese valor étnico de estos discursos y de los diálogos con el imaginario social que activaron explica que, a la manera del cronista Vagad cuando afirmó que "Dios nunca se mostró como a los nuestros" (en Lisón, 1992: 178), un relato medial de la manifestación de 1993 comparara al Presidente de Aragón portando un paraguas con los colores de

la cuatribarrada en con Moises conduciendo a Israel a la tierra prometida (Miranda, R. El Periódico, 24.4.93):

"El santo, eje de la fiesta, es el símbolo de la comunidad en su totalidad, porque está fuera, más allá de, no contaminado por, lo ordinario y vulgar de la vida aldeana; actúa además como paradigma de la virtud, de la ética y de la moral y en consecuencia invita al individuo a sobrepasar su egocentrismo, su clan familiar y organiza su comportamiento dotándolo de un sentido cívico comunitario" (Lison, 1992: 142).

"[...] puede resultar útil comparar la estructura de nuestros mitos heroicos de hoy con un mito cristiano y caballeresco tan característico como el de San Jorge. [...] es, a su vez, producto de la refundición o prolongación de otros mitos anteriores" (Gubern, 1974: 232).

"San Jorge, el patrón de los aragoneses, se ha mitificado como el paradigma de los caballeros esforzados, como el paladín de las más hazañosas empresas, como el luchador por antonomasia, capaz de derrotar a los dragones. Tal vez Aragón, como la princesa del cuento, quiera ponernos a prueba para demostrarse y demostrarnos que la merecemos" (Vidal, 1986: 33).

Esta forma de vivir la manifestación autonómica revela algunos de los dispositivos y de los usos sociales mediante los que la fiesta facilitó que amplios sectores sociales se vivieran como parte de una comunidad. Pero, sobre todo, aclara el carácter etnonacional que adquirió esa identificación a partir de algunos elementos. Si Rousseau reconoció a la religión una gran capacidad para santificar la nación y convertirla en objeto de veneración (Llobera, 1996), el uso social de la leyenda de San Jorge o de la Virgen del Pilar durante estos meses de movilización social advierten de que la interacción del mito con la religión facilitó esa interiorización social de lo aragonés. Y, en la medida que se apoyaron en lo simbólico y emocional, ambos discursos reforzaron su efecto porque dialogaron con un clima social de exaltación social e identitaria (3.2.2). Bada (1995: 83) avisa que la conciencia de un pueblo o el sentimiento de proveniencia y pertenencia tiende a expresarse mediante símbolos religiosos; y Vidal (1986: 71) hace constar las numerosas tradiciones religiosas que perviven en Aragón para afirmar que las teofanías han sido vehículo constante de la identidad aragonesa. Sobre ese imaginario esta reescritura noticiada de lo mítico y lo religioso cobra valor político e ideológico, porque abrió las puertas a una vivencia identitaria del acontecer por parte de sectores sociales poco proclives al debate partidista a costa de reducir a un relato esquemático el conflicto entre instituciones y partidos (3.1; 3.1.1; 3.2.1).

En el acto oficial del Día de Aragón de 1992 el Presidente del Gobierno Autónomo destacó que Sender concede a Aragón bases para una mitología descollante y de una gran belleza literaria, artística y filosófica, pero que su glosa de la figura de Jorge de Capadocia no pretendía profundizar en esa personalidad mítica de Aragón, sino indagar en la compleja realidad de esos momentos. En diálogo con este contexto tan emocional como aragonesista este discurso se revela retórico, puesto que parece afirmar lo que decía negar. Esa figuración ideológica, enmascaradora de intenciones, late también en el cartel oficial del Día de Aragón. El protagonismo que San Jorge había tenido con anterioridad en esa iconografía oficial dejó paso a otra propuesta textual que renunciaba a esa mitificación de la leyenda en favor de una lectura más cívica de lo comunitario: La visión cenital de personas que pintaban la bandera cuatribarrada aragonesa sobre el lema *Somos un gran equipo*. Mas allá de su valor informativo, este mensaje invita a lecturas simbólicas que dialogaban con el discurso nacionalista, porque invitaban a contruir la nación aragonesa a través de su bandera y desde el protagonismo de una sociedad capaz. De ahí que el universo semántico asociado al patrón de Aragón, uno de los modelos míticos más universales y permanentes heredados por la cultura popular (Gubern, 1974: 232), alimentara esta reivindicación y, sumándose a las teofanías o los mitos de origen, acabara tiñendo los elementos cívico territoriales de este proceso social de matices etnocéntricos.

Obviando los componentes no aragoneses de San Jorge o de la Virgen del Pilar (115), ambos fueron puestos en contacto por los impulsores de la reivindicación en 1993. De esa forma, potenciaron el valor identitario de ambos motivos religiosos, pero sobre todo conectaron las expectativas colectivas, la reivindicación social, con la divinidad. En esa lógica los más de cien mil aragoneses camino de la Basílica del Pilar pidiendo *autonomía plena* representan la rogativa de un pueblo a su Virgen en favor de una aspiración colectiva, con lo que se entrecruzan prácticas religiosas y tradiciones culturales. Incluso, la proximidad de dos de las manifestaciones con la Semana Santa, la de 1992 tuvo lugar el miércoles de la Semana de Pascua, sugirió a algunos participantes nuevas asociaciones mítico religiosas, como puso de manifiesto la denominación de procesión que le dieron algunos relatos mediales, el Vía Crucis del Rolde Choben o la presencia de cientos de tambores y bombos que aportaron el redoble y el sonido procesional de la Semana Santa aragonesa. Para Bada (1995: 57), el turismo ha mutado estas expresiones de la cultura popular en espectáculo y mercancía. Aún así, este uso del espacio y del tiempo social pone de manifiesto que, en la línea dibujada por Foucault (1978), lo aragonés se alimentó de esos códigos que habitualmente se reservan los diversos Poderes sociales. El carácter procesional de las manifestaciones activa lo que estas expresiones litúrgicas tienen de

celebración de misterios religiosos (Martín Barbero, 1993: 231) y, por tanto, completan o modifican el sentido popular de la calle como espacio donde se anulaban las diferencias y se vivió lo comunitario:

"Hay quien se queja de que la manifestación fue demasiado silenciosa, casi solemne. Es que en los momentos históricos somos así. Nos ponemos serios y cejijuntos. Y reflexionamos. Cómo en una procesión" (Gistáin, M. *¡¡Ay piteraiii*. El Periódico. 24.4.92).

" Fiesta significa trascendencia subjetiva del *datum*; es una fabricación gratuita de un modo estético, simbólico, trascendente. Pero lo fascinante de la fiesta como creación cultural es su bivalencia óptica, radicalmente humana: da al cuerpo lo que es del cuerpo y al espíritu lo que le pertenece" (Lisón, 1992: 155).

Las fiestas tienen siempre una relación profunda con el tiempo. En la base de las fiestas hay siempre una concepción determinada y concreta del tiempo natural (cósmico), biológico e histórico. [...] La muerte y la resurrección, las sucesiones y la renovación constituyeron siempre los aspectos esenciales de la fiesta. [...] Bajo el régimen feudal [...] la relación de la fiesta con los objetivos superiores de la existencia humana, la resurrección y la renovación, sólo podía alcanzar su plenitud y pureza en el carnaval y en otras fiestas populares y públicas (Bajtín, 1995: 14-5).

Martín Barbero (1993) reserva a las culturas nacionales la gestión de los lenguajes que E.T. Hall denomina *silenciosos*, como los relativos al ciclo productivo o social de la comunidad, y les concede una fuerte capacidad para crear valores e identidad colectiva. Al celebrarlas en primavera -23 de abril- u otoño -15 de noviembre-, por tanto en relación con el ciclo productivo agrícola y con el de la vida, las manifestaciones autonomistas no sólo reenviaron al año religioso; también se alimentaron del valor del tiempo social en una cultura popular profundamente ligada a lo agrario. La forma en que algunos participantes vivieron estas manifestaciones dialogan incluso con la fiesta popular e, incluso, con sus elementos carnalescos. Los manifestantes se disfrazaron de diferentes maneras o adoptaron conductas asociadas al carnaval, como portar un féretro por el pueblo de Biscarrués, en peligro de subsistencia por un embalse, o redactar un Vía Crucis sobre el Pacto Autonómico por parte del Rolde Choben, juventudes del PAR. Esa forma de reconocerse y ser a través de la fiesta popular reafirma el papel de la calle o la plaza como "expresión de los deseos, de subversión de códigos y movimientos de la pulsión y del goce" (Martín Barbero, 1993: 231). Pero, además, esta apropiación identitaria de la cotidianidad social fue confirmada y prolongada por los relatos mediáticos. Bajo el título *Zaragoza fue un carnaval autonomista*, Diario 16 Aragón destacó que "cientos de pancartas, globos de todos los tamaños, banderas nacionalistas, insignias, pins, lemas,

paraguas y atuendos de diversa índole" y "la música de charangas, tunos y grupos regionales, ataviados con trajes típicos y llegados de numerosas localidades de la Comunidad" "animaron con sus jotas y sus cánticos el recorrido de la marcha" (24.4.93). Las audiencias quedaron así en condiciones de vivirse como aragoneses a partir de la fiesta social o de lo festivo espectacularizado de lo masivo.

Para Bajtin (1995: 37), el carnaval, debilitado desde el Renacimiento, sigue fecundando "los diversos dominios de la vida y la cultura"; como *segunda vida del pueblo*, abole "las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes" (Ibid, 15), así como "toda distancia entre los individuos en comunicación (Ibid, 16). En palabras de Martín Barbero (1993), el carnaval se opone a la cotidianidad social en la que se interioriza la desigualdad. En esa lógica, además de invitar a abolir otros códigos culturales que ligaban la reivindicación a la clase, lo carnavalesco reforzó el componente popular y alternativo de la movilización. En particular potenció las rupturas culturales con lo estatal centralizado e, incluso, con la hegemonía política y partidista que representaba el PSOE. Como universo de sentido próximo al imaginario popular, esta lectura de lo festivo entró en contacto con otras isotopías, en concreto las conformadas por el Pilar, el Ebro y la Jota (ver 4.2.1.3). En ese entrecruce, provocado principalmente por los discursos políticos y noticieros, se potenciaron los componentes identitarios de lo social y, por tanto, también su fuerza persuasiva como lectura preferida. Los sectores populares quedaron así en condiciones de interiorizar más fácilmente esta construcción de lo aragonés a través de lo popular y festivo de la reivindicación. Como parodia de la vida ordinaria e inversión de la cotidianidad social (4.2.1.3), la carnavalización del centralismo o la comunión festiva alrededor de lo aragonés denotan que se potenció el sentimiento de pertenencia a la comunidad e, incluso, que esa ingeniería afectó a otras identidades colectivas situadas en el ámbito del Estado, de forma preferente a las asociadas con el centralismo o los privilegios entre territorios (4.1.2.1).

Según Soares (1993), la carnavalización del poder hegemónico explicita la rebeldía de los sectores o territorios dominados. Esta lectura va más lejos de la liberación de tensiones sociales o de expresión de la cosmovisión popular que Bajtin (1995: 90) atribuye al carnaval. En este proceso los relatos de los medios reiteraron ese carácter de explosión de expectativas y convicciones sociales que encontraron en las manifestaciones autonomistas e, incluso, enfatizaron lo que había en esas conductas colectivas de alternativa al discurso dominante del Estado centralizado. Sin embargo, esa lógica sólo apareció de forma abiertamente política en algunas conductas marginales: El 15 de noviembre de 1992 a las puertas del Congreso ambos fueron representados mediante un ataúd, al que se disponían a enterrar; el comportamiento de PSOE y PP motivó el Vía Crucis que el Rolde Choben colocó a lo largo de la calle Alfonso, tramo final del acto de 1993 que acabó en la Plaza del

Pilar. Con todo, Bajtin señala que vida oficial y fiesta carnavalesca coexisten, conviven incluso una al lado de la otra como dos caras de una misma página (Ibíd, 90). Aquí los partidos mayoritarios, o lo que representaban, se vieron obligados a actuar a la defensiva a lo largo de la movilización, pero eso no evitó que en las Elecciones Generales de 1993 sumaran entre los dos el 75 % del voto válido. Eso sugiere que algunos comportamientos sobrepasaron la sátira y expresaron la risa liberadora, de victoria sobre el miedo que Bajtin (1995) atribuye al carnaval. Sin embargo, apenas fueron "más allá de la órbita de la concepción dominante" e, incluso, ayudaron a "consagrar, sancionar y fortificar el régimen vigente" (Ibídem). La secuencia de acontecimientos demostró que, lejos de cambiar el orden existente, se reforzó la estabilidad y fuerza de lo estatal. Por tanto, aquella ritualización del exceso y de la transgresión pudo reenviar menos al carnaval que a la apariencia y representación vacía que Bada (1995: 152) atribuye a la *mascarada*:

"1a. Vía Crucis del PSOE y del PP; 2a. PSOE y PP firman el pacto autonómico; 3a. El PSOE dijo que el 23 A era una baturrada; 4a. El PSOE no va a Madrid el 15 N a pedir autonomía; 5a. ¿Contra el 'paro' autonómico?; 6a. El PSOE amenaza con expulsar a los socialistas que vayan al 23 A; 7a. PSOE y PP votan contra la Autonomía Plena en las Cortes; 8a. PSOE y PP contra El Justicia por autonomista; 9a. PSOE y PP no firman el manifiesto de la Autonomía Plena; 10a. PSOE y PP prometen autonomía plena en las Elecciones de 1991; 11a. El PSOE incluye los trasvases en el Plan Hidrológico; 12a. Felipe nos acusa de sentarnos en el botijo; 13a. Para el PP gritar Aragón libre es un exabrupto; 14a. El PSOE y el Ayuntamiento no se suman a la manifestación por motivos electorales" (Diario 16, 24.4.93).

"Aragón, Ebro y Pilar son temas recurrentes de la jota. Pero la prueba de su carácter simbólico es que la jota canta también a la jota y se celebra a sí misma (...). En ella y por ella se reconocen los aragoneses y se dan a conocer a otros pueblos (Bada, 1995: 91).

"El carnaval es la segunda vida del pueblo, basada en el principio de la risa. Es su vida festiva. La fiesta es el rasgo fundamental de todas las formas de ritos y espectáculos cómicos de la Edad Media. Todas esas formas presentaban un lazo exterior con las fiestas religiosas" (Bajtin, 1995; 14).

"Celebrar el carnaval debería ser al menos para nosotros sacar a la calle lo nunca visto, la máscara más formidable, el *prosopon*, esto es, nuestro propio rostro. No, claro, para dar la cara o hacer frente a nada o a nadie, sino para reírnos con todos y de todo" (Bada, 1995: 152).

Esa puesta en cuestión del carácter carnavalesco se prolonga a lo masivo, porque la centralidad del espacio público mediatizado acabó modificando el sentido de la propuesta festiva hecha por las instituciones o los medios y de la fruición que llevaron a cabo las audiencias. En contraste con esos elementos carnavalescos de algunas minorías, este tratamiento institucional y noticiero de la fiesta impuso una lectura preferida del acontecer que invitaba a vivirse como parte de un espectáculo comunitario en el que la participación no suponía otra experiencia que el placer de ir a defender los intereses colectivos. Tras las manifestaciones, los mismos relatos mediales enfatizaron ese sentido lúdico, ajeno a valores partidistas o políticos, de la participación masiva. *La fiesta no eclipsó la conciencia autonómica* (El Día), *Marcha festiva y sin incidentes o La fiesta autonomista* (El Periódico) y *Una fiesta por la autonomía* (Heraldo). Algunos de estos titulares activaron la capacidad de la fiesta para penetrar en el reino utópico de la libertad y la igualdad que le adjudica Bajtin (1995: 14); sin embargo, en su mayoría esta noticiabilidad como acontecimiento únicamente enfatizó el protagonismo del pueblo, el carácter pacífico de los actos y la fuerza que daba a la reivindicación. Como difuminó los aspectos más políticos de estos actos, los medios propusieron una lectura social, comunitaria, de las manifestaciones. Esa forma de invitar a pensarse como comunidad puede ser leída como una trivialización de la naturaleza política de la demanda social. Pero, en la medida que evitó las reticencias sociales a participar en una manifestación (Malo de Molina, 1992a), esta estrategia discursiva adquiere valor táctico porque facilitó la adhesión social sin quitarle sentido comunitario al acto.

Más allá de que PSOE y PP condicionaran su presencia en la manifestación de 1993 a que el acto fuera sólo festivo, y no reivindicativo (116), el sentido político de aquella fiesta por la autonomía y su capacidad para producir emocionalmente identidad queda patente cuando más de cien mil participantes extendieron la bandera aragonesa a lo largo de la Plaza del Pilar o cantaron el *Himno a la libertad*. Aunque fuera volátil, ese clima de exaltación social de lo aragonés llevó al Presidente de la Comunidad Autónoma a aventurar su intención de convocar un referéndum sobre la autonomía plena de Aragón y al Justicia de Aragón a leer un manifiesto con numerosos elementos nacionalistas. La actitud lúdica de aquella conducta colectiva quedaba así transcendida y resemantizada por lo político. Como respuesta social ante la hegemonía que representaba el centralismo, el discurso aragonésista de este acto sugiere no sólo la resistencia mediante el placer, sino algunos de los procesos de codificación alternativa que llevan a cabo las subculturas. Antes de la primera manifestación el Partido Socialista fue advertido de que "pretender neutralizar la manifestación autonomista de hoy acudiendo a argumentos de racionalidad política no constituye una buena receta. Y no lo constituye porque en las manifestaciones de autoafirmación hay un contenido

profundamente sentimental, emotivo y, hasta si se quiere, subversivo" (Díez, P. *iViva la fiesta!*. El Periódico, 23.4.1992). Esta forma de vivir lo real prueba que doce meses después el lenguaje de la fiesta impregnó los comportamientos sociales hasta convertirse en una pauta distinta de interpretación de la realidad para gran parte de los actores sociales.

Además de que prueba que la fiesta fue percibida como una expresión colectiva de identidad o una reafirmación de lo aragonés, esta dificultad del Partido Socialista, e incluso del Partido Popular, para adaptarse al complejo simbólico festivo reivindicativo de la demanda autonomista confirma su valor, por un lado, como código alternativo a la dominación y, por otro, como dispositivo central de identificación social. Estudios de opinión previos a la primera movilización autonomista indicaban que el 61 % de los aragoneses estaba de acuerdo o muy de acuerdo en que Aragón había mejorado desde que existe Autonomía, pero aún así el 78,1 % deseaban que el Gobierno Autónomo reivindicara más ante el Gobierno Central (Mediatique, 1992a). La fuerza de este sentimiento de privación relativa podía avisar de elementos negativos, destructivos o, incluso, violentos en la fiesta reivindicativa de la autonomía o del agua. De hecho, algunos signos vehiculares de la movilización, como las frases *Ni más, ni menos* o *Trasvases no*, sugieren un intento de saldar diversas cuentas históricas en una misma secuencia social. Sender (1978: 10) apunta que "el aragonés no se ha agrupado nunca pacíficamente por las buenas, sino sólo para la defensa o la venganza. Es decir para alguna forma legítima o no de violencia" (1978: 10). En este caso, como el Pacto Autonómico y el anteproyecto de Plan Hidrológico fueron vividos en lo que tuvieron de agresión a los intereses colectivos, la fiesta tenía elementos suficientes para devenir en malestar social. Señala Perceval que "los espacios de opinión pública y su expresión en los medios de comunicación funcionan a través de la polémica" (1996: 117). Esa lógica propició que lo noticiero diera mayor visibilidad al enfrentamiento político sobre lo festivo. Más aún, cuando dialogaba con un imaginario social marcado por la conciencia de dependencia y el sentimiento de agravio (4.2.1; 4.1). Sin embargo, fiesta y reivindicación acabaron conformando un código que facilitó los procesos sociales de identificación, sin que la hegemonía consiguiera contrarrestarlo (ver 4.1):

"Aún despojado de todo su constitucionalismo, ARAGON seguirá viéndose como reino durante todo el siglo XVIII. [...] la desfallecida personalidad histórica aragonesa renació en el Proyecto de Pacto o Constitución Federal de 1873. Aunque esta iniciativa no acabó de culminarse, evidenció la resistencia de algunos aragoneses a perder su identidad histórica" (D.G.A., *Somos un gran equipo*, 1992: 6).

"La conciencia autonomista es la seña de identidad de una población que replantea los viejos paradigmas de lo aragonés [...] La primacía de lo urbano, la universalización de las costumbres, la inserción en una gran corriente cultural (la española) que se despliega por varios continentes [...] todo contribuye a que los habitantes de Aragón poco tengamos que ver con las caricaturas que estuvieron al uso" (Heraldo, *Sentimiento autonomista*, 23.4.93. Suplemento San Jorge).

"Es necesario que todos los aragoneses salgamos a la calle para defender nuestros derechos, somos aragoneses y tenemos que tener los mismos derechos que el resto de las autonomías" (Javier, Radio Zaragoza, Estudio de Guardia. 23.4.93).

"Tenemos que reivindicar muchas cosas, como la autonomía plena; el tema del agua también es importante. En una palabra, tenemos que ser ciudadanos de primera y no de segunda, como somos en este momento" (Manifestante, COPE, Informativo 14,05. 23.4.93).

"De hecho la reivindicación autonomista nunca se limitó a cuestiones competenciales, sino que se extendió a aspectos conceptuales, a la racionalización, digámoslo así, de los sentimientos de identidad y a la asunción como necesidad práctica y urgente de la Autonomía Plena" (Eiroa, 1995: 13).

Este valor político e identitario de la fiesta y de la reivindicación se hace, con todo, más complejo, si se tiene en cuenta la mediación que sobre ambos ejerció lo espectacular (3.1; 3.2: 3.2.2). Para Colombo (1976), el espectáculo atraviesa lo social e, incluso, muta su sentido. Desde esa perspectiva este proceso colectivo se sitúa en el espacio público moderno que, según detalla Habermas (1997: 155) al recordar el ascenso político medial de Berlusconi, transforma el valor político y ciudadano de la participación social, de forma que las masas en movimiento quedan desplazadas por los espectadores conectados electrónicamente entre sí. En esa mutación una nueva masificación mantiene "el poder destructivo" del Estado totalitario y bloquea las libertades comunicativas porque prepara y dispone a los espectadores aislados y privatizados "para una colectivización tutelada de sus mundos de representaciones" (Ibidem, 156). Esta visión escatológica de lo masivo dialoga con otras lecturas culturales y antropológicas que enfatizan la trascendencia ideológica, política y social de la nueva socialidad masiva. Lisón (1992) anota, en concreto, que la fiesta promueve una forma comunitaria de participar y que el espectáculo masivo hace perder esa comunión colectiva desde el momento en que los protagonistas pasan a ser espectadores. Sin embargo, las dudas que estas lecturas ciernen sobre el sentido de este proceso social como movilización identitaria, participación comunitaria y debate político quedan despejadas cuando, siguiendo diferentes enfoques culturalistas

(Curran, Morley y Walkerdine, 1998; Veyrat-Masson y Dayan, 1996 [comps]), se constata el valor de *los espacios públicos contruidos a partir de imágenes mediales* (3.2.2; 3.1.1) para que, incluso en el caso de una supuesta rebelión espectáculo (Colombo, 1976), los ciudadanos-espectadores se imaginen como comunidad a través de un espectáculo de masas.

Al detallar el programa de actos elaborado por el Gobierno autónomo, Heraldo (23.4.93) destacó el homenaje que el Gobierno de Aragón iban a recibir ese día La Bullonera, J.A. Labordeta y J. Carbonell, según un portavoz gubernamental cuyas palabras fueron transcritas textualmente, porque "los tres representan en la canción el espíritu reivindicativo de nuestra tierra"; la entradilla de esa misma información relataba el homenaje, valorando que "un día levantaron la voz de la canción para reivindicar sentimientos y anhelos políticos que lamentablemente aún siguen sin alcanzarse plenamente". Esta inserción de lo espectacular masivo en la fiesta de la reivindicación autonomista alcanzó su máxima expresión en el homenaje que ese mismo Gobierno rindió a *los Magníficos*, equipo del Real Zaragoza que había logrado los mayores éxitos deportivos de Aragón hasta entonces. Este reconocimiento institucional se concretó en un partido de fútbol que fue televisado para todo el Estado a través de Antena 3. Sin embargo, el discurso político construido alrededor de ese acto masivo abundó en referencias al Mercado Interior y a la nacionalidad histórica, sobre todo porque hizo de aquellos jugadores el símbolo colectivo de un pueblo orgulloso de su pasado y capaz de competir con éxito en Europa (117). Antes del partido y por iniciativa de la Plataforma Joven, colectivo de asociación juveniles que lideraba el Rolde Choben del PAR, se extendió a lo largo del campo la misma bandera aragonesa que horas antes los manifestantes habían alzado sobre sus cabezas en la Plaza del Pilar.

Más allá de su valor como espectáculos, la actuación de los cantautores y el partido del Zaragoza se revelan, por un lado, estrategias institucionales para personalizar y generalizar socialmente los ideales de la reivindicación y, por otro, soportes de discursos y *tópica* incluidos en la tematización social de la autonomía plena. Si el recital de música aragonesa teñía el enfrentamiento con el centralismo de los valores progresistas asociados a la etapa de la transición, los méritos de *los Magníficos* personalizaban el eje de comunicación del discurso gubernamental y lema del cartel del Día de Aragón de 1992, *Somos un gran equipo*. Hobsbawm (1991: 153) reconoce al deporte como "un medio singularmente eficaz para inculcar sentimientos nacionales", porque, además unir el mundo privado con lo público, "los individuos menos políticos o públicos pueden identificarse con la nación tal como la simbolizan unas personas jóvenes que hacen estupéndamente lo que [...] todo hombre quiere o ha querido hacer". Hobsbawm (1991: 153) señala, además, que la comunidad imaginada parece más real bajo la

forma de equipo, por lo que este tipo de dispositivos emocionales y simbólicos de identificación se revelan tan efectivos como intencionales. La semiología estructural otorga capacidad a lo lúdico para vehicular valores de tipo persuasivo, en contraposición a lo crítico o lo mítico y pragmático (118), por lo que estos dos espectáculos de masas aparecen como un enorme discurso publicitario en el que el disfrute quedó subsumido en el sueño comunitario vivido por los sujetos.

Los medios incorporaron estos dos espectáculos a sus relatos autonomistas, contribuyendo así a que la sociedad duplicara su participación ya que, a su experiencia como espectadores del acto, sumaron su vivencia como consumidor de los discursos mediales. La sociosemiótica ha probado que la sociedad se identifica y se hace a sí misma mediante un juego de autorrepresentaciones, en el que "la acepción ficcional cede y la espectacularización de lo social adquiere una función constructiva y no sólo catártico-consolatoria" (Grandi, 1995: 214). La ingeniería constructiva se hizo así más compleja, igual que la misma experiencia de los sujetos como participantes. Sobre todo, porque todas ellas acabaron entrecruzándose, incluyendo la vivencia de estos acontecimientos en el marco de la conversación y del espacio interpersonal. Con todo, lo noticiero se situó en el centro del acontecer, hasta el punto de que, siguiendo a P. Champagne (1993: 61), el malestar social pudo apoyarse menos en el acontecer diario que en la representación social construida a través de la comunicación masiva (3.1.1; 3.2.2). En ese viaje a lo espectacular y a lo masivo la comunión colectiva pudo quedar mutada en una presencia pasiva. Sin embargo, eso no excluye que, al darse a sí misma un espectáculo, la sociedad aragonesa pudiera verse y reconocerse, siguiendo a Landowski, "de modo especular" e, incluso, de que en ese imaginarse como comunidad se dotara de unas reglas específicas para realizar su propio juego (en Grandi, 1995: 213). El espectáculo y lo masivo explican, de hecho, el carácter esquemático, simplificador, que acabó dominando los discursos sociales o el arrinconamiento progresivo de lo racional en favor de lo emotivo.

La cultura de masas no persigue la permanencia, sino que se sabe transitoria y muestra afán de inmediatez (4.1.1.3). La centralidad del espacio público mediatizado en este proceso social no mermó la capacidad de los actores sociales y de los discursos para construir identidad, pero explica algunos de sus límites. El silencio que las cadenas de ámbito estatal mantuvieron sobre la movilización aragonesa o la función de *seguidores* de los medios escritos y radiofónicos que cumplieron sus centros regionales (119) prueba que, pese a la retransmisión del partido homenaje a *Los Magníficos*, la televisión apenas ejerció el carácter "de testigo, de notario, de autenticación, de prueba final de aquello que está sucediendo" que se le reconoce (Colombo, 1976: 15). Por tanto, esa capacidad del mestizaje entre fiesta popular y espectáculo de masas no pudo aprovechar la virtualidad de la imagen

para penetrar en las amplias capas sociales aragonesas que sólo viven la realidad noticiara a través de la televisión (Ansó, 1992). La misma centralidad de la prensa zaragozana circunscribe socialmente esta vivencia identitaria de la fiesta y del espectáculo. Más aún, cuando las diversas estrategias promocionales avisa de que, a la manera dibujada por Lambín (1991), algunos de esos diarios usaron la movilización autonomista como una operación de márketing editorial (4.2.2). El hecho de que a los entrecruces con la religión y la política, esta socialidad autonomista sumara lo que M. Mattelart y Stourdze (1984) denominan la mediación institucional del mercado. En concreto, aclara la volatilidad de esta explosión identitaria o la pasividad social ante la disolución de sus demandas colectivas a manos de quienes antes se habían opuesto a ellas (4; 4.1).

4.1.2. Desde la identidad al nacionalismo

Máiz (1997: 172) destaca que, aunque suele apoyarse en un sentimiento diferenciado de identidad colectiva, una movilización nacionalista necesita que esa vivencia de la identidad se vincule a determinados objetivos políticos de autogobierno. Brass (1997: 76) anota a este respecto como esa aspiración de soberanía política que marca el nacionalismo de una acción colectiva puede tomar diversas formas, desde la devolución política administrativa hasta la secesión, y que eso depende del grado de realineamiento político que produce. En cualquier caso, si seguimos las pautas fijadas por Hroch (en Llobera, 1996) para los procesos de construcción nacional, ese carácter nacionalista de la movilización necesita ser asumido por la mayoría de la población, de forma que, convertido en un fenómeno de masas, trascienda la fase de agitación política y llegue a la de identificación nacional. Si un proceso de este tipo exige el dibujo de un discurso nacionalista que vehicule la forma de imaginarse la sociedad y de percibir a los otros (Giner, 1994; López Aranguren, 1994), también requiere una trabada serie de intereses compartidos (Brass, 1997) y factores organizativos sociales, como redes, circuitos de información o instituciones que lo legitimen socialmente (Nagel y Olzak, 1997).

Todos estos argumentos confirman el carácter "no primordial, y por lo tanto producido, y en este sentido inventado o imaginado" (Máiz, 1997: 173) de lo nacional (120), aceptado por los enfoques postmodernos (Smith, 1997). En este caso, lo que hubo de ingeniería social en el proceso autonomista y en su carácter identitario evidencia que se usaron dispositivos sociales y culturales propios de sociedades avanzadas. La complejidad ideológica y política sobre la que se hicieron posible las diferentes vivencias identitarias de lo social denota que, aunque hubiera un sentimiento aragonesista previo, algunos sectores sociales atisbaron la posibilidad de dibujar una cultura, o en

todo caso una idea, nacional. Rosseau ya recordaba que ser una nación requiere a un tiempo identidad y continuidad, una tradición cultural y la creación de una estructura política. El imaginario aragonés todavía mantiene algunos aspectos de su protonacionalismo medieval, por lo que debe descartarse la hipótesis de Gellner (1983) o de Keating (1996) de que este posible nacionalismo de la reivindicación autonomista inventara una nación donde no existían ni siquiera restos previos. Como anota Hobsbawm (1991: 23), las numerosas pruebas de que estamos ante un proyecto constructivista de lo nacional implica, a efectos de análisis, que el nacionalismo precede a la nación. Eso exige hacer visibles los discursos nacionalistas que se formularon y los grupos sociales que, como vanguardia nacionalista, los protagonizaron o se identificaron con ellos (4.1).

Ya se ha constatado que esta movilización social activó procesos de identificación colectiva que incluso permitieron a amplios sectores de la sociedad aragonesa verse y reconocerse como comunidad (4.1). E, incluso, se ha evidenciado que en ese camino hacia la homogeneización social de las conductas, las creencias y los valores identitarios los discursos sociales abundaron en elementos nacionalistas. O se ha constatado que el posible esquematismo argumental y político del proyecto nacionalista pudo ser una exigencia del espacio público mediatizado en el que aquel se gestó o una estrategia de sus propios impulsores para llegar a los sectores más populares de la sociedad mediante la matriz simbólico emocional. Incluso, el liderazgo de las clases medias urbanas de Zaragoza avisan de que estos grupos sociales y algunas instituciones pudieron operar como vanguardia identitaria capaz de activar lo que Hardin (1997) denomina el potencial movilizador de lo nacional. Según Brass (1997), el paso de las comunidades a las nacionalidades exige una aspiración a mayor soberanía, una conciencia de diferenciación cultural o un sentimiento de desigualdad económica. Y anota la conveniencia de que la intelectualidad social sea capaz de proceder acertadamente, pero también la probabilidad de que un movimiento nacionalista puede agotarse si las reivindicaciones de sus élites son satisfechas por los sistemas políticos o económicos estatales (Ibid, 76). El liderazgo del aragonesismo político, la disposición del Presidente de Aragón a pedir un referéndum sobre al grado de autogobierno o el apoyo decidido de las empresas informativas aragonesas a la autonomía plena aparecen así como indicios de una movilización nacionalista; la crisis abierta en el bloque social autonomista por el convenio televisivos y la moción de censura, e incluso la aprobación en las Cortes Generales de un Estatuto de Autonomía descafeinado, se revelan estrategias contra esa virtualidad nacionalista de la reivindicación.

Según Hobsbawm (1989: 188), los movimientos que defienden intereses regionales, locales o incluso sectoriales contra el poder central y la burocracia estatal tienden a ponerse el traje nacional. Ciento

veinte mil aragoneses cantando a las puertas de la Basílica del Pilar, el Día de la Comunidad y en defensa de la autonomía plena de Aragón, "*Habrá un día en que todos/al levantar la vista/veremos una tierra/que diga libertad*", mientras cubrían sus cabezas con la bandera aragonesa, no culminaron una *nation building* e, incluso, ni siquiera dibujaron una idea nacional. Sin embargo, sugieren los efectos de una larga fase de agitación social y una asunción mítica emocional de elementos nacionalistas, como la religión, el territorio o el sentimiento de agravio, cuya fuerza de movilización está bien probada (López Aranguren, 1994). Estas conductas adquieren aún más valor político en la medida que días después se tradujeron en un comportamiento electoral que duplicó el respaldo al partido nacionalista que había personificado la reivindicación. Con todo, cumpliendo la hipótesis de Nagel y Olzak (1997: 10) de que en las movilizaciones étnicas los cambios de comportamiento son temporales, ese realineamiento político se tradujo en silencio social cuando el Estatuto de Autonomía reformado recortó la autonomía plena votada en las Cortes de Aragón y, por tanto, revela los límites nacionalistas de esta movilización. Según Brass (1997: 69), un sentimiento de desigualdad puede generar solidaridad comunal, pero para acabar teniendo éxito requiere, entre otras condiciones, los recursos organizativos necesarios para construir un movimiento político. La exaltación de valores nacionalistas como el pueblo o la bandera y la colaboración del Gobierno con los medios alimentaron la movilización nacional, pero no ocultaron su débil inserción en las redes sociales ni su debilidad como proyecto político (4.1.2.3; 4.2.1).

"Si la conciencia colectiva de la propia identidad es argumento principal para el acceso a un grado u otro de autogobierno, Aragón merece sobradamente acceder al grupo de la primera división de las Autonomías españolas, a la plena autonomía que la Constitución nos reconoce" (Eiroa, E. Discurso institucional San Jorge, 92: 3).

"Al final, los aragoneses vamos a tener que dar las gracias al Gobierno socialista. Con sus aciertos de gestión está consiguiendo [...] que los aragoneses nos sintamos pueblo, una piña ante el acoso permanente e injustificado del centralismo. Hasta hace poco la palabra mágica en Aragón era agua; los socialistas han enriquecido nuestro vocabulario vital con la de autonomía. La unión de ambas, agua para la autonomía o autonomía para el agua, nos ha devuelto el ser o sentirnos pueblos" (Timón. *Dar las gracias al Gobierno socialista*, El Periódico, 21.1.93).

"¿qué proyecto político de autonomía plena para Aragón pueden sostener quienes de la noche a la mañana renuncian a la televisión autonómica para convertirla en una encubierta subvención a un grupo editorial de fuera de Aragón?" (Heraldo. *La Rotonda, Los nervios del Pignatelli*, 7.7.93).

El canto del *Himno a la libertad* como cierre de la concentración en la Plaza del Pilar permite lecturas de corte soberanista, pero también de participación en una fiesta colectiva o en un espectáculo de masas. El enfrentamiento del Gobierno con su homólogo estatal o de las principales instituciones aragonesas con el sistema político estatal de poder puede ser leído como la puesta en cuestión del Estado centralizado, pero también como un intento de presión territorial sobre ese centro de decisiones. Los componentes populares, emocionales y simbólicos de esta reivindicación comunitaria rubrican también la labor de agitación social que se llevó a cabo mediante los discursos míticos y pragmáticos que, según Nagel y Olzak (1997), caracterizan las movilizaciones etnonacionales de las sociedades urbanas y desarrolladas. La lucha por las oportunidades o la fuerza del sentimiento de privación relativa se ajustan a las motivaciones que Brass (1997: 76) apunta para explicar el paso de las comunidades a nacionalidades. Más aún si, como en este caso, ese grado de descontento de la clase dirigente o de amplios sectores sociales va acompañado por la intransigencia quienes representan lo estatal. Desde ese punto de vista el liderazgo del Gobierno de Aragón y de los mismos medios informativos parecen fruto de una oportunidad política que supieron aprovechar. Para Nagel y Olzak (1997: 25), la extensión del sector político promueve la movilización étnica en cuanto que crea una escena competitiva sobre los recursos controlados por el Estado y que alienta la organización étnica a gran escala. El crecimiento del autogobierno, su necesidad de una mejor financiación, la desventaja que suponía la autonomía aragonesa existente respecto a otras Comunidades crearon un universo de sentido que, al dialogar con un imaginario marcado por el agravio, activó conductas de movilización hasta el punto de que en 1992 y 1993 más de cien organizaciones se pronunciaron a favor de las manifestaciones y la reivindicación.

Bandrés (1985: 77) afirma que "la consecuencia más perceptible" del Estatuto de 1982 fue "el nacimiento de un Poder aragonés y de unas instituciones llamadas a ser su voz e inteligencia". Apropiándose de ese carácter de representantes de la comunidad, el Gobierno de Aragón y el Justiciazo promovieron la movilización autonomista y se propusieron como defensores del autogobierno o de los intereses colectivos que se consideraban en peligro (4.1.1.1). Pero, a la manera de lo que hizo el estado liberal para nacionalizar el pueblo (Hobsbawm, 1991; Todd, 1995), usaron ese discurso institucional y su capacidad de liderazgo social para reinterpretar nacionalmente el pasado o el presente y, en general, para darle un carácter nacional a la movilización. El Gobierno de Aragón buzoneó 350.000 ejemplares de la propuesta de Estatuto de Autonomía elaborada por la Comisión Especial de las Cortes de Aragón e incluyó en esa comunicación un saludo del Presidente de la Comunidad: En él se afirmaba que "quienes vivimos en Aragón nos jugamos una parte

importante de nuestro futuro en este texto. Con él podremos mejorar nuestra calidad de vida, nuestras oportunidades de desarrollo. [...] Aragón será lo que seamos capaces de hacer los aragoneses y aragonesas. Juntos somos un gran equipo y este es un momento decisivo para demostrarlo". Esta forma de vivir la movilización y de traducirla en discurso nacionalista se alejan del tono etnonacional sugerido por algunos comportamientos sociales durante las manifestaciones, pero dialoga de forma directa con lo afirmado por Renán sobre la nación durante su conferencia sobre "¿Qu'est-ce qu'une nation?" en la Sorbona en 1882.

Si se tiene en cuenta que este saludo fue distribuido en las fechas previas a la concentración celebrada el 15 de noviembre de 1992 a las puertas del Congreso, queda claro que las instituciones contribuyeron a la agitación social y a la articulación de un simulacro de consenso social que hizo posible la generalización de este discurso nacionalista sobre la autonomía plena y el agua. Por encima del pasado común o de la raza y la lengua, la forma simbólica de lo comunitario aragonés se concentró, por un lado, en la solidaridad generada por los intereses compartidos frente al Estado y otras Autonomías y, por otro, en los lazos culturales compartidos, en la voluntad de ser y seguir juntos o en la promesa de igualdad básica entre todos los ciudadanos. En contra de la tendencia a hacer ostentación de "blasones, escudos y bandera" que Beltrán (1995: 27) halla en el sentimiento aragonés, esta discursivización nacionalista de la movilización queda más cerca de la vivencia cívica de lo comunitario que de una identidad exclusivista y, por tanto, reenvía sobre todo a quienes entienden el nacionalismo como una forma específicamente moderna de identidad colectiva (121). En los discursos de las élites sociales aragonesas, ya se tratara de las instituciones o de los medios, no faltaron atisbos etnonacionales (3.1; 3.2), pero su nacionalización de lo aragonés durante la movilización dialoga más con el concepto de nación puesto en marcha por el liberalismo en el marco del Estado nación que con la concepción culturalista de Herder, Fichte o Hegel. El uso el Presidente de Aragón hizo de la igualdad de oportunidades, la competitividad territorial o la calidad de vida o el proceso mediante el que la autonomía plena y el agua dejaron de ser propuestas partidistas para convertirse en la definición del bien común hacen buena la afirmación de Keating (1996: 71) de que "los nuevos nacionalismos minoritarios tienen una fuerte dimensión cívica y se concentran en el autogobierno territorial, en el mercado mundial":

"Muchas regiones españolas [...] consideran en este momento que la autonomía va a ser una vía para salir del subdesarrollo. Piensan que, en definitiva, las causas de su subdesarrollo están fuera de ellos. [...] en el centralismo. [...] en las relaciones con otras regiones de España" (Clavero Arévalo, en Platón, 1991: 11).

"Me solidarizo con Aragón, pues reclama sus derechos" (Mamadu, inmigrante. Heraldo. 24.4.93. a dos cols).

"En este acto, señores y señoras, estamos reactivando la colectiva imagen de Aragón, esa creación milenaria de energía espiritual y valores político-morales que sigue en marcha hacia el futuro" (Lisón, C. Discurso entrega medallas de Aragón, 23.4.93 [corte realizado por TVE]).

"**Juan Bolea.** ¿Le ha pedido a la Virgen del Pilar que nos eche una mano para sacar adelante la Autonomía?; **Emilio Eiroa.** Se lo pido casi todos los días" (Radio Minuto Aragón. Amores que matan.22.4.92).

La solidaridad comunitaria se articuló a través del sentimiento de privación o agravio asociado a la toma de conciencia de que Aragón era tratado de forma injusta. Se cumplió así lo dicho por Máiz (1997: 171) de que una identidad diferenciada resulta insuficiente para que una movilización colectiva adquiera valor nacionalista, porque aquella necesita que un bloque social interiorice una supuesta opresión, desigualdad o explotación. Al oponerse al Pacto autonómico o al proyecto de Plan Hidrológico Nacional, el entonces Presidente de Aragón argumentó la igualdad constitucional y el sentido de justicia o, como ha dicho después, "esta tierra no está dispuesta a dejar a futuras generaciones un territorio con sus oportunidades de progresar cercenadas" (Eiroa, 1995: 45). La movilización comunitaria partió así y se alimentó de un sentimiento social de menosprecio y de una expectativa de igualdad en el marco del Estado español (4.1.1). Por tanto, actualizó la tendencia que Nagel y Olzak (1997: 19) atribuyen a las periferias desarrolladas, de promover "la solidaridad regional en respuesta a las políticas de extracción y explotación del centro". La competición por los recursos y la conciencia de desigualdad determinó gran parte de esta vivencia nacionalista de la autonomía plena y del agua. Con todo, el sentimiento de privación relativa se concentró en las relaciones económicas, pero incluyó también algún aspecto de las culturales, como puso de manifiesto el intento de construir una televisión propia ante la negativa a la concesión del título habilitante por parte de la Administración Central. En ese combate se renovó el sentimiento de menosprecio y desigualdad respecto a otras Comunidades Autónomas, porque estas ya disponían de televisión propia desde hacía una década. La televisión devino así en estrategia nacionalista (122) que activó también el potencial nacionalista de la animadversión hacia el centralismo estatal.

Keating (1996) y Moreno (1997: 160) enfatizan la tendencia de las Autonomías españolas a repetir procesos de identificación social y de gestión de lo comunitario que reduplican dispositivos nacionalistas equiparables a los usados por el estado nación en su apropiación del patriotismo de

estado. En concreto, Moreno (1997: 148) anota la frecuencia con que en España se entrecruzan ideologías y políticas públicas porque "el interés por resaltar la imagen institucional" conduce a "la instrumentalización exclusivista del ámbito territorial involucrado". El comportamiento de las instituciones públicas aragonesas durante la movilización reenvía a esa práctica desde el momento en que se apropiaron la representación de los intereses colectivos y encubrieron bajo ese discurso una compleja trama de motivaciones particulares. En el acto institucional de San Jorge el Presidente de la Comunidad afirmó que "cuando Aragón reclama Autonomía Plena [...] no se apoya en un nacionalismo radical, revanchista o victimista, sino en concepciones progresistas y profundamente sociales", palabras que retomó Heraldo para titular a toda página *Eiroa*: "*La demanda de Autonomía plena no se apoya en un nacionalismo radical*" (23.4. 93: 5). Aduciendo la experiencia de la Tercera República francesa, Llobera (1996) recuerda que la lealtad e integración nacional resulta tan necesaria para el estado moderno que este se transforma en nación. En este proceso, las instituciones usaron su posición social de poder para hacer de la autonomía plena el criterio de valoración de cualquier acontecer y para pedir el apoyo a la reivindicación como una forma de ser y sentirse aragonés:

"En Aragón no hay nacionalismo, lo que existe es un cabreo general, un agravio comparativo y eso es lo que genera un supuesto nacionalismo" (Ramírez, M.J. Los Nacionalismos, DGA, 1994: 238).

"Lo que a mí me parece es que no es sano inventarse los nacionalismos y creo que un nacionalismo emergente en Aragón [...] es inventarse un nacionalismo" (Peces Barba, *Ibidem*).

Uno de los líderes de opinión más influyentes, G. Fatás, le espetó al Presidente de la Comunidad Autónoma que no creía en un nacionalismo aragonés y sí en un sentir autonomista de los aragoneses; este le contestó que era "muy difícil explicar lo del nacionalismo aragonés" a los aragoneses (Radio Zaragoza, *La Rebótica*, 21.4.1993).

El esquematismo argumental o la facilidad con la que se quebraron las redes sociales autonomistas obligan a considerar la posibilidad de que, tal como Nagel y Olzak (1997: 5) señalan para algunos tipos de movilización étnica, esta reivindicación se circunscribiera únicamente a una serie de manifestaciones de protesta. La culminación de la autonomía plena en un estatuto de mayor autogobierno o la apuesta por el reconocimiento como nacionalidad y por la celebración de un referéndum sobre el grado de soberanía que deseaba la sociedad atisban dispositivos y objetivos propios de una nation building (4.1.2.3); la generalización social de la reivindicación y la centralidad que esta consiguió en la cultura de masas demuestran que la cooperación de las instituciones con los

medios posibilitó el cumplimiento de algunas fases de la agitación y propaganda: La adhesión social mostrada en las encuestas invita a aceptar que la autonomía plena se convirtió, a la manera apuntada por Hobsbawm (1991: 151) en una ideología popular que pasó a formar parte de la vida de los individuos. Incluso la bandera y el pueblo adquirieron tal corporeidad social en los discursos que se convirtieron en símbolos resemantizados de la nación (4.1.1). Sin embargo, la influencia que la masificación tuvo en los contenidos de la reivindicación y en el sentido de la participación social dibuja límites en el perfil político nacionalista de la reivindicación, más aún cuando las propias instituciones autonómicas aceptaron trasladar el debate identitario al espacio mediatizado y convertir gran parte del acontecer nacional en un media event o en un espectáculo público (3.1.2; 3.2.2).

Oltra (1994: 205) sostiene que el nacionalismo toma la nación como la medida de todas las cosas y su única razón de ser; Smith (1997: 60) constata la tendencia de los nacionalistas a interpretar selectivamente el presente "de acuerdo con una ideología de autenticidad nacional". Ese tipo de conductas nacionalistas propició que la fuerza de la animadversión hacia los otros denotase atisbos de exclusivismo identitario. De hecho, esa vivencia etnonacional de la alteridad afectó a la forma de vivir lo español y otras identidades territoriales (4.1.2.1): Aunque no puso en peligro el sentimiento de integración en el Estado, este esquematismo argumental deterioró, por un lado, las imágenes de los líderes socialistas y del Gobierno Central y, por otro, mapa de identidades compartidas entre lo aragonés y lo español o lo catalán y lo vasco (Ansó, 1993, 1994). Según Moreno (1997: 142-3), la crisis de legitimidad social de las instituciones estatales constituye una de las marcas políticas de las movilizaciones nacionalistas, lo que da sentido político a esa desvalorización de lo estatal durante la reivindicación. Siguiendo a Fox (1997: 205), esta crítica al Gobierno Central reenvía a los nacionalismos regionales españoles que no pretenden "ser nacionales, ni necesariamente separatistas, sino enfrentarse al centralismo castellanófilo". La insistencia gubernamental en la intención integradora de esta movilización (Eiroa, 1992a/b) o en el carácter abierto de los aragoneses a todo tipo de corrientes de pensamiento y sociedades (DGA, 1992a) contrarresta otras negaciones de la pluralidad identitaria. Sin embargo, leídas como respuesta a las acusaciones socialistas de radicalismo nacionalista, denotan la naturaleza defensiva que Hobsbawm (1991: 179) encuentra en los movimientos nacionalistas europeos del periodo 1989-91 o que Keating (1996: 70) atribuye a los nacionalismos subestatales en su necesidad de apoyarse en una base territorial para hacer frente a las realidades políticas y económicas de la globalización.

Estas dudas sobre el posible proyecto de construcción nacional no derivan de que las aspiraciones soberanistas de los impulsores de la reivindicación autonomista se situaran en el marco de la

Constitución. La mayoría de los ponentes en las jornadas sobre nacionalismo organizadas por el Seminario de Investigación para la Paz negaron el carácter nacionalista de la movilización aragonesa, aunque una minoría habló de un nacionalismo emergente; el mismo Partido Socialista reiteró los intereses partidistas de las manifestaciones y los peligros de la exaltación nacionalista que suponían. La demanda de mayor soberanía abre la puerta, según Keating (1996), a considerar que estamos ante un nacionalismo subestatal, aunque esa aspiración soberanista no rompa con el Estado. En este caso, la etiqueta de nacionalista o de autonomista a la reivindicación tuvo mucho de estrategia política y, por tanto, aclara poco el valor identitario de la movilización: Las reticencias que amplios sectores de la sociedad aragonesa, de forma especial en la burguesía urbana, muestran hacia el nacionalismo explica que el PSOE intentara deslegitimar socialmente la autonomía plena atribuyéndole valores nacionalistas; esa misma lógica aclara que la Mesa de Partidos afirmara que *"por encima de las diferencias nos une la reivindicación"* (El Periódico, 22.4.92) o el Gobierno autónomo reiterara que era *"la fiesta de todos los aragoneses"*. En ese combate esta demonización del nacionalismo devino en un intento más de renovar la hegemonía del centralismo político o en la asunción de que esa etiqueta nacionalista constituía un estigma peligroso para el éxito de la movilización:

"Cuando en la realidad nos encontramos con un nacionalismo emergente, lo que ocurre es que no se reconoce, siendo así que la Constitución permite esa cuarta o quinta nacionalidad" (Felices, J.L. en DGA, 1994: 235).

"El conflicto surge cuando quienes se consideran más que suficientemente dotados de identidad nacional, sin apenas necesitar mencionarla, la ven cuestionar con ignorancias, bromas, desprecios y, en definitiva, inconfesables razones de estado que no resisten argumentos racionales [...]. Aragón no necesita llamarse de ningún modo, que se sabe y se entiende sin más, pero sí, para que nos atiendan y nos respeten, nos hemos de llamar nación, nos llamaremos nación" (E. Fernández Clemente. DGA, 1994: 321).

"El nacionalismo en Aragón es casi un sentimiento privado, cosa de pocos aragoneses y algún asturiano" (Bada, 1995: 157).

Según Brass (1997: 76), cuanto más extendida esté la competencia y más intransigente sea la élite dominante, más probable resulta que los descontentos del grupo minoritario se vuelvan hacia el nacionalismo. A este respecto llama la atención que estas mutuas acusaciones sobre el radicalismo nacionalista de la movilización aragonesa comenzara con la concentración ante el Congreso y culminara en la moción de censura; en cambio, ese debate estuvo ausente en la primera manifestación de 1992. Ningún titular mediático incluyó el término nacionalista ligado a la

manifestación o a la Autonomía Plena en las semanas previas al 23 de abril de 1992; cuando se usó por primera vez (Forcadell, C. *Nacionalismo y democracia: el 23 A*, El Periódico, 21.4.92) se aplicó a las nacionalidades históricas, no al proyecto de ningún partido aragonés. Por el contrario, coincidiendo con un incremento de la tensión social y política, se explicitaron las acusaciones de nacionalismo radical a los promotores de la reivindicación y esa tematización política se trasladó a los medios con un matiz crítico o despectivo. De hecho, quienes se oponían al convenio audiovisual intentaron desactivar este dándole el calificativo de *nacionalista*, estrategia seguida también por el candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma en la moción de censura (BOCA, 67: 2062). Desde ese punto de vista la estigmatización del nacionalismo acabó siendo una de las estrategias que debilitó la movilización y reforzó la dominación de lo estatal.

Horas antes de la primera manifestación (Antena 3 Radio. Informativo 8,30. 22.4.92), el Secretario Provincial del PSOE de Huesca, Marcelino Iglesias, atribuyó esta a "la necesidad que tiene un partido neonacionalista como es el PAR de estar permanentemente en confrontación con Madrid". Esta toma de posición reproduce esa estrategia de dominación de lo estatal que, como recuerda Hobsbawm (1991: 98), reserva despectivamente el término nacionalista para todo discurso identitario que no sea el *patriotismo de estado*. Pero, al mismo tiempo, pone de manifiesto el liderazgo político que el aragonesismo político moderado ejerció sobre la reivindicación. Cuando analiza el paso de las comunidades a las nacionalidades, Brass (1997: 79) destaca el valor de "una organización política que consiga identificarse con la comunidad más que meramente representarla", por tanto con "empuje para convertirse en el único representante político de la comunidad". Aprovechando las posibilidades institucionales y comunitarias que ofrecía la Presidencia de la Comunidad Autónoma, el PAR personificó la representación de los intereses aragoneses a los ojos de la sociedad, como prueba el incremento de votos que obtuvo en las Elecciones Generales. Desde esa perspectiva, y aunque el perfil de su proyecto nacional fuera tan bajo que apenas sobrepasó una tematización esquemática de la autonomía plena (3.2; 3.1), su capacidad monopolizar la reivindicación tiñe esta también de ribetes nacionalistas.

Giner (1994) anota que el nacionalismo es débil en doctrina y fuerte en sentimiento. Por tanto, el esquematismo argumental de la autonomía plena o de la defensa del agua y la dramatización con que la reivindicación aragonesa enfatizó la solidaridad comunitaria reafirman el componente nacionalista de la movilización. Antes de la primera manifestación el PSOE llegó a pedir que la Mesa pusiera contenido político al lema *Autonomía Plena ya* y dejara de hacer *demagogia barata* (El Día, 17.4.92). Sin embargo, los partidos convocantes rehuyeron ese diálogo porque hubiera mostrado que no

todos "pensamos lo mismo sobre la Autonomía" (Norberto Caudevilla, representante del PAR. Diario 16. 3.4.92). Los intentos del PSOE por llevar el debate sobre la autonomía plena al terreno ideológico y al pensamiento lógico no encontraron eco en los medios, ni en las instituciones ni en la Mesa de Partidos. Todos ellos se empeñaron en afirmar el componente dramático de la reivindicación y en comunicar empáticamente con la sociedad aragonesa. Esa estrategia posibilitó que, en una sociedad donde la fuerza de lo local (Mairal, 1996) y lo provincial (Bada, 1995) dificulta la construcción de identidad aragonesa, la autonomía plena o del agua se vivieran sin tensiones sectoriales o territoriales, haciendo incluso compatibles posiciones antagónicas, como las de quienes se oponían a los embalses o los demandaban. Según Máiz (1997: 195), la dimensión nacionalista se mide por la capacidad para aglutinar a las instituciones sociales. Esa articulación del consenso social, plasmado en el bloque social formado por las instituciones o en los comportamientos electorales de los zaragozanos, acerca también esta movilización a lo nacional:

Elecciones Generales Zaragoza capital. PAR.

	1989		1993	
	%	votos (miles)	%	votos (miles)
Centros	10.9	4,1	16.8	7,5
Casco Viejo	11	2,6	18.2	4,8
Almozara	9.4	1,3	21	3,8
Universidad	10.6	3,7	18.1	7,4
Hispanidad	8.9	0,9	18.6	2,5
Delicias	10.5	6,1	23.0	16,4
Las Fuentes	9.6	2,5	22.3	6,9
San José	10.6	4,2	22.5	10,3
Torrero	10.3	1,8	21.4	4,5
M.Izquierda	8.9	3,2	20.3	9,7
Rurales N.	13.6	1,1	23.7	2,3
Rurales O.	8.8	0,5	16.2	1,1
TOTAL	10,2	32.025	20.4	76.934

Fuente. Elaboración propia a partir de datos oficiales.

Esa dramatización de la realidad, que Gubern (1974) considera especialmente persuasiva, está en la naturaleza del discurso medial, pero no tanto en la de los discursos institucionales o políticos. De ahí que su preeminencia en estos intercambios simbólicos ponga de manifiesto la cooperación entre

medios e instituciones sociales y, sobre todo, la socialidad mediatizada en la que se construyó la reivindicación (3.2.2; 3.1.1). La manifestación de 1992 sólo empezó a consolidarse socialmente a partir de la oposición decidida del PSOE y de la polémica que los medios construyeron basándose en esa decisión. Máiz (1997: 187) atribuye un alto potencial movilizador a una adecuada estructura de oportunidad política y eso da valor político al clima de opinión que en aquellos momentos vivía la política española: El desgaste del proyecto socialista y su relación con el pujolismo posibilitó que, por un lado, los demás partidos instrumentalizasen la reivindicación para acentuar la caída del PSOE y, por otro, que los medios aragoneses hicieran de los dirigentes sociales los agresores de los intereses colectivos, tal como demandaban una parte de sus audiencias (3.2.2; 3.1.1). Si esa coyuntura política marcó la construcción social de la alteridad española, también afectó a las percepciones que de lo catalán tuvieron los aragoneses: A la supuesta divergencia de intereses que movían a Aragón y Cataluña en relación al autogobierno como al agua, explícita desde el momento en que los mediadores sociales de Aragón miraron como principal beneficiado de los trasvases al Arco Mediterráneo o cuando el Grupo Parlamentario de CIU defendió en las Cortes Generales que no se diera a Aragón el reconocimiento de nacionalidad, se sumó la vivencia social aragonesa de que el apoyo político que prestaba CIU a la gobernabilidad de España se traducían en ventajas políticas e inversoras para Cataluña.

Keating (1996: 58) apunta que los nacionalismos minoritarios se vinculan a la acción política no mediante las lógicas secesionistas, sino a través de la reivindicación de derechos o la promoción de una política territorial y, por tanto, persiguen más la construcción social que el logro de un Estado. Este discurso se aleja de un pensamiento dominante que asocia nacionalismo con independencia o soberanía política plena, pero en este caso da valor nacionalista a esa identificación de lo comunitario con una defensa de intereses colectivos que está en peligro por la competencia con otros territorios. Además de que, como señala Keating (1996), la soberanía ha dejado de ser absoluta y el poder se ha dispersado, este intento de *hacer país* a través de una definición del bien común y de su búsqueda mediante la reivindicación ante el Estado se ajusta a esas bases sociales "nuevas y a menudo más amplias" que Keating (1996: 70) adjudica a los nuevos nacionalismos subestatales. El hecho de que ese tipo de movilizaciones étnicas no se alimenten tanto del determinismo cultural y del diferencialismo excluyente que Perceval encuentra en el "nacionalismo integral" (1995: 100) como de una comunidad de intereses que se confronta cívicamente con los otros (Brass, 1997; Hardin, 1997) explica que lo aragonés fuera percibido a partir de la diferencia con otros grupos (123), pero sin excluirlos (4.1; 4.1.1.4).

El sentimiento de pertenencia a un grupo se apoyó en una solidaridad comunitaria de intereses y en una representación compartida de lo real que se expresó en la adhesión a unos mismos símbolos, relatos y discursos. Sin embargo, el carácter no exclusivo de gran parte de la identidad producida durante la movilización autonomista se aleja de la lealtad e identificación con una única nación que, según Tortosa (1996), caracteriza al nacionalismo decimonónico. En la medida que se aproximó más la deferencia, el respeto y la convivencia dialógica que a la exclusión del otro, este imaginarse como comunidad se situó dentro de esos mapas de identidades múltiples y simultáneas que, según Keating (1996: 71), permiten al sujeto otorgar la prioridad a una u otra sin contradicción insalvable. Cuando reiteraron el respeto a la Constitución o la tolerancia como principios de la movilización autonomista, los discursos gubernamental y mediático explicitaron el sentimiento de pertenencia a lo español y la complementariedad con que amplios sectores sociales viven la relación de lo aragonés y lo español (Díez Nicolás, 1991; Ansó, 1992; 1993); ese carácter abierto e integrador de la movilización se tradujo en la presencia de inmigrantes o extranjeros en las manifestaciones, algo que los medios convirtieron en noticia para enfatizar el carácter abierto de la identidad aragonesa. Estas conductas dialogan con las nuevas formas de vivir lo nacional que le han llevado a Hobsbawm (1991: 202) a afirmar que, fuera del marco del estado nación, ser inglés, irlandés o judío, o una combinación de las tres cosas, "es sólo una manera que usa la gente para describir su identidad entre las muchas otras que emplean para este propósito":

"Si queremos proyectar en España y en Europa nuestra creatividad colectiva [...], necesitamos antes fortalecer nuestra identidad, tomar conciencia de que necesitamos sentirnos más aragoneses para poder así ser españoles y europeos" (Eiroa, Mensaje institucional San Jorge 93: 3).

"Somos diferentes a nuestros vecinos, pero también distintos unos aragoneses de otros [...] su variedad en la unidad y la variedad de nuestras tierras y de nuestras gentes, ni el proceso de su unión ni su fértil hibridismo. En el cañamazo multicolor de Aragón se conjugarán los más variados hilos que, pese a sus aparentes disonancias, formarán la unidad política y cultural" (Beltrán, 1995: 41).

Según Llobera (1996: 260), la nación ha resultado ser más flexible de lo que se esperaba, ya que la identidad nacional se ha hecho compatible con la asunción de niveles crecientes de identidad múltiple. Prolongando ese discurso, Hobsbawm (1991; 202) asume que, tras los términos nación y nacionalismo ya no perviven ni las entidades políticas que se calificaban de tales ni los sentimientos que incluían en otro tiempo. En momentos como los vividos durante la polémica audiovisual, algunos

medios se apropiaron nacionalistamente de lo aragonés para vestir de identidad colectiva lo que, en gran medida, era sólo defensa de los intereses empresariales (3.2.1; 3.1.1); durante la reivindicación autonomista algunos intelectuales, e incluso una parte de los relatos mediales y partidistas, se alimentaron y alentaron vivencias étnicas de la identidad colectiva, bien porque recurrieron a mitificaciones discursivas del pasado a la manera de los cronistas del Reino, bien porque se apropiaron de algunos estereotipos de la demonización del nacionalismo (124) para reforzaron la movilización mediante la construcción de un *enemigo*. Según Smith (1997), las élites sociales están en condiciones de cubrir las primeras fases de la movilización nacionalista, sobre todo por su capacidad para favorecer la toma de conciencia redescubriendo el pasado o reinterpretando el presente. Sin embargo, como anotan Máiz (1997) o Llobera (1996), sólo desde el entramado de redes e interacciones que conlleva la comunicación social resulta posible una agitación política de carácter masivo. En este caso, la tematización identitaria de la reivindicación atravesó la cultura de masas y se instaló en la conversación (3.2.2), de forma que gran parte de la sociedad vivió el acontecer y los discursos desde posiciones comunitarias y, en no pocos casos, nacionalistas.

Los medios de comunicación operaron como relatores del acontecer desde un nosotros que personificaba a la colectividad. Además, como instituciones sociales, lideraron la movilización social y, en algunos casos, la dotaron de atributos nacionales. Igual que su primacía convirtió en masiva la demanda autonomista, también hizo de esta una conceptualización política débil y una formulación marcada de registros dramáticos (3.1; 3.1.1). Aún así lo medial se convirtió en el espacio donde se generó identidad aragonesa y, sobre todo, donde se construyó gran parte del discurso nacionalista (4.1.2.3). A la manera de lo que ocurre en las sociedades modernas urbanizadas, se convirtieron en vehículo de cohesión social y portadores del querer ser colectivo, haciendo suya de forma enfática la reivindicación aragonesista e, incluso, formulándose durante la polémica televisiva como los únicos defensores de la autonomía plena (4.1.1.3). El hecho de que usaran este relato autonomista para reforzar la fidelidad de sus públicos no oculta que sus relatos, a la manera que Mattelart (1993: 117-8) atribuye a los medios norteamericanos por su representación de la *carrera espacial*, favoreciera la identificación nacional de gran parte de la sociedad. Trasladando lo dicho por Martín Barbero (1993: 179) sobre la contribución de lo masivo a las diferentes *nation building* hispanoamericanas, una parte de los medios aragoneses posibilitó que amplios sectores sociales hiciera suyas las aspiraciones políticas de sus instituciones y, por tanto, que esta se convirtiera en pueblo y nación.

Esta forma de construir la nación desde la noticiabilidad refuerza la posibilidad de que, como afirman quienes niegan la existencia de un nacionalismo aragonés (Mairal, 1996; Bada, 1995), los

componentes nacionalistas de esta movilización fueran creados no desde el vacío, pero si desde un cierto elitismo social. Sin llegar a la construcción de diseño a la que se refiere Keating (1996), este tipo de construcción supuestamente nacionalista estaría alejado de la cotidianidad de la gente corriente de Aragón y pudo haber sido, incluso, una imitación del nacionalismo vasco o catalán. Esa hipótesis se refuerza si se tiene en cuenta que estas Comunidades operaron como referencias tímóticas para el aragonesismo político moderado. Con todo, la fuerza de los reenvíos al pasado comunitario y al imaginario colectivo avisa que, aunque estuviera tan aculturada que pareciera inexistente, esta invención de lo aragonés se alimentó de una realidad preexistente. La misma adhesión social a las instituciones políticas representativas del autogobierno sugiere, siguiendo a Llobera (1996: 13), la huella de la *longue durée* y, por tanto, que la movilización autonomista escribió una página más sobre ese lento precipitado de la historia. La fuerza con que se demonizó el centralismo político o del sentimiento de animadversión hacia lo catalán difícilmente se entiende, como forma de percibirse y vivirse como comunidad, sin reenvíos históricos como el Privilegio General (125) o las *Alteraciones de Aragón*.

"La *Coronica* gira en torno a una idea central [...]: mostrar que los aragoneses rigen desde el principio su destino, que la historia de Aragón es historia pensada, dirigida, consciente. Para probarlo multiplica panegíricos, diatribas, alocuciones y discursos majestuosos" (Lisón, 1992: 101).

"Encuestas previas a la firma del Pacto Autonómico ya atribuían a Aragón porcentajes de conciencia de identidad similares a Cataluña, Navarra o Galicia y únicamente por debajo de Canarias o Euskadi. De ahí que [...], sólo desde la mala intención o el desconocimiento de lo que somos los aragoneses, pueda afirmarse que la reivindicación autonomista fue una respuesta artificial alimentada por intereses de partido. En Aragón se ha conformado un sentimiento de identidad aragonesa y de discriminación que, aunque permaneció en latencia hasta 1992 por el carácter paciente de los aragoneses y, especialmente, por la expectativa constitucional de que a los cinco años sería posible igualarnos con las Autonomías del 151, a partir de entonces ha estallado con fuerza" (Eiroa, 1995: 70).

"Zaragoza, de una parte, es una gran ciudad y un importante nudo de comunicaciones que, como tal, la despega de su propia tierra [...]; pero, de otra, es el pueblo más grande de Aragón [...]. Vivir en Zaragoza es, quizás, para los aragoneses una manera de huir de su tierra [...] quedándose en ella" (Bada, 1995: 78).

"Hace algunos años, antes de que España se configurase administrativa y políticamente como un 'Estado de las Autonomías', era difícil que las gentes de Aragón se planteasen el problema de su propia personalidad, probablemente porque parecía innecesario hacerlo y obvias las circunstancias que lo determinaban" (Beltrán, 1995: 18).

"La reforma del Estatuto de Autonomía ha vertebrado las dos últimas campañas, presentándose como la única vía para eliminar las diferencias con las tres Comunidades históricas y Andalucía" (Chueca y Montero [eds], 1995:133).

La misma demanda de nacionalidad o del concierto económico bilateral con el Estado cobran sentido, en gran medida, en lo que tuvo de continuidad con algunos elementos del protonacionalismo aragonés. El posible valor nacional de esas dos propuestas reenvía al fuerismo y a la vaga referencia a los derechos históricos de Aragón que recogía el Estatuto de Autonomía de 1982. Según el informe de Ebrópolis (1997: 71), las élites sociales aragonesas, localizadas en Zaragoza, miran abiertamente "un exterior cuya referencia primordial es la nación española y el europeísmo, lo que reduce los contenidos excluyentes de un nacionalismo regional". Esta actitud ante el fuerismo sugiere que la sociedad aragonesa ha interiorizado la castellanización jurídica hasta considerarla actualmente su marco jurídico, mientras lo foral pervive en actividades marginales y en unos pocos colectivos profesionales. Así se puso de manifiesto, incluso, con la supresión en el Estatuto reformado de las competencias relativas al Derecho civil aragonés que el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de 1982 reconocía al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Pasó desapercibida para la sociedad, incluida los medios, hasta que unos expertos foralistas la denunciaron. Desde una óptica clásica del nacionalismo, este silencio social ante lo foral se revela como una prueba de la pérdida de hechos diferenciales en una sociedad tan mestizada como la aragonesa o, más bien, como ha dicho Mairal (1996: 87), el fracaso de la sociedad y de los partidos "en la construcción de una identidad política aragonesa y, por tanto, de un discurso nacionalista". En este proceso moderno y urbano que fue la movilización autonomista esa ausencia o debilidad de lo foral en la autonomía plena indica, también, la dificultad de quienes impulsaron la autonomía plena por reformular el fuerismo aragonés y situarlo en la lógica de la modernización que guió la mayoría de sus discursos.

De hecho, la reducción de la foralidad al concierto económico sugiere que de los derechos únicamente interesó el aspecto económico, la oportunidad que ofrecían para mejorar el sistema propio de financiación autonómica. Cuando analiza la inserción del interés propio en la solidaridad comunitaria, Hardin constata que los individuos perciben como "ventajoso contribuir al potencial éxito del grupo al que se pertenece" (1997: 105). Igual que esta lógica explica la centralidad de lo

pragmático, especialmente de los aspectos económicos de la reivindicación, también aclara que sectores aragonesistas relevaron autónómicamente lo foral para concentrarse en el logro del concierto económico. Más aún, cuando este tipo de acuerdo con el Estado se había revelado especialmente beneficioso para los territorios que lo disfrutaban y la autonomía plena se alimentaba del tópic *ni más ni menos* que los demás territorios del Estado. Por otro lado, tomando como referencia la capacidad de la lucha por los recursos para activar movilizaciones de carácter étnico en las sociedades urbanas y desarrolladas (Nagel y Olzak, 1997: 14), esta resemantización de lo foral se sumó incluso al discurso de la competitividad territorial. Por tanto, siguiendo a Tortosa (1996), este uso de lo foral reforzó los discursos de clase que, bajo la defensa del bien colectivo, buscaban beneficios sectoriales de las instancias políticas estatales y autonómicas. Como propició la identificación de algunas élites sociales, especialmente urbanas, esa reducción de lo foral al concierto se revela como otra de las estrategias particulares enmascaradas bajo el traje nacional con el fin de buscar la adhesión social y algunos apoyos institucionales (3.1.2.2).

4.1.2.1. La percepción del otro

Perceval, 1996: 106) anota que se necesita la existencia de otros para definir lo que uno es y sus fronteras. La forma en que se vivieron como aragoneses amplios sectores sociales tuvo mucho que ver con la manera en que percibieron sus relaciones con otras identidades territoriales o comunitarias. De esa forma, a la identidad aragonesa generada por los usos que se hicieron de la historia, las instituciones, el territorio o la cultura, se suma la que aportó el diálogo que, en esa percepción de sí mismos, los aragoneses mantuvieron de forma especial con las identidades que, como lo español o lo catalán y lo vasco, tenían algún tipo de repercusión inmediata en esta reivindicación social. Para los discursos sobre el nacionalismo, la forma en que son percibidos los *demás* no sólo condiciona el tipo de identidad que se produce, sino también el carácter nacional de la movilización. En este caso, la combinación de elementos cívico territoriales y étnicos no otorga valor nacionalista a la demanda autonomista ni tampoco lo desmiente. A ese respecto, adquiere más relevancia la posibilidad de que esa vivencia de los otros alimentara el ansia de diferenciación política e, incluso, de soberanía (Oltra, 1994; Tortosa, 1996). De hecho, si se atiende a que se trataba de lograr el máximo autogobierno permitido por la Constitución o de igualarse a las Comunidades más avanzadas del Estado, la aspiración a una autonomía plena tuvo mucho de mimetismo respecto a lo vasco y catalán. A lo largo de este proceso social amplios sectores sociales se vivieron como comunidad y participaron en la reivindicación a partir de esa ambivalencia de parecerse a esos otros y, al mismo tiempo, de hacer frente a su superioridad.

Tanto las relaciones de semejanza como las de diferenciación se alimentaron de esas referencias a los otros. Días antes de la manifestación de 1993 el Presidente de la Comunidad Autónoma afirmó que el trato injusto que el Gobierno Central estaba dando a las expectativas de los aragoneses había reforzado en Aragón un sentimiento de identidad que, lejos de ser inventado, tenía origen milenario; en esas mismas fechas Heraldo de Aragón, dedicó su suplemento especial de San Jorge al protagonismo cobrado por la sociedad aragonesa y la confianza hacia el futuro que proyectaba su comportamiento. Además de sugerir en qué forma se construyó el sentimiento social de autoestima, este tipo de discurso y de práctica profesional denota que, sin transgredir el modelo constitucional ni el respeto a la pluralidad de identidades (4.1.2), las instituciones y los medios invitaron a la sociedad a vivirse míticamente, idealizando sus propias cualidades, ya que así se estaba en mejores condiciones para competir con los demás, de ser frente o junto a las demás identidades. Tras las dos manifestaciones autonomistas celebradas en Zaragoza en 1992 y 1993, los medios reflejaron que colectivos extranjeros, ocasionalmente de paso por Zaragoza, se habían sumado a la reivindicación de autonomía plena; en algún caso, llegaron a destacarlo incluyendo fotografías de varios jóvenes africanos o de un grupo de japoneses que llevaban en la solapa anagramas del PAR. Como en otras ocasiones, esta conducta revela que los otros se vivieron como compatibles a uno mismo, incluso aunque se compitiera con ellos por los recursos del Estado y de la Unión Europea o por una posición en el mercado:

"los mejores trabajadores del mundo, pactistas y conciliadores, amantes del diálogo, independientes y abiertos al exterior. Es el capital de los aragoneses que también contamos con una situación inmejorable para catapultarnos hacia la Europa del año 2000" (Frago, J. *Mucho capital social para tan pocas ideas*. Heraldo de Aragón, Suplemento especial San Jorge, 23.4.93).

"[...] una joven de Gambia pedía Autonomía plena para Aragón y José Antonio Rey del Corral aprovechó la coyuntura para pedir solidaridad con Panamá" (El Periódico, 24.4.93).

"Vázquez, desconocido en Aragón, es navarro, su vida profesional ha transcurrido entre Bilbao y Madrid [...] naturalmente era mucho más lógico que el director de un ente que aspira a ser una televisión aragonesa fuese un navarro. Naturalmente, ningún periodista aragonés está capacitado para ese puesto" (Berdún, J.J. *El director*, Diario 16. 1.8.93);

"[...] O sea, la gran tele aragonesa que, ahora, entregada a una empresa con sede en Madrid y presidida por un catalán, será dirigida por un navarro. Eso sí, el dinero (en miles de millones) será aragonés ciento por ciento" (Trasobares, J.L. *El límite*. Heraldo, 10.8.93).

Sin embargo, otros comportamientos y estrategias sociales denotan un acusado etnocentrismo e, incluso, una apropiación de la identidad o de lo nacional llena de matices ideológicos. Durante el conflicto audiovisual, y en el intento de crear un estado de opinión acorde con sus intereses empresariales, *Heraldo de Aragón* y *Diario 16* cuestionaron el nombramiento del periodista que iba a dirigir la programación de Antena 3 regionalizada para Aragón aduciendo que no era aragonés. Estas actitudes sugieren que algunas élites sociales se vivieron como aragonesas a partir de sus propios intereses. Sobre todo, cuando a la manera apuntada por Nagel y Olzak (1997) o Hardin (1997), hacían referencia a la competencia territorial por los recursos o la lucha por las oportunidades. De hecho, en esa clave de lectura el Pacto Autonómico y el Plan Hidrológico, proyectos impulsados desde el centro del poder político del Estado, aparecen como decisiones capaces de producir movilizaciones etnoidentitarias en una sociedad urbana desarrollada, como la aragonesa. Por un lado, activaron una conciencia secular de privación relativa por parte del Estado centralizado; por otro, reenviaban a un imaginario social marcado por la conciencia de decadencia política y económica. En los primeros días de la polémica hidráulica *El Periódico* relacionó los trasvases con los intereses de Cataluña (*Un informe catalán apoya el trasvase del Ebro*, *El Periódico*, 3.1.93) y uno de los Portavoces del Gobierno Autónomo, el Consejero Luís Acín, relacionó los embalses del anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional con el hecho de que el Ministro J. Borrell fuera catalán (7.4.2).

Al margen de lo que en ellos hubo de ideología, estos discursos evidencian que en esta movilización existió lo que Perceval (1996: 113) denomina "el sentimiento de antipatía contra el otro" e, incluso, que esa motivación alentó la reivindicación desde sus comienzos y luego favoreció la exacerbación identitaria. Puesta en relación con lo catalán o con lo castellano, esta vivencia negativa de la alteridad dialogó con el sentimiento de inferioridad o de agravio que el imaginario aragonés atribuía a los vecinos más poderosos. Según Perceval (1996: 113), la animadversión hacia el contrario se radicaliza "en el momento en que una de estas comunidades, la dominante, desea forzar una asimilación de la otra o la impone simplemente en un proceso que siempre es violento, sea dulcemente a través de la aculturación o reglamentado en normas agresivas". Y el análisis de los Cultural Studies ha puesto de manifiesto que, si los dominantes y los sin poder se disputan su relación a través de los discursos y de los signos, la diferencia cultural debe ser repensada a partir de las relaciones de jerarquía y dominación (Gilroy, 1998). Los relatos de algunos medios, como *Radio Zaragoza* al comienzo de la polémica por el Plan Hidrológico Nacional (7.4.2), y las posiciones de algunas instituciones, como la

Iglesia tras el Pacto Autonómico (7.4.2.), denotan que no sólo el aragonésismo político vivió estas dos decisiones del Gobierno Central como una injusticia y una agresión a los intereses colectivos.

La animadversión hacia lo castellano, lo vasco o lo catalán no fue, por tanto, producido artificialmente para la ocasión. Más bien emergió del imaginario social, donde ha permanecido secularmente mediado por las relaciones de poder y por un cierto etnocentrismo. En esta ocasión esa percepción negativa de algunos otros se exacerbó por los propios miedos a la pérdida de oportunidades ante el futuro y por el tono prepotente de quienes trataron de imponer desde lo estatal el Pacto Autonómico y el Plan Hidrológico Nacional. En estos también se dejó notar, a la manera apuntada por Perceval (1996: 22), un retrato ideal del nosotros con otro en negativo de los demás. Ese maniqueísmo late tras la acusación de regional populismo del ministro Borrell o de El País al PAR y los reproches de insolidaridad o abertzalismo que los representantes del Gobierno Central y del PSOE hicieron al Ejecutivo autónomo (7.4.2). Los mismos ministros Borrell y Eguigaray se apropiaron del progreso, la modernidad y el sentido de Estado reservando a los oponentes la imagen de conservadores y obsoletos. En el caso de Cataluña, ese sentimiento de superioridad sobre lo aragonés llevó a Miguel Roca a afirmar en Zaragoza que comprendía "las aspiraciones regionales" de Aragón (Diario 16 Aragón, 14.11.92) o a La Vanguardia (*Cogobernar en Aragón*, 17.11.92) a confundir en un editorial el nombre del Presidente del PAR, J. M. Mur, con el del que fue masajista del Barça, Angel Mur, o a atribuir el sentimiento nacionalista aragonés a la proximidad con Cataluña y Navarra (128).

El discurso del Gobierno de Aragón se alimentó del diferencialismo, sobre todo cuando destacó como atributos identitarios la historia -instituciones, moneda, sistema de medida-, la cultura tradicional e, incluso, un supuesto carácter aragonés (DGA, 1992: 6). Sin embargo, también lo enfatizó lo actualizando su relación secular con lo castellano o lo catalán desde un sentimiento de agravio y de inferioridad (Ibid, 8-9). Otros discursos sociales alentaron, también, este tipo de lecturas y vivencias de la alteridad: En la polémica sobre los trasvases un articulista tituló *Agua de Borrells*, durante el convenio televisivo Heraldo enfatizó la colonización informativa, económica y política que, en su opinión, suponía la regionalización de la parrilla de Antena 3 TV o la ignorancia de los *pardillos* políticos gubernamentales que habían sido engañados por los *listos* ejecutivos madrileños. Esa desconfianza hacia el otro se tradujo en demonización, como quedó de manifiesto en los relatos mediales al dibujar el rol de agresor (3.2.1). Tan habitual resultó esa codificación que sirvió de apoyo al diputado tráfuga, E. Gomáriz, cuando, en su discurso parlamentario durante la moción de

censura, arguyó para cambiar su voto el daño que el convenio hacía a los periodistas aragoneses que no tenían empleo (BOCA, 67):

"Para apoyar las precipitadas chapuzas de los trasvases vía decreto ley, al insigne ministro catalán no se le ha ocurrido mejor idea que defender un concepto absolutamente clave, el reequilibrio ideológico de España" (Marcuello, J.R. Comentario, Hora 14, 14.1.93).

"[...] En el PAR, desde luego, habríamos estado encantados con que TVE hubiera hecho en Aragón lo que ofrece desde hace años en Cataluña: horas diarias de desconexión sin ningún tipo de contraprestación económica por parte de los catalanes" (Mur, J.M. *Un convenio legal*, Haldo, 28.8)

"[...] Y así fue como, bajo la influencia del ejemplo catalán, empezó a escribirse la historia del neo-nacionalismo aragonés, pero claro nada era igual que en el próximo principado. [...] Supongan ustedes que en Cataluña a la hora de montar la televisión autonómica [...] se les ocurre coger las pelotas de su sagrada presupuesto y dárselas a una empresa de Madrid para que les haga cada día un ratito cortito de televisionçeta [...] ¿Pueden imaginárselo?. Naturalmente que no. Cataluña es otra cosa: un ejemplo aparentemente imposible de seguir. De hechos, ellos tienen autonomía de primera. ¿Y nosotros?" (Trasobares, *El ejemplo*, 11.8:93).

Los aragoneses de la franja oriental prefieren aceptar para su lengua el malnombre de *chapurriau* a ser llamados *polacos*: no quieren ser confundidos con los catalanes y asumen que hablan catalán. (Bada, 1995: 70).

Gramsci (1977: 210) comentaba las complejas relaciones de la identidad italiana con lo francés, anotando que "se vive del reflejo y se odia al mismo tiempo" para explicar la "mezcla de sentimiento antifrancés y de admiración por las cosas de Francia" que latía tras aquella emergencia de lo italiano. Desde esa ambivalencia percibieron lo catalán y lo madrileño estatal amplios sectores sociales aragoneses, sobre todo su clase dirigente, durante la movilización. Los discursos institucionales o mediales abundaron en referencias a lo castellano y lo catalán, en las que se combinaban la admiración que causa una sociedad económica y políticamente más fuerte o con la antipatía u otras actitudes derivadas de la conciencia de inferioridad. Igual que el Gobierno español presentó el anteproyecto de Plan Hidrológico como una exigencia de la modernización y de la solidaridad entre los territorios del Estado, el Gobierno aragonés enfatizó que favorecía al Eje Mediterráneo y sacrificaba a la España interior por criterios políticos y económicos. Y, si atendemos a la reivindicación

autonomista, el Gobierno Central arguyó el sentido de Estado y de fidelidad a la Constitución, mientras los impulsores de la autonomía plena reclamaban el principio constitucional de igualdad entre los territorios y la voluntad de la sociedad aragonesa de no ser ni más ni menos que otras Comunidades.

Este esquematismo discursivo evidencia la confrontación de dos formas de vivir el acontecer (3.1; 3.2) en las que el intercambio simbólico abundó en una percepción del otro desde el totalitarismo de la verdad. Según Perceval (1996: 107) de que xenofilia y xenofobia "se mueven en un ambiente de dominación". En esta situación de comunicación las relaciones de poder y los intereses particulares que se escondían tras posiciones teóricamente comunitarias ayudaron a que, en algunos episodios concretos como la polémica del botijo, se actualizara incluso ese tipo de percepción del otro. En el caso de lo vasco, esa vivencia se alimentó mayormente de los tópicos españolistas que alimentan la animadversión hacia esa identidad; para lo catalán, esa ambivalencia vivencial se alimentó de referentes actuales, pero también de algunos diálogos con la historia: Esta manera de señalar al supuesto enemigo tuvo mucho que ver con la misma lógica de poder e identidad que hizo posible la Unión del Privilegio General, cuando la nobleza aragonesa se sintió postergada a favor de su homóloga catalana y lo usó para afirmarse como nación (Lacarra, 1972: 124-5; Canellas, 1984: 146); al aspirar a equipararse a Cataluña, la reivindicación actualizó la tendencia del aragonesismo político de este siglo a tomar a Cataluña "como punto de observación" (Embid, 1987: 31): Desde Barcelona Gaspar Torrente llegó a afirmar que "aquí se despierta el sentimiento de identidad [...]. Aprendemos más aquí los aragoneses a saber lo que es Aragón que en Aragón mismo" (1923: 12).

Para Bada (1995: 77), Aragón constituye "tierra de paso" y "camino despejado", por lo que no tiene sentido verlo como "barranco de separación entre Castilla y Cataluña" en contra de una historia que lo acredita como "tierra abierta que sólo ofrece resistencia a los invasores". Según Hobsbawm (1991), en el Estado nación cada sujeto se vive dentro de un mapa de identidades múltiples, de forma que en función del acontecer social actualiza una u otra sin contradicciones excluyentes. Para Keating (1996: 79), esa compatibilidad entre la identidad propia y las demás constituye una de las características de los nacionalismos subestatales de la sociedad postindustrial, hasta el punto de que a la compatibilidad de las identidades regionales y las estatales sumas "otras de carácter continental". La coexistencia de lo cívico territorial y etnonacional en este proceso social o el grado de demonización del otro que se alcanzó en algún momento demuestra que la opción por ser camino o barranco quedó más difusa de lo que apunta Bada y, también, que la multiplicidad de identidades fue en algunos casos puesta a prueba. La exacerbación identitaria que dominó esta socialidad no afectó al mapa social de

identidades compatibles, de manera que los aragoneses siguieron viviéndose como españoles y europeos (Ansó, 1994). Pero, la cotidianidad social quedó lejos del modelo norteamericano del crisol o del multiculturalismo canadiense e, incluso, de la diversidad que propugna el inglés, quizá porque el imaginario social de los últimos siglos se ha construido sobre la pauta uniformista que define a Francia.

Apunta Perceval (1996: 45), que en su "intención de segregar, discriminar, separar u oprimir" el ser humano utiliza socialmente los mismos mecanismos que maneja a nivel familiar o personal, entre ellos infantilizar, animalizar, feminizar o carnavalizar. En los primeros días de la polémica hidráulica La Vanguardia apeló también a esa estrategia identitaria de señalar al enemigo (5.1.93, *El Gobierno de Aragón se opone al trasvase a Cataluña que propone el Plan Hidrológico*; [en interior, abriendo página] *Rechazo total de Aragón al trasvase de agua a Cataluña previsto en el Plan Hidrológico*). Esta forma denotativa de apuntar la supuesta insolidaridad aragonesa contrasta con la argumentación emocional que dominó el discurso del PSOE y del Gobierno Central, pero no oculta los efectos negativos en la percepción de lo aragonés que pudieron producirse en una parte del Estado. La metáfora del botijo, forma caricaturesca y retórica de discursivizar esa insolidaridad y rusticismo de la posición aragonesa, dialogó con esos titulares de La Vanguardia, confirmando la dificultad de entender la posición aragonesa por parte de quienes se veían perjudicados por ella.

Apunta Perceval que el otro no se determina a partir de la realidad, sino desde "un arquetipo ya fabricado" y añade que ese otro "se acopla a él o se defiende de él y no de la realidad que le circunda" (1996: 113). El episodio del botijo o las alusiones a acontecimientos históricos que simbolizan las supuestas agresiones del Estado centralizado sugiere que los portavoces sociales aragoneses de la reivindicación también vivieron la alteridad o su propia identidad mediados por los estereotipos. Stuart Hall (1998) destaca el valor de la identidad como costumbre e, incluso, liga a esa naturaleza su carácter semiótico e ideológico. En este caso, el tópico aparece como una forma de vivir y de percibir a los otros que reenvía al presente y al pasado. Por ello se revela especialmente efectivo a la hora de interpelar a los sujetos sobre sí mismos y sobre los demás. En el debate sobre la autonomía plena y el agua, el discurso político y medial activó algunos de los tópicos identitarios asociados a lo aragonés, como cazurrismo, individualismo, atraso económico, ruralismo y resistencia al desarrollo; a la caricaturización que fueron sometidos el PAR o el Presidente de Aragón por dirigentes socialistas o medios de ámbito estatal (4.2.1.3), se sumó el PSOE de Aragón: En unas ocasiones ligó la reivindicación autonomista o la defensa del agua a lo baturro y en otras riculturalizó

algunas de las propuestas políticas incluidas en la reforma del Estatuto, como la creación de una policía autonómica:

Iglesias dice que la manifestación del 23A es una baturrada en su reunión con la Mesa (El Día, 15.3.92).

"mi partido cree que sería absurdo, por ejemplo, crear una fuerza pública de somatenes y eso no es luchar por la Autonomía, sino hacer la risa y el ridículo" (Marco, J. BOCA, 67: 2062).

"el aragonés puede ser de todo, puede ser tozudo y lo va a ser en este tema, pero no es insolidario" (Entrevista en A3 TV informativo 20,30 horas, 19.1.93)

"a los aragoneses no nos importa compartir el agua del Ebro, mientras no nos falte para lo más necesario"; "si los jóvenes somos el futuro, que piensen (los políticos) en los que nos gustaría que el Ebro pudiera estar en nuestra tierra" (El Periódico, *El Ebro*. Suplemento especial, 23.4.93 [testimonios de niños]).

Ante el retrato de sí mismos que les ponían delante quienes representaban la posición aragonesa adoptaron posiciones defensivas y se limitaron a desmontar esas acusaciones de particularismo e insolidaridad. La mayoría de las entrevistas del Presidente de Aragón con medios de ámbito estatal durante la polémica trasvasista se concentraron en la respuesta a este argumentario. Se confirma así que, además de percibirse desde el tópico, lo vivieron también desde un sentimiento de inferioridad. Por tanto, se refuerza la hipótesis de que la caricatura y el tópico operaron principalmente como estrategia de dominación o de resistencia. La marginalidad mediática y política de lo aragonés favoreció que el esquematismo discursivo del Gobierno Central, apoyado sobre todo en el universalismo, el sentido de estado y la modernidad, se tematizara en los discursos y condicionara el debate social. La hegemonía de lo estatal permitió que lo aragonés quedara culpabilizado, actualizando el totalitarismo de la cosmovisión griega por la que fuera de la polis, de la civilidad, del mundo cultural, de las ciudades, "no existe civilidad, sino barbarie" (Perceval, 1996: 43). Como la posición aragonesa resultaba minoritaria fuera de la Comunidad, el Gobierno Autónomo se esforzó en asegurar la cohesión interna y en que su discurso trascendiera el ámbito de la Comunidad aprovechando la creciente oposición al felipismo y, en general, la fragmentación de la política española entre izquierda y derecha.

Ese tipo de combate a través de los discursos condicionó negativamente la percepción que el resto del Estado tuvo de la reivindicación aragonesa, pero al mismo tiempo favoreció que se reforzara el

sentimiento de ser agredidos y, por tanto, de vivirse como nación. Ante las acusaciones de fundamentalismo, insolidaridad o rusticismo, una parte de la sociedad aragonesa se apropió de esa culpabilización hegemónica para vivirse como comunidad y hacer frente a esa dominación política. Las estaciones del Vía Crucis creado por el Rolde Choben sugieren una deconstrucción de esa visión hegemónica de la movilización y un intento antropofágico de resemantización próximo a los que Licia Soares Souza (1993: 45) encuentra en algunas telenovelas brasileñas. Igual que la mayoría de las élites sociales respondieron a la carnavalización hegemónica de lo aragonés mediante dispositivos defensivos que enfatizaban la contribución de Aragón a España (Zapater, A. *Ser dueños de las llaves de los ríos*. Heraldo. Suplemento El Pilar, 1994), una parte del aragonesismo político y de los discursos mediales (Berdún, J.J. *Habrá que decirles basta*. El Periódico, 21.1.93) recurrieron a la creación de un poderoso enemigo exterior al que debía hacerse frente. Perceval (1996: 44) señala que la utopía y la distopía resultan complementarias a la hora de "construirse una identidad propia", hasta el punto de que para hacer avanzar la sociedad es tan imprescindible el ideal como "un monstruo de pesadilla" que sea su contrario. La identidad aragonesa se alimentó de esperanzas asociadas a la autonomía plena y al agua, como calidad de vida o desarrollo social (4.1.1), pero también se nutrió de esta demonización del otro que produjo la polarización de posiciones.

Meses antes de que se firmara el Pacto Autonómico, Díez Nicolás (1991) colocaba a Aragón como la sexta Comunidad Autónoma en sentimiento nacional, tras País Vasco, Cataluña, Canarias, Navarra, Asturias y Galicia. Aun así, constataba que el 54 % de los aragoneses se sentía tan aragonés como español, mientras que el 10 % se identificaba sólo con Aragón y el 11 %, sólo con España. Este dibujo no se aleja de la afirmación realizada por García Ferrando de que, a diferencia de lo que sucede en otras Comunidades Autónomas, los aragoneses no se perciben mayoritariamente como nación ni poseen una fuerte conciencia nacional (en Mairal, 1996: 109). Ni tampoco de la tesis de López Aranguren (1994) de que entre los aragoneses el sentimiento de independencia resulta residual, ya que una mayoría social vive su identidad aragonesa como complementaria a la española. La demonización del otro que efectuaron los impulsores de la movilización aragonesa o quienes se oponían a ella escribió sobre este imaginario, fruto en parte de una lógica social, y no sólo política, que hizo posible la invención de España y su continuidad durante siglos (4.2). De ese diálogo con la historia se alimentó la posición del Gobierno Central y el PSOE o la decisión aragonesa de oponerse a ella. La desconfianza hacia el aragonesismo político reenvió, por ejemplo, al anatema que Silvela y Maura lanzaron sobre los regionalismos, llegando a presentarlos como enemigos de España o a la tendencia reiterada del españolismo liberal a responsabilizarlos de la debilidad del Estado (Fox, 1997: 84); ese sentimiento de inferioridad, pero de complementariedad, entre Aragón y España actualizó la

confesión de un nacionalista de que "a un aragonés pasivo le preguntan. ¿De dónde eres, maño? Soy español [...] En cambio a nosotros, a los exaltados, se nos pregunta si somos de Aragón y respondemos afirmativamente, sin negar la Patria" (en Pinilla y Peiró [eds] 1988: 81).

Hobsbawm (1989: 1860) admite que el nacionalismo tiende a configurarse como "una protesta contra el statu quo, o, para ser más exacto, contra los 'otros' que amenazan el grupo étnicamente definido". La naturaleza defensiva de esta movilización o esta vivencia aragonesa del acontecer como una agresión se ajusta a esas condiciones en que opera y crece el nacionalismo. Según Perceval (1996: 108), en los discursos nacionalistas "el otro es más respetado en su identidad" que en las universalistas, porque para estas el otro "es el bárbaro original o el individuo sometido al déspota" al que hay que liberar "de sus ataduras [...] y otorgarle la igualdad de ciudadano universal". La demonización que algunos textos políticos o mediales hicieron del Partido Socialista y de sus principales dirigentes o del centralismo estatal no impidió la afirmación del sentido integrador y universalista de la identidad aragonesa. Sólo de forma excepcional se cuestionó la complementariedad entre lo aragonés y lo español; su risa festiva o crítica hacia la dominación política y social se revela más una estrategia defensiva frente al poder del Estado centralizado que vivencia excluyente de los demás o una aspiración a la construcción excluyente de la nación. Por el contrario, la retórica que carnavalizó lo aragonés en nombre de la modernidad y del progreso renovó los dispositivos de poder que, según Fox (1997: 65), hicieron posible la creación de una nación unitaria española a lo largo del siglo XIX a costa de vaciar de sentido político las identidades territoriales y trasladarlas al folklore (4.2.1.):

"Siento una cierta aprensión política e intelectual por ciertos nacionalismos [...], no se me alcanza, por muchas vueltas que le doy, qué razón ni consistencia puede tener el llamado *nacionalismo cachirulero aragonés*" (Marco, J. Discurso de investidura, BOCA, 67: 2062).

"Siente aprensión de nuestro aragonesismo [...], que es el nacionalismo [...] más blanco de España, el más limpio" (HGR, en respuesta, 2073).

"Hoy hemos de plantar cara a quienes [...] lanzan anatemas contra esta formulación política de lo aragonés [...], olvidándose ellos de que es precisamente en su postulación donde se esconde otro tipo de nacionalismo, este sí que no integrador ni integrante, sino colonialista, exclusivo y excluyente" (Eiroa, 1995: 57).

Un estudio del Centro de Investigación Sociológica realizado en las fechas de la concentración autonomista ante el Congreso ha servido de base a Montero, Pallarés y Oñate, primero, para incluir a Aragón en el bloque autonómico en el que la dimensión regional adquiere cierta relevancia electoral; y, segundo, para diferenciar esta vivencia social de la identidad de la nacionalista, aduciendo que los aragoneses se plantean su relación con la identidad española "en términos de repartición" y no "de conflicto" (Montero, Pallarés y Oñate: 1995, 176). En diálogo con esos datos el Presidente de Aragón reiteró en foros madrileños que "los aragoneses tenemos un profundo sentido del Estado, entre otras razones porque fuimos piedra angular en su fundación" (Eiroa, 1992a: 37) o que "si a Aragón se le puede acusar de algo, no es desde luego de pensar al margen de un proyecto de Estado. Aragón siempre ha sido y será parte de España" (A3 TV. Informativo 20,30 horas, 19.1.93). En *Somos un gran equipo* se presentaba a Castilla como símbolo de la opresión y la agresión, mientras se destacaba el papel de Aragón en la construcción de España o se ensalzaba el denominado *Partido Aragonés*, lobby de influencia en Madrid liderado por el Conde Aranda y, por tanto, símbolo de cómo se integró lo aragonés en lo español en el siglo XVIII. Como pensamiento social dominante, estas propuestas explican por qué los textos autonomistas de carácter excluyente carecieron de continuidad o por qué este intercambio simbólico no modificó la complementariedad de lo autonómico y lo estatal, de lo aragonés y lo español. Mas aún, cuando los discursos de la reivindicación diferenciaron entre las instituciones del Estado y el partido que gobernaba España (4.1.2).

Mercadé (1994: 270) anota que en España el modelo autonómico está implantando un modelo de identidades compartidas, ya que, por la misma lógica que la Administración Central genera identidad española, las Comunidades Autónomas producen la suya propia y la dotan de sentido político. La compatibilidad identitaria que predominó en los discursos del Gobierno de Aragón se sitúa en esa lógica del Estado autonómico (4.1.1.1). De hecho, el Presidente de la Comunidad Autónoma afirmó que "nadie puede decirnos que ponemos en peligro el Estado por pedir algo que otras Comunidades Autónomas disfrutan desde hace más de doce años" (Eiroa, 1992a: 37). Aunque fuera una estrategia para mantener el carácter masivo de la reivindicación ante las acusaciones de abertzalismo e inconstitucionalidad lanzadas por el PSOE y el Gobierno Central, esa actitud de respeto a lo estatal y de vivencia no exclusivista de lo aragonés explica que, posteriormente, promoviera un proyecto de promoción y dignificación de lo aragonés a través de una cadena privada y de ámbito *español*. Por su parte, en el cierre de la concentración ante las Cortes Generales el 15 de noviembre, el Justicia reprochó a España ser *incoherente, extraviada, sorda, inverosímil y fallida* por crear un Estado desigual e injusto y escuchar sólo a los que piden desde la violencia (4.1.1.1); sin embargo, más que

una demanda soberanista, sus palabras denotaban una *queja* ante la lógica centralista y el aviso de que se estaba poniendo en peligro el sentimiento de membresía de los aragoneses en el Estado.

Cabe inferir, por tanto, que la movilización aragonesa cuestionó la construcción de España desde el centro, desde Castilla, pero, en cambio, respetó lo español y el sentido de Estado (4.1.2.3). En eso dialogó también con el respeto a las identidades múltiples que Fox (1997) encuentra en los nacionalismos regionales españoles (Fox, 1997) o que Keating (1996) considera habituales en los modernos nacionalismos subestatales. Un estudio comparativo del voto aragonés en las elecciones generales y autonómicas de la actual etapa democrática ha permitido concluir que en Aragón el voto dual (126) es el más alto, junto a Cataluña, y se apoya en unos electores "con cierta dualidad en la identificación de partido" y "en las funciones del nivel institucional autonómico y central" (Chueca y Montero, [eds], 1995: 220). Para esa conclusión aducen que la dimensión regional resulta complementaria para articular el sistema partidista aragonés y, sobre todo, que "a diferencia de lo sucedido en el caso de los nacionalismos", la imagen territorial carece de base ideológica, "no expresa ningún tipo de conflicto de identificación nacional ni desacuerdo con la organización territorial del Estado [...] se escoge principalmente en función de criterios de carácter pragmático e instrumental" (Ibidem, 233). Los resultados de las Elecciones Generales de 1993 o de las Elecciones Autonómicas de 1995 confirman que ese voto dual apenas se vio afectado por la movilización autonomista e, incluso, se potenció. De ahí que deba inferirse que la reivindicación no afectó al mapa social de identidades compatibles.

Keating (1996: 79) destaca la ambigüedad de proyectos nacionalistas que expresan ambiciones "más que regionalistas, menos que separatistas" y de esa forma se alejan del exclusivismo de los nacionalismos clásicos, pero explica esa asunción de "la coexistencia de diferentes tipos de identidad y afiliación cultural" como una forma de llegar a nuevos sectores sociales. El crecimiento electoral del PAR en sectores urbanos en la convocatoria de 1993 o el apoyo masivo de los zaragozanos a las manifestaciones autonomistas sugieren que esa respeto institucional a la compatibilidad de lo español y lo aragonés tuvo mucho de estrategia política. Además de que obedeciera a motivaciones ideológicas o a la supuesta ambigüedad de los nacionalismos, el énfasis de los partidos e instituciones públicas en el respeto a lo español se nota mediada por la adaptación al mercado que necesitan los discursos políticos o mediales. De hecho, los sondeos dirigidos por Díez Nicolás (1992), Malo de Molina (1992) y Ansó Llera (1993a) constatan que el deterioro de la imagen del Gobierno de la Nación o del PSOE y sus dirigentes se concentró en los sectores sociales y zonas de Aragón donde se concentraba el apoyo a la autonomía plena, en concreto la ciudad de Zaragoza y sectores

interesados por la política autonómica, sobre todo profesionales y con estudios universitarios o medios; en cambio, en esos mismos nichos de mercado se reforzó el sentimiento de identidad aragonesa, pero sin que aumentara de forma relevante el apoyo a la independencia o la vivencia excluyente de lo aragonés:

"[...] Porque lo que ha puesto en marcha el gabinete de Prensa de Borrell es una campaña en toda regla, con filtraciones y dossiers remitidos a comentaristas de prestigio y a las redacciones centrales de los grandes medios nacionales. En esa misma dirección debería articularse la respuesta institucional de Aragón. [...] Ahora mismo, a la vista de los procedimientos usados desde Madrid, los aragoneses no podemos sino sospechar de todo y de todos. [...] Hemos visto ante nosotros una Administración Central carente de todo escrúpulo. en estas condiciones será muy difícil recuperar el equilibrio y la confianza" (Heraldo. *Demagogia antiaragonesa*, editorial 14.1.93).

"el Estado español nunca ha sido generoso con esta tierra. Sin embargo, [...] siempre hemos exhibido con orgullo nuestra condición de españoles allá donde hemos ido y saboreamos con orgullo íntimo la buena consideración que de nosotros, por nobles, solidarios y hospitalarios, tiene el resto de los pueblos de España. Con todos estos cuentos que se inventan desde Madrid y que ponen en entredicho nuestra auténtica naturaleza, [...] ¿para qué carajos nos sirve formar parte de este tinglado infumable en que están convirtiendo España?" (Berdún, J.J. *Habrà que decirles basta*. El Periódico, 21.1.93).

El Periódico (31.3.93) y Heraldo de Aragón (1.4.93) publicaron una carta de un militante del Rolde Choben, Enrique Lasasa, en la que con el título *¿Aragón solidario?* denunciaba "la vergonzosa campaña desarrollada por el Gobierno español en el tema del agua" y preguntaba cuándo España sería solidaria con Aragón.

En Ansó (1993a), el 58.4 de los que conocían a F. González lo aprobaban, mientras que ese porcentaje ascendía al 62.1 en el caso de E. Eiroa; el 47.7 de los aragoneses valoraban mal o muy al Gobierno Central y el 36.4, al PSOE; en Díez Nicolás (1992), el 25.1 de los encuestados se sentía más aragonés que español y el 17.5 daba preferencia a la identidad española; en Malo de Molina (1992b), el 19.3 se sentía más aragonés y sólo el 7.2 se identificaba como más español.

Recuerda Bada (1995: 23) que Comunidad procede de *cum moenio*, en latín construir con otros una muralla, y argumenta a partir de esa etimología que, aunque no necesitan tener un enemigo para

poseer una identidad, los pueblos se reafirman más fácil y fuertemente ante otra cultura u sociedad. Si se toma como referencia algunos editoriales periodísticos, como *Demagogia antiaragonesa* de Heraldo o *Defender Aragón* de Diario 16, o algunas declaraciones institucionales, como el manifiesto del Justicia a las puertas del Congreso, se infiere que algunas élites sociales se vivieron como aragonesas a partir de ese defenderse ante un supuesto agresor y que así lo propusieron a sus públicos; las declaraciones de algunos receptores y participantes en las manifestaciones, como Enrique Lasaosa y otros que se expresaron a través de las cartas a los lectores o los programas radiofónicos de línea abierta, prueban que ese sentir de la vanguardia social se trasladó a amplios segmentos sociales. En la medida que ese espíritu defensivo devino en exacerbación identitaria extendida a amplios sectores sociales, se abre la puerta a que se tensionara profundamente la compatibilidad de lo aragonés con lo español. Si, al interpretar las palabras del Justicia, El Periódico (17.11.92) afirmó que aquel no había cuestionado el sentido integrador de la movilización aragonesa porque había citado 32 veces el nombre de España y 17 el de Aragón, el editorial *Demagogia antiaragonesa* de Heraldo destacó que "pocas veces" Aragón había "sufrido una agresión tan evidente o malintencionada desde el Gobierno Central". Pese a los intentos gubernamentales de graduar el tono reivindicativo, esta forma mítica dramática de discursivizar el acontecer denota que durante la polémica trasvasista y la movilización autonomista de 1993 el grado de exacerbación identitaria llegó a demonizar el centralismo estatal y a afectar a la relación de lo aragonés con lo español.

Esa lógica hizo de la oposición nosotros/ellos hizo del toponímico *Madrid* el referente nuclear de la movilización y, por tanto, de la comunidad imaginaria construida; en algún caso, esa personalización del centralismo se combinó con la estigmatización de lo catalán, aumentando así la demonización del otro. El entonces Consejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Aragón afirmó que "me parece mentira que sea José Borrell, un catalán, un catalán además que ejerce y que todos sabemos que los catalanes primero son catalanes y después son del PSUC o de Convergencia, primero tiran para casa y cogen la tarta y luego la reparten" (Onda Cero. Informativo 14,30; 12.1.93). Antes del Pacto Autonómico lo aragonés y lo español convivían sin contradicción en porcentajes muy superiores a otros territorios del Estado con fuerte sentimiento nacionalista (Mercadé, 1994); los barómetros trimestrales de Díez Nicolás (1991, 1992) confirman que el indicador de sentir nacional (ISN) repuntó en Aragón durante la movilización, por más que no alterara de forma sustancial el mapa de identidades compatibles. Y una encuesta encargada por el Gobierno de Aragón y publicada por Heraldo y El Periódico el 23.4.93 (Ansó, 1993a), puso de manifiesto que, si bien se mantenía la fidelidad a las instituciones del Estado, la imagen del Gobierno Central y de quienes lo representaban

acusaba un fuerte deterioro respecto a las fechas previas a la movilización. Los resultados de las Elecciones Generales celebradas en junio de 1993 acercaron el reparto del voto al que se produce en el País Vasco o Cataluña en ese tipo de elecciones, ya que el PAR obtuvo el 19.06 % de los votos válidos, con un incremento del 72,6 % respecto a la convocatoria anterior de 1989. De esas formas de vivir la realidad se infiere que dieciséis meses de debate sobre lo aragonés modificaron algunas creencias y comportamientos políticos, hasta hacer posible esa equiparación con los mercados más nacionalistas del Estado. De hecho, el aumento del voto al PAR fue mayor en Zaragoza ciudad: en 1989, había aportado el 44,7 % de sus votos; en 1993 alcanzó el 53,3 %.

Perceval (1996: 106) apunta que dar una fuerte consistencia al otro nos reafirma; por su parte, Bada (1995: 23) señala que cualquier nosotros puede integrarse en un *otro* más general sin que la identidad más amplia anule necesariamente a la más restringida. Todos estos datos confirman hasta qué punto la fuerza del diferencialismo facilitó la implantación social de la reivindicación y estos efectos cognitivos o comportamentales en amplios sectores sociales. La forma etnonacional en que amplios sectores sociales vivieron esa diferencialidad fortaleció la conciencia comunitaria de ser, gracias a que los discursos noticiero y político multiplicaron sus referencias a lo español o a lo catalán y lo vasco desde posiciones victimistas o a que, como evidencia el topic *ni más ni menos* (3.1; 3.2), semantizaron la autonomía plena a partir del autogobierno de esas Comunidades. Pero, también, porque la presencia de lo catalán o lo castellano se alimentó del diálogo con el pasado que mejor explicita la animadversión de la sociedad aragonesa hacia esos mismos territorios (129). El discurso gubernamental asumió la castellanización cultural o la integración de lo aragonés en lo español; en cambio, demonizó la ejecución del Justicia Juan de Lanuza por lo que supuso de recorte de la foralidad o los Decretos de Nueva Planta aduciendo que despojaron a Aragón "de todo su constitucionalismo" (DGA, 1992: 4); igualmente, afirmó que "ARAGON alcanzó su plenitud histórica (128) con la creación de la Corona de Aragón" (Ibídem), pero sólo incluyó el aragonés como lengua histórica del Reino (130), pese al papel del lemosí como lengua oficial y de escritura en esos siglos:

"Los sondeos señalan que los aragoneses han asumido que la forma más práctica para mejorar el grado de autogobierno es la firmeza en las reivindicaciones y la presión sostenida. Esta fórmula tiene claros ejemplos en Cataluña y País Vasco [...]. Otras Comunidades que entraron en el paquete privilegiado por una u otra vía -Andalucía y Valencia, principalmente- mantuvieron durante años el *calor popular* hacia sus reivindicaciones" (Suplemento Heraldo, 23 A 93: 4, José L. Valero, *Una reivindicación histórica*).

"Eso es lo que esperan los catalanes, que se trasvase, pero lo idea sería que se quedara aquí [...]" (Onda Cero, Protagonistas Zaragoza, 14.1.93).

"Decía Costa que 'Solidaridad es un movimiento genuino y exclusivamente catalán' [...]'Solidaridad quiere soluciones que sólo miran a Cataluña'" (Zapater, A. *Ser dueños de las llaves de los ríos*. Heraldo. Suplmt. El Pilar, 1994).

El mapa aragonés de identidades no se circunscribe a la dualidad aragonés y español. Más allá de que uno de cada dos votantes haya variado alguna vez su comportamiento en unas y otras elecciones (Montero, Chueca y Oñate, 1995: 220), esa pluralidad identitaria con la que convive lo aragonés incluye también lo europeo y lo local o lo provincial. Según Mairal (1996), lo local pervive con tanta fuerza en Aragón que, en determinados momentos de la historia, ha servido como dispositivo institucional para aculturar lo aragonés. Como anota Garcés (1997: 136), la provincialización del Estado ha propiciado "la institucionalización de focos provincialistas que niegan una idea global de Aragón cuando se incide en algunos de sus intereses peculiares y particularistas". En oposición a quienes afirman esa mediación de lo local y lo provincial en lo aragonés, Bada (1995: 72) se ha apoyado en "recientes estudios antropológicos" para afirmar que no se ha "logrado demostrar que existan identidades provinciales en Aragón". Para reforzar su tesis ha aducido que carecen de capacidad simbólica por lo que un "*Viva Aragón* no puede ser sustituido por tres vivas consecutivos a Huesca, Teruel y Zaragoza". Si se pone en relación este imaginario con los discursos y conductas de esta movilización colectiva, se infiere que la mayoría de las instituciones sociales y de los participantes en el proceso se vivieron como aragoneses sin contradicciones con sus identidades locales, provinciales o, incluso, transnacionales.

Los datos sociológicos de la adhesión a la autonomía plena denotan una inicial reticencia en Huesca y Teruel, lo que sugiere que la reivindicación pudo ser vista como zaragozana. Sin embargo, como demuestran las encuestas (Ansó, 1993, 1994), la retórica de los discursos dominantes posibilitó que el apoyo a las ideas fuerza de la reivindicación e, incluso, la apuesta por un referéndum tuviese un respaldo similar en las tres provincias aragonesas. El mito de la armonía social, especialmente vivo en algunos relatos, ayudó a que ni siquiera los municipios amenazados por los embalses o los intereses contrapuestos entre llano y montaña pusieran en peligro la adhesión social a la movilización. Cada colectivo intentó usar el espacio público de las manifestaciones para hacer notar su posición, como evidencia el ataúd de los vecinos de Biscarrués en la manifestación de 1993. Sin embargo, no rompieron la unanimidad social sobre la posición aragonesa. También lo zaragozano, en otros momentos reacio a posiciones de carácter identitario o a defender propuestas agraristas, se sintió

integrado en la reivindicación aragonesa de mayor autonomía y aprovechamiento del agua. Desde esa lógica este proceso social resemantizó dispositivos políticos que han aculturado políticamente lo aragonés a lo largo de la historia, como el municipalismo del Conde Duque de Olivares en el ambiente de la Contrarreforma (Mairal, 1996), la provincialización del Estado (131) o la apuesta organicista del nacionalismo liberal español por lo municipal en respuesta a los nacionalismos catalán y vasco (Fox, 1997: 82).

La fuerza de las identidades provinciales sobrevuela las diferencias de ritmo e intensidad con que zaragozanos, oscenses y turolenses se sumaron a la petición de máximo autogobierno o de aprovechamiento del agua. La preocupación por los regadíos o la adhesión al autogobierno se vive de forma muy distinta en Huesca o Teruel, lo que también explica cómo se implicaron en la demanda hidráulica (132). Sin embargo, la participación en las manifestaciones de miles de aragoneses que hacían afirmación de su identidad local y de su apoyo a la reivindicación colectiva confirma que ni siquiera la desconfianza de Huesca y Teruel hacia un desarrollo de la autonomía que asocian con el centralismo de Zaragoza o el discurso municipalista del PSOE como forma de hacer frente a la autonomía plena impidieron que ese mapa plural de identidades se reforzara, de forma que todas ellas coexistieran sin tensión. La preeminencia institucional de quienes impulsaban la movilización, sobre todo el Gobierno y el sistema medial, impusieron su estrategia de identificar las demandas autonomista e hidráulica con el bien común y, por tanto, de subsumir las diferentes identidades en esa semantización de lo colectivo (3.2: 3.2.2). El descontento con el grado de autogobierno (133) que puso en peligro la relación de lo aragonés con lo español hizo posible que, más allá de la clase y del territorio, la mayor parte de la pluralidad social de Aragón se sintiera representada en alguno de los aspectos de la reivindicación (Ansó, 1993):

"[...] Los aragoneses que hoy se manifiestan lo hacen convencidos de que exigir autonomía plena ayuda a descentralizar y que el aragonesismo no sólo no está reñido con el españolismo y el europeísmo, sino que es imprescindible para ser españoles y europeos, o sea, de primera" (*Ser aragoneses, españoles y europeos*. El Periódico, 23.4.93. Suelto).

"seguimos desconfiando de una Unión Europea que hasta el momento nos ha reportado escasos beneficios y en cambio ha duplicado con frecuencia la discriminación que veníamos sufriendo desde Madrid. [...] estamos obligados a vivir en un mundo internacionalizado y, por tanto, debemos sentirnos partes de la civilización occidental y europea" (Eiroa, 1995:75).

El comienzo del Mercado Interior condicionó la lectura que las instituciones sociales hicieron de la reivindicación (4.2.2). De hecho, esta se semantizó en función del debate político en el Estado, pero también a partir de algunos referentes de la globalización. Como demuestran el tópic de la competitividad territorial o la relación que el Plan Estratégico de Aragón establecía entre el grado de autonomía y la igualdad de oportunidades de los territorios, el mercado global también dotó de sentido los discursos y las conductas. A diferencia de los nacionalismos clásicos, esta reivindicación siguió la pauta internacionalista que Keating (1996) atribuye a los modernos nacionalismos subestatales y asumió el europeísmo. Los discursos del Presidente de la Comunidad Autónoma dejaron clara la aceptación del Tratado de Maastricht; esa asunción de lo europeo únicamente se vio matizada por el temor a que la Unión Europea diera lugar a un nuevo centralismo en Bruselas y a que lo aragonés padeciera otra nueva relación de menosprecio y dependencia (Eiroa, 1992, 1995). Esta reflexión apenas se trasladó a la sociedad, aunque ninguno de los discursos sociales, tampoco los más populares, se mostraron tensionados por lo europeo o lo global. Según Ebrópolis (1996: 69), su "acusado carácter de crisol por su atractivo migratorio" hace que Zaragoza sea "abierta e integradora". Además, "su población se ha socializado en espacios correspondientes a habitats de tamaño pequeño, claramente identificados como rurales o semiurbanos" (Ibid, 70). El protagonismo de las clases medias urbanas de Zaragoza y, en general, de la mayor parte del tejido social urbano favoreció esa vivencia armoniosa de la pluralidad de identidades, sin que la fuerza de un problema comunitario cambiara ese vivirse como parte de Aragón, España y Europa.

4.1.2.2. La batalla por la nacionalidad

El discurso sobre el nacionalismo ha enfatizado la relación entre la nación y la religión, como ha puesto de manifiesto la afirmación de Llobera (1996) de que la nación es el dios de la modernidad. Anderson (1983) destaca que la nación sustituye las ideas basadas en la religión por la de *civilización*. Todd (1995: 221) considera "obsesivo" el uso del término nación en la literatura política de los años 1789-94 y sostiene que "el amor por la nación [...] en la época revolucionaria es de una intensidad tan notable que iguala la de las pasiones religiosas más fuertes". Llobera (1996) explica ese paroxismo nacional de la Revolución Francesa por el hundimiento de la conciencia cristiana y anota que esa ideología nacional nacida del vacío religioso se apoyó en "una concepción liberal e igualitaria" entre los hombres (134). Esta lectura contraviene a quienes sólo asocian las sociedades dominadas por el pensamiento mítico religioso con el nacionalismo étnico y dialoga, en cambio, con la ligazón que establece el marxismo entre la nación y el surgimiento de la sociedad burguesa o con sus epígonos

que destacan el componente etnonacional de las movilizaciones por los recursos y las oportunidades en las sociedades urbanas modernas (Nagel y Olzak, 1998; Hardin, 1998). Aunque lo nacional operara antes de la modernidad, el concepto actual de nación reenvía, sobre todo, al siglo XVIII y XIX. Tras rastrear en las primeras ediciones del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), Hobsbawm (1991:23) afirma que "antes de 1884, la palabra nación significaba sencillamente 'la colección de los habitantes en alguna provincia, país o reino' y también 'extranjero'". Por tanto, atribuye al pensamiento liberal burgués la reformulación en el periodo 1830-1870 del concepto de nación usado por la Revolución francesa o la Declaración de Derechos Humanos de Virginia.

En esa lógica social y política la nacionalidad define la suma de atributos diferenciales que permiten a una comunidad convertirse en nación. Alemania e Italia esgrimieron su carácter de nacionalidad en sus aspiraciones por verse reconocidos como estado nación. A partir de 1830, el principio de nacionalidad fue utilizado también por Grecia, Serbia, Rumanía y Bulgaria en sus aspiraciones nacionales (Fox, 1997: 20). Inicialmente ese principio incluía, sobre todo, que fuera factible y deseada por la comunidad. Luego, para evitar la balcanización, se reservó la nacionalidad sólo a sociedades y estados de cierta importancia, para lo que se añadió el denominado *principio del umbral* (Hobsbawm, 1991: 41-2). La limitación del umbral se abandonó a partir de 1880, pero durante su vigencia mutó el principio de nacionalidad: A diferencia de cómo la habían entendido los *románticos* Mazzini o Cavour, el pensamiento liberal burgués la trasladó a la teoría de la modernización y el progreso, ligando ese rango a la capacidad de una sociedad para operar o no como mercado nacional (Hobsbawm, 1991). Esta visión de la nación reenvía al *contrato social* como justificación del Estado acuñado por Rousseau. Pero, junto a esa lectura económica y social de la nacionalidad, pervivió otra más bien culturalista: Apoyándose en el principio herderiano de que una identidad política colectiva presupone una sociedad unida por una cultura común, ese uso de la nacionalidad reenvió a la colectividad que comparte una serie de atributos y valores culturales (Fox, 1997: 46).

La centralidad de lo masivo o del espacio público mediatizado, el protagonismo de las clases medias urbanas y una parte importante de la semantización propuesta por los discursos sitúa esta movilización en el ámbito de las sociedades industriales modernas. De ahí que la vivencia de la nacionalidad y la ingeniería social que requiere su construcción reenvíen también a su lógica de funcionamiento en las sociedades avanzadas. En 1991 el 65 % de la población aragonesa podía considerarse urbana, el 13 % vivía en municipios intermedios y el 22 % en ámbito rural (Chueca y Montero [eds], 1995: 135). Por sectores económicos, el 49 % de la población ocupada lo estaba en el Terciario, 35 % en el Secundario y 14 % en el Primario. Chueca y Montero (Ibid, 141) infieren así

que, aunque con un lustro de retraso y una terciarización más débil que la media española, Aragón se había incorporado ya "a la dinámica general española de transición hacia la sociedad posindustrial" y "a la sociedad de clases medias" (Ibíd, 143). Por último, uno de cada diez aragoneses había cursado estudios superiores y uno de cada tres había superado el grado medio (Ibíd, 147) y sus tasas de paro estaban entre las más bajas de España para el conjunto de la población activa, pero eran "las más elevadas si nos referimos a la población activa femenina" (Ibíd., 147).

Al escribir sobre esa socialidad la nacionalidad fue vivida menos a partir de parámetros histórico culturales que en relación a la lucha por las oportunidades y recursos. El texto que en 1994 votaron todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón hacía derivar la nacionalidad aragonesa de la *unidad e identidad histórica*; esa misma formulación se mantuvo en el texto finalmente aprobado por las Cortes Generales, pese a que una enmienda pactada por PSOE y PP modificó durante esa tramitación parlamentaria otros aspectos del artículo primero. Partiendo de que el reconocimiento como nacionalidad fue una de las escasas concesiones que los principales partidos de ámbito estatal hicieron al aragonesismo moderado, esta forma estatutaria de discursivizar la nacionalidad explicita el peso que en el imaginario político aragonés tienen los derechos históricos o, en todo caso, una intención de ligar el autogobierno aragonés a la soberanía política del viejo Reino. De hecho, la propuesta de reforma que elaboró la Comisión Especial de las Cortes de Aragón en los momentos de mayor clima social autonomista formuló el rango de nacionalidad para Aragón como un reconocimiento de la Constitución, en alusión al respeto a los derechos históricos que aquella recoge. Sin embargo, el deseo las élites aragonesas por pasar de región a nacionalidad o el énfasis puesto en la competitividad territorial y la igualdad entre territorios pone en relación esa apuesta política con la posición de liderazgo o con las ventajas del Estado que estaban obteniendo las nacionalidades españolas:

"Aragón, como *expresión de su unidad e identidad histórica*, accede a su autogobierno, en conformidad con la Constitución española y con el presente Estatuto que es su norma institucional básica" (Art.1º, Ley O. 8/1982).

"Aragón, como expresión de su unidad e identidad histórica y en el ejercicio del derecho a la autonomía *que la Constitución le reconoce como nacionalidad*, se rige por el presente Estatuto, que es su norma institucional básica" (Art.1.1. Propuesta de Estatuto de Autonomía de la Comisión Especial de las Cortes de Aragón, 1992).

"Aragón, en expresión de su unidad e *identidad históricas como nacionalidad* y en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución le reconoce, se rige por el

presente Estatuto que es su norma institucional básica" (Artículo 1º, Proposición de Ley de Estatuto de Autonomía de Aragón de las Cortes de Aragón, 1994).

"Aragón, en expresión de su unidad e *identidad histórica como nacionalidad*, en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución española reconoce, accede a su autogobierno de conformidad con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica" (Art.1º, Ley O. 5/1996 [La cursiva es mía]).

El Estatuto de Autonomía que institucionalizó en 1982 el autogobierno reconocía la personalidad política de Aragón, pero no lo definía como región ni como nacionalidad. Durante los largos y complejos debates que precedieron a su aprobación, esta denominación fue rechazada tantas veces como se propuso su inclusión por parte de Gómez de las Rocas, principal representante entonces del aragonésismo moderado, y de Bolea Foradada, entonces dirigente de UCD. Durante la reivindicación de 1992 y 1993, el nacionalismo moderado hizo del reconocimiento de Aragón como nacionalidad uno de los principales atributos de la autonomía plena. El empeño que el nacionalismo moderado puso en esta reivindicación y la forma en que la vivieron el resto de actores sociales revela el valor identitario que le otorgó una parte de la sociedad e, incluso, los matices nacionalistas de la reivindicación autonomista. Tal como recuerda Mairal (1995: 99), la petición de Gómez de las Rocas para que el término nacionalidad fuera incluido en el Estatuto de 1982 se apoyó en el agravio comparativo con otros territorios no más históricos que Aragón. En la movilización por la autonomía plena, el nacionalismo moderado aragonés repitió esos mismos argumentos, hasta el punto de que basó su aspiración de ser nacionalidad en la conciencia de que el Estado Autonómico estaba perjudicando a Aragón al privarle de ese reconocimiento que otras Autonomías ya disfrutaban. Desde esa lectura el sentimiento de privación relativa, elemento capaz de activar movimientos nacionales (Moreno, 1998; Máiz, 1998), quedó reforzado, por un lado, mediante elementos cívico territoriales, como la igualdad de oportunidades o la lucha por los recursos y, por otro, a través de los componentes tímóticos que acompañan también a esa forma de vivir la identidad.

Partiendo del liderazgo institucional y social que el entonces Presidente de la Comunidad Autónoma ejerció durante la movilización, su concepción de la nacionalidad sitúa la reivindicación aragonesa lejos de los componentes culturales herderianos y, también, de los referentes decimonónicos liberales que asocian aquella con el inicio político hacia un estado propio. La indefinición del término autonomía plena o los anuncios de que se iba a someter el grado de autogobierno a referéndum sugiere que la reivindicación autonomista aspiraba al máximo grado de autogobierno posible, pero tomando como referencia la Constitución. En esa lógica, aunque pudiera leerse como una respuesta

a la aplicación del principio del umbral que estaban haciendo los principales partidos estatales y los nacionalismos vasco y catalán, esa afirmación de la soberanía política que latía tras la demanda del rango de nacionalidad parece menos dirigida a la configuración de un estado que a la queja del trato preferente que, en su opinión, venían recibiendo las Autonomías reconocidas ya como nacionalidades. Así lo hace pensar, incluso, un texto posterior del entonces Presidente de Aragón, cuando arguye los efectos políticos, económicos y sociales derivados de la diferencia constitucional entre nacionalidades y regiones: "Rodeados de territorios que gozaban de mayor autogobierno, los aragoneses veían, y así se lo habían contado muchos de sus familiares y amigos, hasta qué punto esas Comunidades Autónomas -Cataluña, Navarra, Euskadi...- habían mejorado durante esa década su calidad de vida, su actividad económica, su cultura en mucho mayor grado que ellos" (1995: 11).

Este valor diferencial de la nacionalidad se dejó notar en la mayoría de los discursos sociales, hasta el punto de que constituyó una de las ideas principales asociadas al tópic *ni más ni menos*. Para el aragonesismo político, pero también para los principales actores sociales, el reconocimiento de Aragón como nacionalidad simbolizó la respuesta al tratamiento preferente que el desarrollo autonómico del Estado había dado en autogobierno, financiación y competencias a las nacionalidades o, de forma genérica, a las Comunidades Autónomas del artículo 151. El hecho de que la foralidad no quedara ligada a esta demanda de nacionalidad y que únicamente se redujera a la *ventajosa* relación económica que Navarra o Euskadi mantienen con el Estado confirma que el discurso de la nacionalidad apenas alimentó aspiraciones soberanistas, sino que más bien se llenó de los componentes tímicos y económicos que impone la competitividad territorial. Según Keating (1996), los *nacionalismos regionales* se diferencian de los clásicos nacionalismos de estado en que quienes los representan no siguen la lógica de los mercados nacionales, sino de la globalización y, por ello, no persiguen tanto la fundación de un estado como el logro de una mejor posición en esa competencia de los territorios. En la medida que da preferencia a la repercusión del autogobierno en el desarrollo comunitario y en la capacidad de competir dentro de la globalización, este discurso de la nacionalidad coincide con ese perfil *nacionalista* que, incluso en situaciones de debilidad del estado, acepta los límites constitucionales a su soberanía.

Esta forma de circunscribir su proyecto nacional a la reivindicación o defensa de intereses territoriales ha sido leído con frecuencia como la prueba de que el PAR está lejos de un proyecto nacional y únicamente ha adoptado el discurso nacionalista como estrategia para llegar al poder y alcanzar sus fines (López Laborda, Pinilla y Sáez, 1994: 327) o como la tendencia del aragonesismo regionalista a mimetizar lo catalán y Cataluña (Garcés, 1997: 136). En la lógica de Keating (1996), por el contrario,

esa formulación de la nacionalidad recuerda los movimientos nacionalistas subestatales que, aún a costa de que sus reivindicaciones rivalicen con las del estado, se apoyan en la "movilización regional" para comunicar con la sociedad civil, donde están los recursos necesarios para que el movimiento adquiriera valor comunitario (Ibíd., 71). Desde esta hipótesis, al observar el aumento de las capas sociales agraviadas económica y políticamente, el nacionalismo moderado aragonés se habría apropiado del *colonialismo interior* o de otros discursos homólogos para ofrecer un producto político que le permitía crecer más allá de sus grupos tradicionales (4.2.3). De hecho, la promesa autonomista, sus contenidos burgueses y urbanos (3; 3.1; 3.2; 4.1.1), facilitó la adhesión de la red de instituciones no gubernamentales, de las organizaciones sociales, de las élites y de los liderazgos mediales. Para que eso fuera posible, hizo falta también una retórica socialmente aceptada que cambió los componentes partidistas de la movilización en comunitarios sin perder su valor nacionalista (3.2.2; 3.1).

Este empeño del aragonesismo político en reivindicar la nacionalidad debió superar, de hecho, las reticencias que los principales actores sociales de Aragón muestran hacia el nacionalismo y lo nacional (4.1; 4.1.2). A ello ayudó, por un lado, la semantización de la autonomía plena como una forma de acceder al nivel de autogobierno y de calidad de vida de las Comunidades Autónomas más desarrolladas. De esas propiedades benéficas se aprovechó la aspiración a ser nacionalidad y su valor tímido y económico, más que político. Días antes de que se celebrara la concentración ante el Congreso, Miguel Roca declaró a un medio escrito en Zaragoza: "Sin interferir en las cuestiones de Aragón, comprendo sus aspiraciones regionales" (D16, 14.11.92); en 1996, Duran Lleida afirmó durante una visita a Zaragoza que Aragón era comunidad histórica, por tanto no nacionalidad, lo que fue destacado por El Periódico de Aragón; una vez presentada la propuesta de Estatuto en el Congreso, el Grupo Parlamentario CIU se opuso en las Cortes Generales al reconocimiento de Aragón y Canarias como nacionalidades porque conllevaba una pérdida de diferencialidad para Cataluña y, tras no poder evitarlo, advirtió que la necesidad de dar nuevos pasos en la definición de su hecho diferencial. Fuera porque cada nacionalismo necesita enfrente otro o por el imaginario que media en la percepción de lo catalán por parte de los aragoneses, dirigentes del PAR aprovecharon la oposición de CIU para revalorizar la identificación de Aragón como nacionalidad. En un debate radiofónico días antes de la manifestación de 1993, el entonces Presidente de la Comunidad Autónoma y Secretario General del Partido Aragonés respondía a un contertulio y prestigiado líder de opinión sobre el carácter autonomista o nacionalista de la movilización aragonesa:

Guillermo Fatás. Y yo, que soy muy autonomista, creo que Aragón no tiene que estar preocupado por definirse por nacionalidad o región, ni siquiera lo pondría en el texto del Estatuto de Autonomía"; **Emilio Eiroa.** "[...] quizá haya un silogismo que nos ayude a explicarlo: la Constitución admite dos tipos de Comunidades Autónomas, unas que son nacionalidades y otras que son regiones; las nacionalidades tienen una mayor categoría, mayores competencias [...], luego si es así, yo como aragonés lo que quiero es ser nacionalidad" (*La Rebotica*, 21.4.93).

Fox (1997: 79) anota que la forma de entender la lengua y la cultura marca el tipo de identidad que se produce y de pensamiento nacionalista que la guía. El aragonesismo político enfatizó de diversas formas el pasado común y la voluntad de seguir siendo (4.1.1.1), en unos casos reactivando el mito de San Jorge o diversas expresiones de la cultura tradicional, en otros enfatizando la capacidad creativa de la sociedad aragonesa y el carácter comunitario de sus principales individualidades. De esa forma se hicieron explícitas las convicciones, lealtades y solidaridades de una cultura compartida. Aún así mostró escaso interés por acontecimientos, como el novecientos aniversario de la muerte de Sancho I Ramírez de Aragón: La conmemoración quedó reducida en 1994 a un acto oficial - traslado del Santo Grial hasta Huesca -, sin que mediara crítica nacionalista ni celebración alternativa, pese a que con él nació el Reino en el S. XI y, por tanto, ofrecía la oportunidad de reforzar el discurso soberanista o, en todo caso, nacionalista. El hecho de que el discurso de la nacionalidad aragonesa fuera acompañada por el adjetivo de histórica avisa de que el pasado, esos siglos de cultura compartida, alimentaron propuestas nacionalistas de algunos actores sociales, principalmente partidos, instituciones públicas o medios de comunicación. Con todo, no oculta que el aragonesismo político desligó la autonomía plena de elementos básicos en una concepción culturalista de la nacionalidad, en concreto la lengua o la literatura (4.1.1.2; 4.1.1.3). En eso el aragonesismo moderado quedó parcialmente distante de su homólogo catalán, que ha hecho descansar la nacionalidad en la lengua, la cultura, las instituciones y la historia.

En opinión de Keating (1996: 194), esa concepción culturalista de la nacionalidad hace que, pese al fuerte apoyo social al nacionalismo, en Cataluña el sentimiento separatista sea débil. En el Debate sobre el Estado de las Autonomías celebrado del 10 al 13 de marzo de 1997 el President Pujol expuso una propuesta de *Soberanía compartida* como fórmula de relación entre Cataluña y España: En ella incluyó un vínculo de tipo confederal en materia de lengua, cultura y Derecho civil catalanes y otro de corte federal en Hacienda (135). Si esta forma de vivir lo nacional valida la tesis de Fox (1997) de que la forma de vivir la cultura condiciona el tipo de nacionalismo o de nación que se construye, esa

interdependencia se hace aún mas evidente en el caso catalán cuando, a la manera del estudio dirigido por Gifreu (1991), se constata la necesidad de formar y desarrollar un espacio catalán de comunicación y cultura como única forma de participar en la sociedad global como identidad diferenciada. Al analizar el proceso de reconstrucción nacional, Gifreu (Ibíd, 28) constata la urgencia de superar la atomización de los esfuerzos de cada territorio de lengua catalana y de coordinarlos en una estrategia general de defensa activa de la identidad histórica común. La propuesta soberanista de Pujol y el culturalismo diferencial de Gifreu explicitan una vivencia de la nacionalidad que supera los moldes del estado nación decimonónico. De hecho, al asumir que esa aspiración a lo nacional pasa por la previa conformación de un espacio propio de comunicación y cultura, Gifreu enriquece la lectura culturalista de la nacionalidad, porque la llena de los contenidos de la cultura de masas y de algunos debates bien recientes, como el de los flujos.

Trasladando esa reflexión a esta movilización, el protagonismo de los medios y la importancia que la realidad aragonesa acabó teniendo en la noticiabilidad social sugieren que, aunque se olvidaran componentes culturales como la lengua o la literatura, la cultura de masas también enriqueció y modernizó la percepción historicista que algunos discursos hicieron de la nacionalidad aragonesa. Incluso, si se asume que la marginalidad cultural de lo aragonés deriva de una aculturación secular (4.1.1.3), esa presencia del acontecer aragonés en espacios mediáticos de prestigio habitualmente reservados a la política estatal o internacional se revela como una forma de dignificación de lo aragonés que coincide con el discurso tímido realizado por algunos medios y el propio Gobierno autónomo (*Colores en alza*). Y leído desde el componente más o menos culturalista de la nacionalidad, este protagonismo de lo masivo y su papel de dispositivo nacionalista durante la reivindicación denota, al menos, un intento de hacer país y sociedad mediante estrategias similares a las que Keating (1996) atribuye a los *nacionalismos regionales*. Desde el valor identitario que el nacionalismo atribuye a la cultura como sistema de valores y creencias o como forma propia de interpretar lo real, la apuesta del Gobierno de Aragón por la política de ciencia y tecnología (Eiroa, 1992c; 1992a) y su empeño en impulsar una televisión autonómica se revelan como intentos de avanzar en la construcción de un espacio aragonés de comunicación y cultura que personificara la aspiración de una autonomía plena y la construcción de la nacionalidad:

"un Gobierno y un pueblo que aspiren a impulsar un proyecto moderno de desarrollo y de fomento de la propia identidad colectiva necesitan como instrumento prioritario la televisión. [...] La Televisión Autonómica es, por tanto, una oportunidad única para que, sin perder un ápice de nuestros referentes europeos y universales, los aragoneses

conozcamos mejor nuestra realidad cotidiana, las señas que conforman nuestra identidad colectiva, nuestras manifestaciones culturales y educativas. Los aragoneses necesitamos conocernos mucho mejor a nosotros mismos, más información sobre nuestra realidad más vivas" (Eiroa, 1992b: 65/6).

"Ara bé, la condició per poder optar a un lloc de reconeixement de la identitat nacional diferenciada en el concert europeu és la de constituir efectivament un espai cultural capaç de ser reconegut como a tal. [...] És en aquest sentit [...] la necessitat de la constitució 'interior' d'un espai català de comunicació, com a garantia d'èxit i com a procediment central de la construcció d'un espai cultural català (Gifreu, J. *Construir l'espai català de Comunicació*. Centre d'Investigació de la Comunicació. Barna, 1991: 26).

La lectura de Gifreu (1991) liga la contribución de la comunicación y la cultura de masas al logro de una identidad diferenciada a su capacidad para socializar la lengua catalana. A diferencia de esa forma de leer el lado culturalista de lo nacional, Tortosa (1996) destaca que las televisiones autonómicas no han limitado su función nacionalista a normalizar las lenguas minoritarias, sino que han contribuido a la construcción social de las nacionalidades subestatales ofreciendo focalizada la información española, europea o mundial. Esta posición recuerda el componente nacional que Hamelink (1981) atribuye a la información por la dificultad de transnacionalizarla y deja claro que, más allá de la lengua en la que se escriben o difunden las noticias, lo nacional se construye a partir de la visión del mundo que transmiten. De hecho, el mismo Gifreu (1991: 40) reconoce esa primacía cuando destaca la importancia de los flujos unidireccionales o bidireccionales entre Madrid y Barcelona o de estas dos ciudades con el resto de territorios catalano parlantes. Esa lógica trasluce el discurso del Gobierno de Aragón, empeñado durante la reivindicación en ligar la futura TVA a su capacidad para vertebrar "nuestro territorio a través de la transmisión de información y conocimiento de lo que somos" (Eiroa, 1992: 65-6); si esta apropiación del audiovisual sugiere el deseo nacionalista de que los aragoneses se vieran y reconocieran en un espacio tan mitificado como la televisión, las críticas de Heraldo al convenio televisivo por lo que suponía de colonialismo informativo o los reproches del Gobierno de Aragón a su homólogo español por la desigualdad que implicaba la negativa a la concesión del Tercer canal denotan, también, la conciencia de que el poder se jugaba en los discursos y, por tanto, de que en lo masivo se ponía a prueba la identidad colectiva o, en el caso del PAR, el proyecto nacional.

De hecho, el aragonismo moderado y otros discursos mediales o partidistas, como el de IU, pusieron en relación el hecho de que las Comunidades Autónomas con televisión propia coincidieran con las que tenían reconocido el rango de nacionalidad. Esta percepción social de los canales autonómicos denota que, fuera por estrategia del nacionalismo moderado o por efecto del mimetismo con otros territorios, los aragoneses ligaron de alguna forma nacionalidad y televisión propia e, incluso, convirtieron ésta en uno de los atributos de la idea nacional (ver 4.1.2.3) o en una causa más del sentimiento de privación relativa que alimentaba el sentimiento nacional. El apoyo social a la televisión autonómica se acercó al logrado por la autonomía plena: en agosto de 1992, según un sondeo elaborado por Malo de Molina (1992b), el 65.2 de los aragoneses se declaraba partidario de una televisión autonómica, siendo la información (67.7) y la cultura (60.8) los segmentos más demandados de la programación por encima del deporte (26.1) y películas (22.2) o concursos (6.8); en esas fechas, otra encuesta dirigida por Díez Nicolás (1992) reflejaba que el 70 % quería una televisión aragonesa y el 23 % se oponía, con el matiz de que en la provincia de Teruel el apoyo ascendía al 84 % (ver 7.3). Partiendo de que el concepto liberal de la nación prima la voluntad colectiva de seguir y seguir siendo (4.1.2), esta lectura de la nacionalidad y de la televisión o esta adhesión social a un canal autonómico propio explicita, siguiendo a Llobera (1996: 288-290), la voluntad de un pueblo de preservar su identidad y, por tanto, puede ser leída como la expresión de una conciencia nacional.

Anderson (1983) sostiene que la palabra impresa posibilitó la conciencia nacional al crear una manera unificada de comunicación y, sobre todo, lenguas de poder -las literarias-; otras formulaciones de lo nacional, incluida la Escuela de Chicago, enfatizan la contribución de los medios de comunicación de masas a la construcción, en unos casos, del estado nación y, en otros, diversas formas de estado moderno. Desde esa perspectiva el complejo acontecer ligado a la polémica televisiva, primero alrededor del canal autonómico y después en torno al convenio con Antena 3 TV, no sólo adquiere sentido en lo que tuvo de combate empresarial; también, evidencia su valor político dentro de los intentos de algunos partidos y medios por construir un proyecto político de carácter nacional o, en todo caso, por poner en cuestión la relación aculturadora de lo aragonés por parte de lo español. Tras el bloqueo aplicado por el Gobierno Central y el PSOE a la aspiración audiovisual aragonesa emerge así una lógica política próxima a la que generó la movilización autonomista: Por un lado, el Ministerio de Transportes, Obras Públicas y Telecomunicaciones se negó a dar la concesión administrativa pese a las reiteradas solicitudes del Gobierno autónomo y, por otro, el PSOE de Aragón rechazó la televisión autonómica aduciendo que el proyecto encargado por el Gobierno autónomo era un *despilfarro* (Alfredo Arola, portavoz socialista en las Cortes aragonesas, Diario de

Teruel, 10.7.92) o *muy deficitario* (Ramón Tejedor, segundo portavoz parlamentario, en Diario 16 Aragón, 18.9.92). Dado que se planteó como una respuesta a ese bloqueo, este intento de buscar un espacio común al sector público y privado a través del convenio con Antena 3 TV se revela mediado por la creciente desregulación y liberalización de las telecomunicaciones, pero sobre todo por la exaltación nacionalista y de poder que vivía el Gobierno autónomo tras sus éxitos políticos ante el Pacto Autonómico. La apuesta audiovisual se sumaba así a la autonomía plena como idea fuerza de lo nacional y, en consecuencia, como motivo para la moción de censura (136).

La sociedad aragonesa mostró escaso interés por el reconocimiento de nacionalidad. En todo caso, la vivió como una parte más del componente tímótico de la reivindicación. Su lado soberanista o nacionalista quedó obviado. Cuando fue incorporada al Estatuto, los actores sociales, incluidos los mass, valoraron de forma discreta ese reconocimiento. De ahí que la demanda del rango de nacionalidad deba ser imputada a algunas élites sociales. Quienes se oponían a la autonomía plena esgrimieron esa aspiración a ser nacionalidad como símbolo del abertzalismo de la reivindicación autonomista aragonesa. Aún así el aragonesismo moderado mantuvo como una condición irrenunciable para el apoyo al nuevo Estatuto la inclusión del rango de nacionalidad. Esa exigencia no se quebró ni siquiera durante la negociación con los principales partidos de ámbito estatal en las Cortes Generales. Si se toma como referencia la concepción decimonónica de la adhesión social como requisito para la atribución del rango de nacionalidad, en este caso difícilmente puede sostenerse que esa aspiración de ser nacionalidad fuera deseada y vivida por toda la comunidad, porque como demanda colectiva o como tema de debate social apenas sobrepasó el debate político. Con todo, partiendo de que se llegó a divinizar el nombre de Aragón (137) y a exaltar algunas desigualdades con otros territorios del Estado, esta forma colectiva de imaginarse pone de manifiesto que, al menos, el reconocimiento de nacionalidad produjo efectos tímóticos. En la medida que igualaba con otras Comunidades históricas, se dotó de atributos identitarios porque permitió que una parte de la sociedad actualizara su imaginario secular de reino y, además, compensó algunos aspectos del sentimiento de frustración o desigualdad respecto a lo catalán y lo vasco:

"[...] las movilizaciones del pasado año han tenido un doble efecto: por un lado, han fortalecido la conciencia autonomista de nuestro pueblo y han estimulado una voluntad colectiva en defensa de nuestros derechos que no admite marcha atrás" (Manifiesto de la Mesa de Partidos, 22.4.1993).

[...] otros pueblos necesitaron años para plasmar en un Estatuto su derecho al autogobierno [...] y mientras el Estado se resistía a sus demandas, esos pueblos fueron

afirmando su identidad, consolidando su cultura y sus señas colectivas" (Eiroa, 1995: 29).

"Aquello meses de reivindicación autonomista contribuyeron a que la sociedad aragonesa tomara conciencia de su papel dentro del Estado y reforzara sus convicciones autonomistas, su identidad aragonesa" (Eiroa, 1995: 10).

Estos dispositivos identitarios prueban que en la España autonómica no sólo el nacionalismo español se alimenta del peligro catalán y vasco, ni sólo estos construyen su discurso sobre la castellanización de España o la agresividad del Estado español; también otros nacionalismos emergentes -Andalucía, Aragón o Canarias- incorporan a su imaginario la animadversión hacia lo vasco o catalán e, incluso, utilizan ambos para reformular su relación con lo español y el Estado. Al mismo tiempo, esta lectura de la nacionalidad pone de manifiesto que la formulación constitucional del modelo autonómico y su posterior desarrollo está mediada por el mito centralista de la unidad de España, pero también por algunos estereotipos sobre la identidad derivados del debate norte/sur. Vidal Foch (1994: 53) señala que Cataluña La extensión de la autonomía a todas las regiones o la armonización de la LOAPA reflejan la estrategia estatal por asimilar Cataluña aprovecha que el modelo autonómico favorece "la negociación permanente y las soluciones particulares", para utilizar sus aspiraciones estatales "como elemento de presión política calculada". Y para Keating (1996: 151), el nacionalismo vasco y catalán se resisten a "aceptar el atributo autonomista o el horizonte federalista por lo que tiene de homogeneizador". En esa dinámica de ambigüedad y relaciones políticas o económicas de poder, la reivindicación de la nacionalidad por parte de Aragón demuestra que la ambigüedad de los dirigentes de PNV o CIU entre la asunción de la Constitución, e incluso el latente complejo de castración estatal (138), no sólo suscitan reacciones en el centro del Estado.

Después de toda esta movilización aragonesista, Bada (1995: 157) ha afirmado que "el nacionalismo en Aragón es casi un sentimiento privado, cosa de pocos aragoneses y algún asturiano"; otros líderes de opinión se han declarado partidarios de ser radicales en el sentimiento autonómico pero ajenos a cualquier nacionalismo (Fatás, 1994: 354) o, en todo caso, han señalado la disposición a reivindicar que Aragón es nación para no ser ni más ni menos que otros pueblos del Estado (Fernández Clemente, 1994). Este tipo de discursos prueba que, si el efecto mimético o el sentimiento tímido ante lo vasco o catalán explicó la lectura de la nacionalidad en clave de igualdad constitucional, también propició que algunos grupos dirigentes olvidaran su desconfianza ante el nacionalismo y adoptaran posiciones identitarias de fuerte componente nacionalista. Esa hipótesis aclara, en concreto, la radicalización del discurso nacionalista moderado. El informe Pi y Sunyer

correspondiente a 1990 afirmaba que sólo el 23 % se declaraba satisfecho con el funcionamiento de su autonomía y que el 52 % era partidario de un mayor grado de autonomía; bajo el título *Indicadores del creciente apoyo social a favor del autogobierno de Aragón*, un informe publicado en Heraldo (Valero, J.L. *Una reivindicación histórica*, Suplemento San Jorge, 23.4.93: 4) recogía que en 1990 el apoyo a la autonomía aragonesa era del 42 %, en 1991 llegaba al 43 %, en febrero de 1992 al 45 %, en junio de ese mismo año al 57 % y en febrero de 1993 al 62,7 %. De todos estos datos se infiere, al menos, que la tendencia del nacionalismo moderado a combinar algunos atisbos de exaltación nacionalista con la afirmación de fidelidad a la Constitución o de respeto a lo español facilitó la adhesión social a la autonomía plena, sin que esta perdiera valor como idea nacionalista:

"Los aragoneses tenemos un profundo sentido del Estado, entre otras razones porque fuimos piedra angular en su fundación [...]. Sin embargo, nadie puede decirnos que ponemos en peligro el Estado por pedir algo que otras Comunidades Autónomas disfrutaban desde hace más de doce años" (Eiroa, E. Intervención en el Club Siglo XXI. 11.5.1992).

"Este va a ser el territorio del anclaje, vamos a seguir dando el ejemplo histórico que ha sido la función de Aragón y de Zaragoza [...] hacer de elemento centrípeto; puede haber un discurso autonómico casi radical y sin embargo al nacionalista le veo esas connotaciones negativas" (Fatás, G. *La Rebotica*, Radio Zaragoza. 21.4.93).

"Al doblar una esquina nos salió al paso, a la vista, una pintura roja, sobre una pared encalada: ¡Aragón ye nazión!. Y a los pocos pasos, la misma pintada con idénticos rasgos" (Bada, 1995: 157).

Como atributo central de la autonomía plena, la nacionalidad contribuyó a que aquella idea se convirtiera en relato mediático y social capaz de legitimar el pasado y de explicar nacionalmente el presente (ver 3.1). Quienes cuestionaron la debilidad cultural o política de la movilización autonomista menospreciaron el espesor de lo masivo (4.1.1), porque en este caso permitió que, aunque fuera a través de componentes tímicos y emocionales o de un esquematismo argumental (3.2.2), se construyera una cierta idea nacional o comunitaria de lo aragonés. Hroch señala que durante el siglo XX el sentimiento nacional ha tomado forma política y ha abandonado la primacía que anteriormente se había reconocido a la literatura, la cultura y el folklore (en Hobsbawm, 1991). El hecho de que esta movilización se alejara de este modelo nacional y que, en concreto, lo masivo ocupara roles nacionalistas atribuidos antes a los intelectuales o a los cronistas no descalifica este supuesto proyecto nacionalista; más bien denota, a la manera apuntada Lyotard (1979), la crisis de los estado nación y

las nuevas forma de lo nacional dentro de la globalización. Tras catorce meses de movilización social, Aragón se convirtió en "[...] una de las cinco comunidades con mayor sentimiento autonómico" (Valero, J.L. *Una reivindicación histórica*, Heraldo de Aragón, Suplemento San Jorge, 23.4.93: 4). Dando por buenos los datos sociológicos, en este periodo el apoyo social a la autonomía aragonesa aumentó 17,7 puntos (Díez Nicolás, 1991; Ansó, 1993). Por otro lado, pese a la frustración autonómica recogida por el informe Pi y Sunyer, la valoración de las instituciones autonómicas superaba en diez puntos a las Diputaciones Provinciales y durante la movilización mejoró ampliamente a la Administración General del Estado y al Gobierno Central. Esta prueba de que los aragoneses se imaginaron como comunidad a partir de la autonomía plena y de las instituciones que la personificaron sugiere también cómo se llenó de contenido el término nacionalidad y que significado social acabó teniendo en la memoria social.

Según Llobera (1996: 288-290), en el pasado los estados "no tuvieron otra alternativa que perseguir políticas de construcción de la nación" y ahora las Comunidades Autónomas forman y fomentan la identidad nacional, aprovechando que esta "surge a unos niveles de integración inferiores a los del estado y hay fundadas razones sociológicas para creer que no se puede desarrollar a niveles superiores". Al promover la autonomía plena y socializarla desde su posición de liderazgo social y político, el Justiciazo o el Gobierno de Aragón contribuyeron de manera decisiva a esa definición de la idea nacional e, incluso, a representarla. Mairal (1996: 87) reduce el aragonesismo político al irredentismo costista y al fuerismo: Al primero le atribuye un valor cívico territorial porque enfatizó el vínculo de la 'comunitas' y el territorio; el segundo lo relaciona con quienes reivindican étnicamente apoyándose en "la naturaleza jurídica y constitucional de la 'comunitas', detentadora de derechos". El discurso de las instituciones de autogobierno dialogó con los dos. Por un lado, esgrimieron la defensa de los intereses colectivos desde posiciones de derechos históricos y constituciones. Por otro, esgrimieron la autonomía plena como un impulso al desarrollo territorial y una exigencia de la competitividad entre territorios. Según Keating (1996: 22), el nacionalismo cívico parte del individuo para edificar la nación y, por tanto, sostiene que los derechos y obligaciones individuales no derivan de la nacionalidad compartida. En esa lógica la posición de las instituciones aragonesas revela una vivencia étnica de la nacionalidad, incluso cuando formularon esta en términos territoriales.

La dignificación de lo aragonés incluyó también el reforzamiento del tejido institucional, como prueba que el Estatuto reformado incluye la capacidad del Presidente de la Comunidad para disolver las Cortes y convocar nuevas Elecciones. Esta vertiente soberanista de lo nacional se prolongó al cambio de denominación corporativa por parte del Ejecutivo autonómico, en la medida que el

nombre Gobierno de Aragón afirmaba el atributo básico de la autonomía en detrimento del historicista Diputación General (4.1.1.1). Con todo, esa afirmación del autogobierno no tuvo continuidad en otros aspectos, algunos tan centrales políticamente como la foralidad. Arana leyó los Fueros como un código de soberanía y ese mismo valor le han dado el PNV e, incluso, las propuestas soberanistas de algunos colectivos políticos y sociales vascos, como el Pacto de Lizarra o Elkarri; para Fox (1997: 88), únicamente configuran un régimen político administrativo peculiar y distinto porque dan por sobreentendida la soberanía de la Corona. El Presidente de la Comunidad Autónoma se apropió del pactismo forista para dejar claro que la demanda aragonesa no era radical ni iba contra el Estado y del concepto de nacionalidad histórica para reclamar que Aragón tuviera la denominación que se otorga a Galicia, País Vasco y Cataluña. Esta forma de obviar el aspecto soberanista de la foralidad motivó reproches desde posiciones foralistas: En algunos casos se argumentó que, careciendo de elementos étnicos o lingüísticos capaces de generar identificación comunitaria, la foralidad posibilitaba la construcción de un hecho diferencial y un mayor autogobierno frente al Estado. Ese debate explicita que, en el marco de la tematización nacionalista de la autonomía plena, la foralidad o la capacidad de decisión de las instituciones se alimentaron también del sentimiento de agravio y discriminación respecto al Gobierno Central y a otros territorios:

"Aquella personalidad llegó a hacer de Aragón una de las más notables entidades políticas de las Españas e, incluso, del ámbito mediterráneo. Conviene recordar estos hitos para que nadie siga negando a Aragón, desde postulados centralistas o desde el exclusivismo de otras Comunidades Autónomas, el carácter de nacionalidad histórica" (Eiroa, 1992a: 53).

"La exigencia de actualización del régimen foral no es sólo un derecho histórico que pueda entroncarse con el espíritu de las 'libertades aragonesas', sino que constituye en la práctica un plus de soberanía y de autogobierno impensable o irrealizable sin, entre otras, competencias fiscales y que deben tener para Aragón, no sólo un mensaje de nostalgia reivindicativa, sino un carácter irrenunciable" (Sebastián, 1994c).

Para Keating (1996: 106), el apoyo social al nacionalismo quebequés va asociado, en gran medida, a la impresión de que a Quebec le ha ido mal con Canadá y a la creencia de que les podría ir mucho mejor solos. El recurso a la foralidad por parte del aragonesismo político denota intenciones análogas. Al menos, en la medida que la experiencia de Navarra y País Vasco a través del concierto económico permitió al nacionalismo moderado aragonés pensar en las ventajas de trasladar a su Comunidad ese tipo de relación financiera con el Estado. La competencia entre territorios, idea

central de la globalización (4.1.1.4; 4.2.2), ayudó a acentuar esa urgencia pragmática que se plasmó en la demanda de un régimen de concierto económico entre la Comunidad Autónoma y el Estado. Aún con sus componentes historicistas esta parte de la autonomía plena quedó formulada dentro del marco político que era el sistema de financiación autonómica y del entorno económico ligado a la Unión Europea. Por tanto, esa reducción del fuerismo no dejó de ser una adaptación a las exigencias del presente y el futuro. Durante la movilización el nacionalismo moderado también hizo lecturas políticas de la foralidad. De forma especial, cuando se apropió del pactismo entre la nobleza y el rey que históricamente representó para expresar la voluntad de pacto con el Estado que tenían los impulsores de la autonomía plena. O cuando lo esgrimió como prueba de que Aragón merecía ser reconocida como nacionalidad histórica.

El General Cabrera sólo logró los apoyos aragoneses tras comprometerse a revitalizar el foralismo, que todavía pervive el Derecho civil aragonés, una parte del Cuerpo de Fueros y Observancias del Reino de Aragón; el foralismo ha marcado gran parte del aragonesismo político de los dos últimos siglos, dando lugar a un regionalismo *idealista* que se alimentaba de los Fueros o, más aún, de sus componentes míticos (139). Por tanto, su presencia en la reivindicación como prueba del carácter de nacionalidad histórica dialoga con ese imaginario social que mantiene vivos el mito de las libertades aragonesas y que, incluso, situó lo foral en el centro de la movilización autonomista de los años setenta (Delgado, 1977). De hecho, sectores foristas aragoneses han interpretado la disposición adicional quinta del Estatuto de 1982 como la actualización de los Fueros y Libertades o, en otras palabras, la prueba de que Aragón quedó definido como "Comunidad foral" (Bandrés, 1985: 73). Por el contrario, como señala Mairal (1996), la foralidad empezó a ser aculturada en la Contrarreforma, porque fue vaciada de su sentido nacionalista, soberanista. Y en los últimos siglos, dentro del proceso de homogeneización jurídica y cultura, una parte del pensamiento liberal ha dado por "bien muerto" el Derecho Público aragonés porque no "sirven de nada para la construcción del futuro", aún admitiendo que se podía adaptar "mejor que otros ordenamientos cíviles, a una sociedad moderna y democrática" (Delgado, en Garcés, 1997:16).

Las referencias genéricas que unos u otros sectores aragoneses hicieron al fuerismo durante esta reivindicación denotan, por un lado, los efectos de esa aculturación secular y, por otro, esa tendencia social a vivir lo aragonés a través de lo foral. En esa dualidad la utilización del quinto centenario de la ejecución de Juan de Lanuza (140) o de otros episodios foralistas para probar que Aragón es nacionalidad histórica se revelan esquematizaciones retóricas dirigidas a alimentar el sentimiento tímótico asociado a la autonomía plena, más que intentos de construir un discurso

nacionalista o un proyecto de construcción nacional apoyado en los Fueros. Argumentando que Aragón fue Estado antes que nación y que perdió sus Fueros en un proceso similar al vivido por Euskadi y Navarra (141), Jesús Sebastián (1994b/c) cuestionó la conveniencia del reconocimiento como nacionalidad y apostó, en cambio, por situar la reforma Estatutaria en el marco del mejoramiento foral que permite la Constitución, para lo que propuso un reconocimiento explícito de la foralidad, de forma que el Estatuto reformado incluyera la denominación de Aragón como territorio foral o, en todo caso, nacionalidad foral. El escaso eco social y político de esta propuesta se incardina en el tratamiento reductivo y marginal que el debate sobre la autonomía plena dió al fuerismo. Los discursos más o menos foralistas de algunos partidos o instituciones llegaron de forma dramatizada a la sociedad aragonesa a través de la cultura de masas, pero sin atravesar esta y, por tanto, sin pasar a la comunicación interpersonal (ver 4.1.1.1).

Con todo, el pulso político que mantuvieron los partidos sobre la inclusión o no del concierto económico en el Estatuto reformado denota el pulso de poder que mantuvieron los impulsores de la autonomía plena y los principales partidos estatales. Este empeño por trasladar a Aragón la fiscalidad de los territorios forales tuvo concreción en el primer texto que elaboró la Comisión Especial de las Cortes de Aragón en 1992 (ver 4.1.1.1); quedó mutado, después, en un *convenio* que debía regular las relaciones fiscales y financieras con el Estado -texto votado en las Cortes de Aragón en 1994- y luego, en un *acuerdo bilateral* a formalizar en la Comisión Mixta de Transferencias -texto aprobado en las Cortes Generales, 1996-. En ese proceso el debate sobre la foralidad acabó concentrándose en el intento de unos por reforzar de forma explícita el carácter foral de Aragón y de otros por mantenerlo en las Autonomías de régimen común (142). El hecho de que volviera a quedar situada en el marco financiero de la LOFCA prueba los límites soberanistas de la movilización y la reproducción del modelo oficial de desarrollo autonómico del Estado (4.2.1). Aún así, acabó siendo la única actualización de la foralidad que se incluyó en el Estatuto reformado, junto al mantenimiento íntegro de la Disposición Adicional quinta del Estatuto de Autonomía de 1982, convertido ahora en la tercera del Estatuto reformado, que recoge la voluntad de Aragón de no renunciar a sus derechos históricos:

"La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía" (Disposición adicional primera).

"La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido

corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la Disposición adicional primera de la Constitución" (Disposición adicional quinta de L.O. 8/1982 de Estatuto de Autonomía de Aragón y tercera de L.O. 5/96 de Estatuto de Autonomía de Aragón).

Además, la reforma del Estatuto acabó propiciando la pérdida de alguna competencia específica en función del Derecho civil aragonés (143) y, por tanto, una mayor integración en la legislación del Estado. Durante la elaboración en las Cortes de Aragón del texto reformado, sus redactores suprimieron el art. 29 del Estatuto de Autonomía vigente desde 1982 que regulaba las competencias de los órganos jurisdiccionales en Aragón, por considerar que la legislación estatal hacía innecesaria esa referencia en el Estatuto reformado. Sin embargo, tras ser aprobado en las Cortes Generales y entrar en vigor, los aragoneses quedaron privados de la posibilidad de recurrir en casación al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ya que, al haber sido eliminado el soporte estatutario que lo apoyaba, este Tribunal decidió inhibirse en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado. Las críticas de expertos foralistas ha motivado, de hecho, que el nacionalismo moderado haya presentado ya en 1999 en las Cortes de Aragón una iniciativa de reforma del Estatuto dirigida a recuperar ese artículo 29 del artículo de 1982. El Partido Popular frenó esa iniciativa con sus votos, lo que ha explicitado de nuevo las relaciones de poder e identitarias asociadas a lo foral. En ese sentido, el componente simbólico de ligar el día oficial de la Comunidad a la festividad de San Jorge y no al día en que uno de los Decretos de Nueva Planta abolió los Fueros de Aragón (29 de junio 1707) pone en duda la valoración nacionalista de lo foral por parte del aragonesismo político.

4.1.2.3. La construcción nacional

Para Máiz (1997), la *nation building* constituye la culminación de ese proceso social, porque exige dar forma política al proyecto nacional y, sobre todo, lograr que lo comparta un amplio bloque social. Hroch (1985) considera la identificación social con el proyecto nacional el rasgo definitivo de la última fase de una *nation building* e, incluso, la condición inexcusable para dar valor político nacionalista, y no sólo cultural, a un proceso social identitario. Otras lecturas sobre lo nacional reiteran la existencia de tres fases en el proceso de normalización nacional, entre ellas la recuperación de la identidad nacional o la toma de conciencia por parte de las élites nacionalistas. Además, a diferencia de la propuesta de Hroch, no ligan la culminación del proceso nacionalista a la formulación de un proyecto político capaz de movilizar a las masas (4.1.2). Brass (1997) señala incluso que los procesos de *nation building* pueden ser tan diversos como los nacionalismos y, en línea con lo que apuntan Llobera (1996) o Keating (1996), apunta que la globalización ha diluido algunos de los componentes

clásicos de las movilizaciones nacionalistas y de los proyectos de construcción nacional, como la soberanía y, por tanto, la conformación de un estado. Si Brass (1997) considera que cualquier proyecto secesionista se arriesga en el entorno de lo global a pagar un alto coste político de los proyectos secesionistas, Keating (1996: 73) concluye que las movilizaciones nacionalistas surgidas en el interior de Estados democráticos no se orienten hacia la conformación del Estado, sino más bien hacia proyectos de sociedad. Con todo, uno y otro admiten que estos nacionalismos subestatales no suelen renunciar al derecho a la autodeterminación, sino que más bien entienden la asociación con el Estado como fruto de un pacto que puede renegociarse y asumen formas de soberanía limitada o compartida.

Pero, además, esa generalización social de la idea y del proyecto nacional está lejos de ser un proceso uniforme y progresivo. Oltra (1994: 205-7) entiende que ese tercer momento de la movilización nacional implica la definición de los objetivos que se quieren conseguir y su asunción por la mayoría social, pero avisa de que el acomodo a la sociedad por mimetismo con la élite que encarna la nación presupone procesos de cambio social que van más allá de los procesos de comunicación social. Máiz, (1997: 180) exige incluso a una *nation building* "la disolución de los previos vínculos sociales, económicos y psicológicos y la adopción de nuevos modos de socialización y de comportamiento" o, en otras palabras, la articulación de una nación que sea "una comunidad naciente, articulada en torno a unas fronteras étnicas e identitarias y movilizadas por nuevos valores e ideologías". Sin embargo, Hroch ha hecho notar que los análisis sobre los procesos de construcción nacional han descuidado que la conciencia nacional se desarrolla desigualmente entre los sectores sociales y el territorio de un país (en Llobera, 1996). Y, en línea con quienes enfatizan el protagonismo de las élites sociales o de los medios, Smith (1997: 61) destaca que esa movilización de los miembros de la comunidad es la "tercera actividad del nacionalista", pero que, como persigue "activar las energías en pro de metas nacionales con el fin de reformar y renovar la comunidad", necesita ideas y discursos capaces de hacer brotar las emociones colectivas y de inspirarles fervor moral. En esa compleja red de relaciones sociales y discursos que hacen posible una *nation building*, Hroch deja claro que "cualquiera que sea la naturaleza de los primeros grupos sociales que la conciencia nacional capte, las masas populares son las últimas en verse afectadas por ellas" (en Hobsbawm, 1991: 20).

La traslación a la movilización autonomista de esta pluralidad de perspectivas sobre la construcción nacional permite dibujar los límites nacionalistas de este proceso social, pero también desmontar no pocos de los prejuicios e hipótesis que acompañan a los diferentes análisis sobre el pensamiento

nacionalista aragonés e, incluso, sobre la reivindicación por la autonomía plena y el agua (4.1.2). Que esta movilización social no lograra cambiar el modelo de identidades compartidas (4.1.2.1) ni aprovechara sus derechos históricos forales para modificar en términos de soberanía política la relación que Aragón mantenía con el Estado (4.1.2.2) no descarta en principio su posible valor nacionalista. La reiteración del Presidente aragonés y del nacionalismo moderado en que iban a propiciar la celebración de un referéndum sobre el grado de autogobierno denota que la aspiración a un mayor autogobierno constituyó el corazón de la reivindicación y, por tanto, este proceso social puede inscribirse en esa renegociación de la soberanía con el Estado que se atribuye a los nacionalismos subestatales. Y, aunque esa búsqueda de mayor soberanía no conformara un estado y sólo se institucionalizara con un discurso nacionalista moderado en la reforma parcial del Estatuto de Autonomía, la magnitud del respaldo social que consiguió evidencia que no se trató sólo de una propuesta de las élites sociales. La centralidad del espacio público mediatizado (3.2.2; 3.1.2) adquiere así todo su valor político nacionalista, porque hizo posible con su retórica institucional y discursiva que se cumpliera la fase de agitación y propaganda e, incluso, la que presupone la adhesión de los sectores populares a la idea de lo nacional, en este caso ligado a los contenidos estatutarios de la autonomía plena y a los valores emocionales que le añadieron los procesos de comunicación o los contextos.

Al iniciarse la movilización, el 68,9 % de los aragoneses creía que las Autonomías defendían mejor los intereses de cada territorio y el 75 % opinaba que el Gobierno de Aragón carecía de autonomía efectiva porque las decisiones importantes se acordaban en Madrid (Malo de Molina, 1992a). En junio de ese año (Díez Nicolás, 1992b) el apoyo a la reivindicación de la identidad autonómica de Aragón alcanzaba el 78 % de la muestra y sólo el 9 % se mostraba en desacuerdo con esa demanda (anexo 7.3). En noviembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas constataba que el 58 % de los encuestados deseaba mayor grado de autonomía, posición en la que también participaban quienes decían votar al PSOE -57- y al PP -56-; mientras que sólo el 4 % se expresaba a favor de un menor autogobierno (Chueca y Montero [eds]: 1995: 177). Al comenzar 1993, el 62,7 de los aragoneses apoyaban la demanda de autonomía plena y la consideraban básica para el futuro de Aragón; además, el 61,4 se mostraba dispuesto a participar en un referéndum que la rubricara (Ansó, 1993a). Esta vivencia social de la movilización política confirma que, sin afectar al sentimiento de membresía con el Estado, los aragoneses se imaginaron como comunidad a partir del autogobierno e, incluso, que el sentimiento de identidad vinculado a la autonomía plena vehiculó aspectos asociados a un proyecto de construcción nacional, como la voluntad de ser y seguir siendo que se infiere de la demanda colectiva de una mayor soberanía:

"¿Por qué algunos se empeñan en no tratarnos de la misma forma que a otros ciudadanos de España? [...] allá ellos con los pesebres que les construyen, con los cheques-votos. Aragón tiene nobleza y no se vende. Aragón dejará claro en esta jornada [...] que definitivamente desea tomar sus propias decisiones. [...] Aragón forma parte de España y la necesita, de la misma manera que España no puede prescindir de Aragón" (Lázaro, F. *San Jorge y las reivindicaciones aragonesas*. Diario de Teruel, 23.4.93).

"Nada de esto, ni por supuesto la defensa de la nacionalidad histórica de Aragón, está reñida con el concepto de España. Cuando defendemos un Poder aragonés fuerte, es decir la dignificación social de todo lo aragonés y la construcción de una identidad propia con sentido de futuro, no estamos pensando en la crear un nuevo estado ni en hacer peligrar la unidad española" (Eiroa, 1995: 135).

La complejidad que Hroch o Smith atribuyen a la generalización de la idea nacional da valor en esta movilización al tipo de enunciación discursiva que dominó el intercambio simbólico (3.2.1). De forma especial, adquiere sentido político nacionalista el predominio de lo emocional simbólico y de los componentes mítico espectaculares, porque a través de esa forma de apelar a los sujetos se hizo posible esa implicación social en torno a la idea de la autonomía plena. Como estrategia ideológica, el esquematismo discursivo y conceptual facilitó que, más allá de la pluralidad de posiciones derivadas de la clase, del territorio o de otras mediaciones, amplios sectores sociales se percibieran como aragoneses. Los movimientos etnonacionales persiguen de forma prioritaria la defensa del derecho de una comunidad a ser diferente y a controlar sus propios asuntos dentro de un territorio determinado; Entre otros proyectos nacionales subestatales, Cataluña y Quebec han priorizado su reconocimiento como sociedad diferenciada, aunque no han perdido la referencia final de la soberanía-asociación o compartida con el Estado ni tampoco las repercusiones sobre las oportunidades y los recursos que se derivan de una soberanía plena o suficiente (Keating, 1996: 135-142). En la movilización por la autonomía plena tanto la discursivización del acontecer social como sus diálogos con la historia o la cultura posibilitaron vivencias emocionales de lo diferencial aragonés y enfatizaron la aspiración de los locutores a la máxima soberanía que permitía la Constitución (4.1.2; 4.1). Pero, al concretar su horizonte en el logro de un Estatuto de autonomía plena, tomaron como referencia el grado de autogobierno de otras Comunidades Autónomas *privilegiadas* y, por tanto, llenaron su idea nacional, e incluso su aspiración de reformar el Estatuto, de intereses comunitarios y de sentimientos de privación relativa.

Esta movilización social concentró el deseo mayoritario de ampliar el autogobierno en una reforma que debería partir de las Cortes de Aragón; como pusieron de manifiesto los partidos que impulsaron la autonomía plena, ese procedimiento pretendía explicitar que la demanda autonomista, por un lado, partía de la sociedad a través del Parlamento que representaba la soberanía popular y, por otro, se contraponía al Pacto Autonómico generado a partir de un acuerdo de los dos principales partidos estatales. En esa lógica lo nacional aragonés de esta reivindicación aparece movido más por el enfrentamiento a una manera de gestionar las principales instituciones del Estado que por la aspiración de forzar el reparto de soberanía incluido en la Constitución. Ello sitúa la autonomía plena en la línea no maximalista que Brass (1997: 95) atribuye a las minorías nacionalistas; es más, si se tiene en cuenta la desconfianza de la sociedad aragonesa hacia los nacionalismos (4.1.2; 4.1.2.1), se confirma también la hipótesis de Brass de que las vanguardias nacionalistas adoptan esas estrategias moderadas y ambiguas porque no pueden arriesgarse a perder el apoyo de las élites sociales. En este caso, las encuestas explicitan que la sociedad aragonesa vivió mayoritariamente la autonomía plena al margen de aspiraciones independentistas o estatales. En junio de 1992, Díez Nicolás constataba que el 45 % de la muestra pedía mayor descentralización a favor del Gobierno autónomo, mientras que el apoyo a un Estado federal o a más centralizado no sobrepasaba el 6 % y la independencia apenas obtenía el respaldo del 8 %. Por ello, concluía "que el sentimiento regionalista está creciendo en Aragón, ya que la mayoría de la población reivindica la identidad nacional, pero al margen de posturas extremas. Desean mayor descentralización y más poder de decisión para el Gobierno de Aragón" (1992b: 133).

Esta capacidad de la autonomía para aglutinar las aspiraciones comunitarias tuvo mucho que ver con la semantización que de ella hicieron algunos actores sociales (3.1.2; 3.2), pero también dependió de lo que esa idea significaba para el imaginario colectivo. Por un lado, ese valor nacional del autogobierno dialoga con la frustración que produjo en las clases dirigentes aragonesas dejar de ser Reino para convertirse, primero, en provincia de un imperio y, luego, de otro Estado (Ubieto, 1991). De hecho, el aragonesismo político o cultural reitera la pérdida del poder político como una de las causas de la decadencia aragonesa y de la disgregación de su identidad. Por otro, durante la transición democrática la autonomía plena simbolizó el deseo de autogobierno político en oposición a una simple descentralización administrativa; tras el Estatuto de autonomía de 1982, se convirtió en el horizonte político del aragonesismo moderado insatisfecho con el grado de autonomía que posibilitaba el artículo 143 de la Constitución: Como muestran las palabras del primer Presidente de las Cortes de Aragón en su discurso de toma de posesión, para el PSOE la recuperación de las

instituciones aragonesas representaba "la instauración en nuestro territorio de la plena autonomía" (Embid, 1987: 17); el PAR, por el contrario, incluyó el objetivo de la autonomía plena en sus principales propuestas políticas, como los proyectos de Estatuto de Autonomía que el Gobierno de Aragón remitió al Parlamento autonómico en los años 1988 y 1989, y en sus tomas de posición más relevantes. En concreto el discurso de investidura de su candidato a la Presidencia de Aragón recogía la voluntad de "ejercer la autonomía con vocación de plenitud" (Gómez de las Rocas, 1988: 20) y el manifiesto elaborado por el PAR con motivo del Día de la Comunidad en 1990 lo encabezaba el título *Aragón adelante. Autonomía Plena*:

"Podemos comenzar afirmando, sin temor a ser discutidos, que Aragón es una región y fue una nacionalidad. Y podemos añadir que Aragón debe ser un Estado. [...] Si llegamos a la conclusión de que Aragón es una entidad de tipo medieval, que no merece la pena resucitar en el siglo XX, tengamos el valor de reconocerlo y no hagamos aspavientos cuando otros núcleos peninsulares, más llenos de vitalidad, tratan de captar hacia su órbita, parte de lo que comenzamos nosotros por negar que existe. Pero si, por el contrario, afirmamos nuestra fe de aragoneses, admitamos como un hecho útil y real la existencia de Aragón [...]. De aquí que la demarcación geográfica llamada Aragón necesite definirse como entidad política de tipo intermedio entre lo que constituye el gran organismo estatal de una república federal y el Estado particular" (Calvo Alfaro, J. *Aragón Estado*, 1993).

"[...] he cumplido sobradamente el compromiso [...] de impulsar la autonomía plena de Aragón [...] estoy dispuesto a propiciar una consulta popular para que quede claro el grado de autonomía que desea la sociedad aragonesa. En última instancia, no es imposible encontrar fórmulas legales que permitan conocer qué piensa de la cuestión el pueblo aragonés" (Eiroa, E. BOCA, 65: 1977).

"El Estado español nunca ha sido generoso con esta tierra. [...] Con todos estos cuentos que se inventan desde Madrid y que ponen en entredicho nuestra auténtica naturaleza, [...] ¿para qué carajos nos sirve formar parte de este tinglado infumable en que están convirtiendo España?" (Berdún, J.J. *Habrà que decirles basta*, El Periódico, 21.1.93).

El valor de la autonomía plena como idea fuerza del sentimiento nacional o identitario generado durante este proceso social queda probado desde el momento que el respaldo a una mayor autonomía de Aragón alcanzaba el 83 % entre los que se sentían más aragoneses y descendía hasta el 69 % entre los que se veían más españoles (Díez Nicolas, 1992b: 133). Desde esa constatación

adquiere sentido la forma en que una propuesta partidista devino en ideal comunitario (3; 3.2), porque en ese camino emergen también otros de los dispositivos ideológicos y políticos que pusieron en juego algunos discursos sociales, preferentemente las instituciones y los medios. Partiendo de que el Estatuto de Autonomía elaborado por las Cortes de Aragón y votado unánimemente por todos los partidos en 1994 representa el proyecto político nacionalista de la movilización aragonesa, podemos concluir que en este proceso social no sólo se pusieron en marcha los mecanismos de recuperación de una cierta idea nacional o el proceso de agitación política que normalizó aquella socialmente. También se concretó un grado tal de adhesión social que forzó las estrategias de los partidos, obligando a los impulsores de la autonomía a mantener o reforzar sus propuestas autonomistas y a quienes se oponían a ella a negociar y ceder para que se reformara el Estatuto de Autonomía. En ese camino, que recuerda en cierta forma la expresión de la idea nacional en un proyecto político y la conversión de este en un movimiento de masas que Hroch incluye en la tercera y última fase de una *nation building* (en Llobera, 1996: 266-7), se concentraron los mayores dispositivos de lucha política y de atisbos nacionalistas.

En la modernidad la legitimidad nacional es la forma más prestigiosa de vincular un pueblo a un estado o a unas instituciones comunitarias. Por esa razón en las sociedades democráticas los nacionalismos subestatales tienden a usar la misma tabla de lanzamiento que los procesos de construcción estatal. Como anota Hobsbawm (1991: 27), "el significado primario de nación [...] era político. Equiparaba al pueblo y al estado al modo de las revoluciones norteamericana y francesa". En esa lógica, que en España iguala el papel de las instituciones autonómicas al que en su momento jugaron los estados (Mercadé, 1994), se situó en este proceso social la centralidad política de las instituciones democráticas que representaban el autogobierno. La decisión de las Cortes de Aragón de constituir una Comisión Especial para elaborar un nuevo texto estatutario y la aprobación posterior de este para su remisión a las Cortes Generales actualizó el protagonismo que Rousseau atribuyó a los legisladores como creadores del carácter nacional (Llobera, 1996: 218). De hecho, a partir de la selección que llevaron a cabo para llegar a un consenso político, los diputados autonómicos institucionalizaron los atributos nucleares de la autonomía plena, como fue el caso de la nacionalidad y del concierto económico. Y, por su parte, el Gobierno de Aragón articuló la movilización mediante sus relaciones con los partidos y los principales actores sociales: Si su contribución resultó decisiva para el despertar nacional y para la posterior agitación política, su colaboración con el sistema medial y con otras instituciones sociales, como la Iglesia, hizo también posible el consenso social sobre la movilización autonomista y, una fuerte identificación de la sociedad con sus instituciones de autogobierno (3; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.3).

Keating (1996: 261-3) sugiere que en movilizaciones etnonacionales instituciones y sociedad se necesitan porque ninguna de las dos puede asumir la *nation building* en solitario y, en cambio, juntas se convierten en grupo territorial de presión: En esa línea de razonamiento, las instituciones definen legítimamente un interés común y proporcionan responsabilidad democrática; la sociedad aporta la fuerza y los valores comunitarios. El aumento en el grado de identificación social con sus instituciones y de apoyo a quienes en ese momento las gobernaban (Ansó, 1992b, 1993) confirma que el intercambio simbólico generado alrededor de la autonomía plena propició una comunicación social efectiva. Así lo demostró la participación en las manifestaciones autonomistas de 1992 y 1993 o el comportamiento electoral de la sociedad aragonesa en 1993. En cualquier caso, ese éxito del intercambio simbólico o la conformación de un bloque social autonomista entre los principales actores sociales de Aragón (3.1.1; 3.2; 4.1) evidencia que se actualizó el factor de ingeniería social que, según los constructivistas (Smith, 1997), acompaña a la nación. Esa hipótesis sitúa el discurso nacionalista más en la sociedad que en los partidos y, sobre todo, da valor no tanto al protagonismo del Gobierno, las Cortes o el Justiciazo, que está en su lógica institucional, sino a las estrategias y dispositivos que usaron para construir socialmente esa idea nacionalista de lo aragonés.

En esa red aragonesista de la sociedad se sitúa el papel de vanguardia asumido por algunas empresas informativas aragonesas. En un entrecruce de sus intereses comerciales y de su componente de superestructura institucional, esos medios cumplieron a un tiempo la función de construir una idea nacional que Wolf (1994: 47) les atribuye y el papel de intelectuales de la cultura de masas que, según la Escuela de Chicago, les permite vehicular relatos de carácter nacional (Jensen y Jankowski, 1993). Mientras interpretaban el acontecer noticioso y, en no pocos casos, el pasado, los discursos mediales hicieron comprender a amplios sectores de la sociedad aragonesa cuales eran sus intereses comunes, hasta el punto de que, siguiendo Hardin (1997: 115), dibujaron una lectura de aquella realidad que acabó adquiriendo valor comunitario. En otras culturas la epopeya y la épica (Daniel, 1995), la novela y el folletín (Gramsci, 1977) o el cine y el melodrama (Martín Barbero, 1993) vehicularon procesos de construcción nacional o, simplemente, movilizaciones identitarias. En este proceso social, la noticiabilidad devino en dispositivo discursivo e ideológico a través del cual se actualizó una determinada idea de lo nacional. Timoteo (1992: 22) etiqueta a los medios de *managers* de la sociedad de masas. Esa capacidad de gestión de lo social hizo que los símbolos nacionales, desde el concepto de pueblo o la bandera hasta la misma idea de autonomía plena, se resemantizaran como algo necesario para la comunidad y, de esa forma, pasaran a formar parte de la vida de los aragoneses.

Partiendo de que la cultura deviene en pluralidad de discursos y subculturas que se construyen a partir de una lógica dominante (Bada, 1995) y de gran parte de la lucha social por el poder se esconde tras la producción de discursos y significaciones (Hall, 1998), la centralidad de lo medial resultó decisiva para que la demanda de autonomía plena se convirtiera, primero, en el tema central del debate social y, después, en el símbolo de los intereses aragoneses. Asegurado su apoyo institucional (144), las instituciones, y en especial el Gobierno autónomo, encontró en los medios la mitificación narrativa que requería su voluntad nacionalista. En 1992 el Gobierno de Aragón eligió como eje de comunicación institucional para el Día de la Comunidad la idea de *equipo* y la personificó en un grupo de personas que construían una bandera. Los titulares relativos a las manifestaciones prueban que con sus relatos los medios hicieron del pueblo el gran hacedor de la reivindicación, reforzando así el componente nacionalista de la voluntad de ser y seguir siendo incluida en el cartel institucional: *El pueblo aragonés, en pie* (Heraldo, 24.4.92); *El pueblo respondió de nuevo*, (Heraldo, 24.4.93: 3), *Un torrente imparable* (Heraldo, 24.4.93, editorial); *El pueblo aragonés es el tren del futuro* (Bolea, J. Diario 16, 17.11.92). López Aranguren (1994) anota que el nacionalismo inventa símbolos, ceremonias, estandartes y conmemoraciones; Giner (1994: 37) señala, también, que ahonda míticamente en los ligámenes comunitarios. Además de que exaltaron el nombre de Aragón o el valor nacionalista de la bandera cuatribarrada, los medios nacionalizaron la sociedad aragonesa desde el momento que, a la manera apuntada por B. Andersson (1983), le reconocieron naturaleza de pueblo y la convirtieron en la protagonista de la aspiración a una mayor soberanía:

"La reforma del Estatuto es constitucionalmente posible. El rearme político de Aragón, también. Sabemos lo que queremos y sabremos exigirlo. Como en el 78. Como ayer" (Heraldo, 24.4.92, editorial *Tajante exigencia*).

"Los mejores trabajadores del mundo, hombres y mujeres trabajadores, eficientes e imaginativos". *Un potencial por desarrollar*. Trasobares, J.L. Heraldo. Suplemento, 23.4.93).

"En Aragón (ténganlo claro señor González y señor Echegaray) ya no habrá más olvido porque hemos despertado del sueño (de la pesadilla) para recuperar nuestra memorias, que es nuestro futuro" (Felix Romeo. *No habrá olvido*, D-16. 29.4).

"Yo pido a todos los abuelos y abuelas de Aragón que con educación y calma se pongan al frente de la manifestación porque está el porvenir de la juventud nuestra. Los

problemas nuestros en Madrid se ven muy mal; se verían mejor aquí y de mejor solución" RZ. Estudio de Guardia. 20.4.93. Oyente 2).

Un proyecto de construcción nacional define el pensamiento nacionalista que lo guía y el tipo de sociedad que lo impulsa a partir de las ideas o creencias que utiliza, pero sobre todo de los sectores sociales o espacios públicos donde aquel se construye (Veyrat-Masson y Dayan, 1996). El protagonismo del espacio público mediatizado adquiere así nuevos valores nacionalistas, porque se convirtió en la socialidad a través de la cual una parte de la sociedad aragonesa se imaginó como comunidad. El trámite parlamentario de la autonomía plena, desde el primer borrador de las Cortes de Aragón (octubre, 1992) hasta el que finalmente votaron las Cortes Generales (diciembre, 1996), diluyó algunos de los aspectos más soberanistas de la propuesta aragonesa, pero eso no excluye el valor político de este proceso de construcción nacionalista de lo aragonés a través de algunos espacios sociales, preferentemente los mediales (4.1.2.2). En todo caso, explicita algunos de sus límites y aclara el tipo de apelación nacionalista que construyó. Esta nacionalización imaginaria de lo social hizo que los discursos mediales sacrificaran los registros informativos, dominantes en las primeras semanas de la movilización, en favor de los connotativos e interpretativos (3.2.1) y de lecturas interesadas del acontecer o que mezclaban realidad y ficción (145). En las fechas previas a la manifestación de 1993 los medios instrumentalizaron las divisiones que evidenciaban los partidos para incentivar el respaldo social, como prueban algunos titulares (*Las pugnas políticas no enfrían el calor popular ante el 23 A*, Heraldo, 22.4.93) o las palabras institucionales que seleccionaron ("el protagonista de la manifestación del 23 A es el pueblo aragonés y no los partidos o las instituciones" [Eiroa, E.], Heraldo, 22.4.93). De los discursos de los participantes se infiere que ese predominio de lo emocional simbólico y de lo espectacular por parte de los medios acabó trasladándose al debate social (Romeo, F. *No habrá olvido*, D-16. 29.4) y político (*El pueblo ha hablado*, Montes, C. Heraldo. 24.4.92).

Para Martín Barbero (1993), en la imagen que se construye de lo nacional importa más la forma de la enunciación, sus dispositivos discursivos, que sus contenidos. En este proceso social ese entrecruce de melodrama y literatura heroica incluyó igual a los componentes históricos o simbólicos que a los factores económicos de la reivindicación (3.2.2). Si el sentimiento de agravio o de pérdida de oportunidades se tradujo en discursos pasionales y etnonacionales a la manera que apuntan Nagel y Olzak (1997) para las modernas sociedades urbanas, esa misma *narración primitiva* marcó la tematización mediática de la bandera, como demuestran algunas de las figuras incluidas en los titulares ligados a las movilizaciones (*Zaragoza se tiñó de rojo y amarillo*, Heraldo, 24.4. 92; *Aragón llevará su*

bandera a Madrid, Diario 16, 8.11.92; *El peso de una bandera*, Romeo, F. 16.11.92). El valor nacionalista de esta mitificación de la bandera se prolongó en los carteles oficiales del Gobierno autónomo para las festividades de San Jorge en 1992 y 1993 o en la centralidad que le otorgó la Mesa de Partidos: La concentración ante el Congreso el 15.11.92 consistió en la extensión de una bandera aragonesa de 3.300 metros y el acto autonomista celebrado el 23.4.93 se cerró con la cuatribarrada cubriendo las cabezas de los ciento veinte mil participantes. Esta forma de convertir la bandera en el símbolo de la construcción nacional asociada a la autonomía (146) pone de manifiesto el tipo de agitación social y de exaltación soberanista que se llevó a cabo. Sobre todo, sugiere la primacía de la seducción masiva sobre la persuasión racional (3.2; 3.2.1) y la debilidad argumental del proyecto nacional:

Los medios instrumentalizaron comercialmente el valor identitario de la bandera: Diario 16, Heraldo y El Periódico se apropiaron de la cuatribarrada en varios objetos promocionales que, además, publicitaron ampliamente;

"La gigantesca bandera que soy se extiende servirá para ocultar las vergüenzas autonomistas del centralismo madrileño" (Liso, M.A, *El corazón de Aragón late hoy en Madrid*. Diario 16 Aragón, 15.11.92).

"el actual Estado de las Autonomías no cumple el principio constitucional y ético de igualdad de oportunidades y derechos entre todos los españoles. [...] la reivindicación de autonomía plena queda bien lejos del sentimiento nostálgico o de la utopía ideológica (Discurso S.Jorge, 93:3/4).

La primacía de lo masivo y, más concretamente, de la prensa escrita aclara también el proceso de generalización de la autonomía plena y, por tanto, de su valor como idea fuerza comunitaria. En 1993 los porcentajes de apoyo a la autonomía plena y la disposición a votar en un hipotético referéndum aumentaban con el nivel de estudios y el carácter urbano de la población: el 69,5 de los zaragozanos y el 75 % de los universitarios respaldaban la demanda de autonomía plena; el 71 % de los oscenses, el 65 % de los zaragozanos y el 83 % de los encuestados con estudios universitarios se dijeron dispuestos a participar en un referéndum (cuadros 21, 22, 25 y 26, anexos); en cambio, quienes vivían en municipios con menos de mil habitantes y estudios primarios daban el apoyo más débil a la autonomía plena y al referéndum, respectivamente el 54.2 y 58.4 en las dos propuestas (Ansó, 1993a). De la misma forma, el deterioro de la imagen del Gobierno Central aumentaba, excepto en Huesca ciudad, con la dimensión poblacional, nivel de estudios y con el status social (Ibidem). Este perfil social y territorial de la adhesión a la movilización sugiere el marcado carácter urbano y ligado a

las clases medias con que nació y creció este proceso comunitario. Pero, también, avisa del efecto mitificador que los relatos mediales dieron a la movilización ante los sectores sociales aragoneses más en contacto con la prensa escrita. Los hábitos aragoneses de consumo mediático avisan del hiperliderazgo que algunos medios, como *Heraldo* y *Radio Zaragoza*, ejercen sobre las audiencias de Zaragoza (Ansó, 1992), por lo que su protagonismo a favor de la reivindicación explica ese proceso de adhesión social. Como la movilización se prolongó durante dos años y, por ello, la tematización medial se trasladó a la conversación interpersonal (3.2.2), ese proceso urbano y de clase devino en reivindicación popular y comunitaria.

Según Nagel y Olzak (1997: 14), la ciudad favorece la construcción de redes sociales, económicas y políticas a partir de "distinciones regionales o de comunidad de origen, de pertenencia a agrupaciones basadas en la lengua o de afiliación religiosa" y, de esa forma, propicia una *retribalización* en la que "los inmigrantes rurales se benefician de las afiliaciones étnicas en su adaptación a la ciudad". Esa localización del epicentro inicial de la movilización autonomista en las clases medias urbanas de Zaragoza da valor nacionalista a los componentes económicos, porque facilitaron la definición de intereses comunes a partir de los cuales se produjo la identificación social con la reivindicación. Más allá de que se hiciera efectiva la fuerza persuasiva que Gubern (1974) reconoce al mensaje emocional, esa competencia por el empleo, los recursos y los mercados que se atribuyó a la movilización aparece como una de las estrategias que permitieron al discurso autonomista aragonés aprovecharse de algunas de las patologías identitarias que, como el sentimiento de privación relativa y de agravio, dan al nacionalismo una importante capacidad de reacción (4.1). En *Somos un gran equipo* (DGA, 1992a) el Gobierno de Aragón enfatizó el compromiso de la autonomía plena con el desarrollo y la modernización; un año después, en el discurso de San Jorge, su Presidente relacionó la demanda autonomista "con la justa aspiración de que nuestras empresas y economía puedan competir, de que los aragoneses disfruten de mejor calidad de vida" (DGA, 1993a).

Para Moreno (1997), cualquier movilización nacionalista se alimenta de las crisis de legitimidad social que viven las instituciones del Estado y crecen con ellas. Y, según Nagel y Olzak (1997: 24), los movimientos étnicos no los generan las regiones más pobres de los estados, sino aquellas que disfrutaban de "desarrollo periférico". La ligazón que se estableció entre autonomía plena y los tópicos de la competitividad o de la calidad de vida reenvía a los temores y expectativas de una sociedad situada en el cuadrante más desarrollado del Estado y que tenía entonces una tasa alta de apertura económica (DGA, 1992b). Pero, también, dialoga con el deterioro de la situación política española y de quienes entonces gobernaban España en la última fase de su proyecto político y en el entorno de

una crisis económica. En ese contexto la defensa del desarrollo territorial denota el carácter cívico del proyecto nacional y la voluntad de primar la construcción identitaria de una sociedad sobre la conformación de un estado. Incluso la propuesta de celebrar un referéndum sobre la autonomía plena admite, siguiendo a Moreno (1997: 147), la lectura de un conflicto intergubernamental y no la de una intención secesionista: Suponía un reto político al Gobierno Central por la oposición de este a cualquier ampliación de la soberanía que fuera más allá del Pacto Autonómico. En cualquier caso, ese contexto sugiere también la existencia de condiciones materiales para que esos ideales de modernización y calidad de vida se llenaran de valores etnonacionales.

Máiz (1997) apunta, además de los elementos culturales o económicos, las movilizaciones nacionalistas se alimentan de lo que denomina *estructura de oportunidad política*. Entiende por tal, una serie de factores políticos, estratégicos e institucionales, que tienen carácter dinámico y, por tanto, cambiante. Todos ellos "facilitan o, en su caso, dificultan el desarrollo de la movilización nacionalista" (Ibídem, 187). Para que se conviertan en oportunidades políticas, deben ser percibidas por los agentes sociales y aprovechadas nacionalmente (Ibid, 188). Como respuesta comunitaria ante el Pacto Autonómico y el anteproyecto de Plan Hidrológico, la movilización aragonesa se benefició de la creciente animadversión social hacia el proyecto socialista dirigido por Felipe González. En ese contexto se entrecruzaron diversas relaciones de poder, las que se estaban jugando a nivel de política estatal PSOE y PP, las que confrontaban los intereses institucionales del Gobierno Central y del Autonómico o las que secularmente habían creado la dependencia de Aragón respecto al Estado o a otras identidades territoriales subestatales. Se confundieron así ideologías partidistas, aspiraciones colectivas, intereses sectoriales y políticas públicas, hasta el punto de llegar a ponerse en cuestión lo que Moreno (1997: 145) denomina la racionalidad organizativa de la Constitución:

"[...] por miedo a unos posibles separatistas se nos condena a los que no lo somos"
(Gastón, E., *Manifiesto concentración ante el Congreso*, 15.11.92).

"la forma actual del Estado de las Autonomías ya no sirve y empieza a ser una hoguera permanente" (Romero, E. *Otro modelo*. Ya. 17.11.92).

"los nacionalistas vascos y catalanes no buscan una solución permanente, sino una permanente reivindicación que [...] obliga a elevar continuamente los techos competenciales si no se quiere dejar a unas comunidades en inferioridad frente a otras. [...] Alguien tiene que levantar la voz para denunciar a esta España de dos categorías que está acabando con [...] España" (Jiménez Losantos, F. *Aragón tiene razón*. 17.11.92. ABC).

"[...] en los tres temas que usted señala como básicos: Autonomía, situación económica y cuestión hidráulica; en los tres temas nos ha culpado directamente a los socialistas. [...] donde tenía que demostrado su capacidad de consenso y diálogo, sólo ha habido rodillo y confrontación" (Marco, J. BOCA, 65: 1983).

Keating (1996: 265) las estrategias secesionistas a los nacionalismos étnicos, mientras que considera un rasgo de su carácter cívico que opten por proyectos de construcción social o cultural de la identidad. La importancia del agua, la televisión y la autonomía plena como tríada simbólica de la idea nacional o el hecho de que lo aragonés se construyera en el espacio público mediatizado sugieren que, en cuanto movilización nacionalista, se persiguió, sobre todo, articular socialmente la construcción de lo aragonés. Sin embargo, esa coyuntura política y social facilitó que, tras la concentración ante el Congreso, sectores mediáticos de ámbito estatal adscritos a la derecha española leyera la reivindicación autonomista de Aragón como un fracaso del Estado autonómico, aduciendo que esa dinámica de enfrentamientos de los territorios con el Estado ponía en peligro la cohesión de España. Este elogio irónico a la reivindicación aragonesa y el recelo explícito hacia los proyectos nacionales del PNV y de CIU sugiere que, por sus entrecruces con la historia y la cotidianidad social, aquella movilización autonomista acabó yendo más allá de sus propias aspiraciones soberanistas. Sobre todo, porque activó las tres lógicas de la España autonomista, según Moreno (1997): Puso en cuestión la inercia centralista y expresó la presión centrífuga de algunas nacionalidades subestatales o la mimesis autonómica.

Con todo, el hecho de que la movilización aragonesa alcanzara carácter nacional favorecido por la estructura de oportunidad política explica también sus límites y, sobre todo, su volatilidad. A la hora de valorar la contribución nacionalista de un contexto, Brass (1997: 87) destaca la fuerza del realineamiento político y social que se produce, las propuestas ideológicas alternativas que se crean y la voluntad de las élites dominantes de compartir el poder con los sectores nacionalistas aspirantes. Durante la campaña autonómica de 1991, PSOE y PP enmarcaron la reforma del Estatuto en un pacto de estado, admitiendo sólo la transferencia de más competencias por delegación; en cambio, el PAR leyó la reforma del Estatuto como un fin en sí mismo y la única vía de transferencia competencial aceptable porque incluía el título jurídico (Chueca y Montero [eds], 1995). Condicionados por la mitificación de la autonomía plena, los partidos de ámbito estatal variaron su posición, llegando en el caso del PSOE a asumir el objetivo de autonomía plena como instrumento para legitimar socialmente el proyecto político salido de la moción de censura. De hecho, el nuevo Presidente, José Marco, lo

convirtió en el centro de su discurso político, como demostró en su intervención ante el Rey Juan Carlos con motivo del quinto centenario del Compromiso de Caspe.

El hecho de que el partido estatal hegemónico, el PSOE hasta 1995 y el PP desde entonces, asumiera el discurso autonomista aragonés prueba la fuerza de la movilización, puesto que obligó a cambiar sus posiciones y estrategias. En cambio, la moción de censura presentada contra el Gobierno autónomo que presidía el PAR demuestra la escasa disposición de los grupos dirigentes políticos y sociales a compartir el poder con el nacionalismo aragonés emergente (4.2.3). Además, la comparación del voto en las Elecciones Generales de 1993 y las Autonómicas de 1995 evidencia la debilidad estructural del voto nacionalista en Aragón y, por tanto, matiza el valor nacionalista del realineamiento político producido en 1993 (4.1.2). Incluso algunos datos sociológicos sobre el votante del PAR sugieren que su comportamiento electoral deriva más del carácter que le atribuyen como guardián de los intereses territoriales que de sus propuestas sobre un autogobierno pleno (151): Entre quienes votaron al PAR en las Elecciones autonómicas de 1991, el 66 % se identificaban igualmente con Aragón y España, el 7.8 se sentía más próximo a lo español y el 14.8 a lo aragonés (Malo de Molina, 1992); además, el 25 % de quienes se decían votantes del PAR señalaban a otro partido como su referente ideológico, mientras que el 20 % de los autoidentificados como votantes del PP o el 16 % del PSOE señalaban al PAR como el partido que mejor defendía los intereses de Aragón (Montero, Oñate y Pallarés en Chueca y Montero [eds], 1995: 181). Puestos en relación estas actitudes previas y las conductas sociales durante la movilización autonomista, se infiere que el malestar social no se alimentó de aspiraciones soberanistas, sino de un sentimiento de agravio autonómico y económico que el nacionalismo moderado acabó capitalizando como defensor de lo aragonés. Sin embargo, al depender tanto de la estructura de oportunidad política, ese posicionamiento electoral y la reivindicación autonomista se invirtieron tan pronto como cambió el contexto político.

En cualquier caso, tal como apunta Hardin (1997), la semantización emocional y pragmática de las ideas fuerza de la movilización sugiere una identificación social por coordinación de intereses. Esa lógica convirtió la autonomía plena en un bien colectivo cuyo beneficio se distribuía entre los diferentes sectores de la sociedad aragonesa. Pero la naturaleza política de esta solidaridad grupal y ese contexto social llenó de tales valores simbólicos el acontecer que lo cívico territorial mutó con frecuencia en elementos etnonacionales. Si se traslada a este proceso la tesis de Gubern (1974: 195) sobre la función compensadora de los relatos míticos, esta discursivización exaltadamente emocional nació de una frustración que se quería superar de forma freudiana mediante fabulaciones gratificantes para quienes las producían o las recibían asumiéndolas como propias. El PAR eligió en su

cartel electoral para las Generales de 1993 el slogan *No lo dejes en otras manos*, referido a Aragón y personificado en un bebé. Este u otros usos políticos y sociales de tono etnocéntrico advierten de que la necesidad colectiva de buscar soluciones pragmáticas a problemas territoriales situó la semantización social de ideas como el agua, la autonomía plena y la televisión (4.1.1.4; 4.1.2.2) más cerca de la movilización etnonacional urbana esbozada por Nagel y Olzak (1997) o Hardin (1997) que del carácter cívico que atribuye Keating (1996) a los nacionalismos subestatales, preocupados por la defensa del territorio:

"Y nuestro autonomismo tiene claros fundamentos progresistas e integradores" (Heraldo. *El sentimiento autonomista*, Supl SJ 93).

"[...] un Gobierno y un pueblo que aspiren a impulsar un proyecto moderno de desarrollo y de fomento de la propia identidad colectiva necesitan como instrumento prioritario la televisión" (Eiroa, E. *Una televisión para todos los aragoneses* en Especial TVA. Diciembre, 1991).

"[...] Somos gente eficiente. ¡Dennos una oportunidad!" (Trasobares, J.L. *Un potencial por desarrollar*. Heraldo. Suplemento, 23.4.93).

De la tríada simbólica que nucleó la idea nacional aragonesa, el agua se tematizó en el debate social con motivo de la polémica trasvasista vivida a lo largo de los meses de enero y febrero de 1993. Según Nagel y Olzak (1997: 25), "las tentativas de explotar recursos que tienen una base regional [...] pueden activar lealtades regionales, con frecuencia etno regionales", más aún, si el centro reclama el recurso o dispone de él. Como el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional incluía varios trasvases del Ebro a otras cuencas y la sociedad aragonesa se movilizó ante esa posibilidad cabe inferir que esa lucha por el recurso agua se inserta en esa tradición de movilizaciones etnoterritoriales que definen Nagel y Olzak. De hecho, la Mesa de Partidos la incorporó como segunda idea fuerza de la manifestación celebrada en Zaragoza el 23 de abril de 1993. En el suplemento especial por la festividad, Heraldo se preguntaba ese mismo día sobre las cuestiones que más preocupaban a los aragoneses e incluía, apoyándose en datos del CIS, que, a diferencia de su escasa valoración en el resto del Estado, la sequía era el cuarto problema más importante para los aragoneses, lo que "demuestra la sensibilidad social hacia todas las cuestiones relacionadas con el agua". Un año después, en idéntico suplemento, Heraldo dedicó esas páginas al problema del agua: En dos de esos artículos, Miguel Angel Aragüés llegó a considerar el agua el nuevo Pilar de los aragoneses y para Alfonso Zapater "representa más que un símbolo porque constituye su razón de ser". Estas formas de vivir el agua denotan una percepción del recurso que trasciende los efectos económicos e, incluye,

numerosos componentes pasionales. Además de expresar la conciencia social de un cierto *colonialismo interior*, la promesa del agua se discursivizó socialmente como el símbolo del desarrollo y la vertebración del territorio. Y su valor étnico se acentuó cuando se insertó en la reivindicación autonomista y, por tanto, se sumó al complejo juego de estrategias, emociones y actitudes que enfrentaban a los partidos y a las instituciones públicas de Aragón y España.

Esa dotación de atributos etnoidentitarios reenvía también a los múltiples diálogos que la polémica hidráulica, y en general el agua como promesa de futuro, estableció con el imaginario colectivo. Además del empeño costista en los regadíos que culminó en la Ley de Riegos del Alto Aragón, en los años veinte una parte importante del aragonesismo regionalista se vivió como comunidad a partir de la creación de la Confederación Hidrográfica del Ebro durante la Dictadura de Primo de Rivera. A este respecto, Embid (1987: 31) recuerda que los riegos están presentes en las proclamas, artículos y manifiestos políticos del aragonesismo político anterior a 1936 e, incluso, en los proyectos de Estatuto de Autonomía, pero, sobre todo, alimentan la creencia social en "unas posibilidades sin medida de promoción económica mediante la regulación completa de las aguas". Durante los últimos veinte años la sociedad aragonesa, en gran medida liderada por los mismos medios de comunicación que impulsaron la movilización contra este anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional, ha vivido convulsionada cualquier peligro contra esa promesa del agua, como se puso de manifiesto con el proyecto trasvase de aguas del Ebro al Pirineo Oriental al final de la Dictadura de Franco. En esos entrecruces la polémica del agua trascendió, por tanto, su valor de noticiabilidad, porque puso en relación pasado, presente y futuro. En ese encuentro de temporalidades, el agua adquirió valores nacionalistas, ya que perdió su sentido sectorial o partidista para convertirse en valor comunitario (147) y expresó a un tiempo el sentir de una memoria colectiva y la voluntad de seguir siendo.

En ese valor nacionalista el agua revela el carácter social de esta construcción nacional, pero también la naturaleza de *lobbying* que tuvo la posición hidráulica aragonesa. En el informativo de una televisión estatal se llegó a preguntar al Presidente de la Comunidad Autónoma si Aragón no estaba chantajeando al Gobierno Central con el agua, igual que otros territorios lo hacían con la violencia terrorista o la amenaza de independencia. En cuanto que expresó algunas de las relaciones de poder y dependencia que existían en el interior del Estado, el debate sobre el agua actualizó algunos usos de la reivindicación permanente que caracterizan a los nacionalismos subestatales en España. En esa perspectiva confirma la influencia que tuvo en este proceso el mimetismo autonómico. Pero, también, avisa de que a través del agua se utilizó el victimismo para reforzar la movilización: Nagel y Olzak (1997: 18) sostienen que, si los sectores político y económico se convierten en espacio de la

competición por recursos y por poder, cualquier incremento por parte de un competidor exige incrementos paralelos en otros contendientes; en este proceso la amenaza del otro hizo que en algunos momentos la posición aragonesa se tiñera del irredentismo que, en opinión de Mairal (1996: 82), caracteriza al costismo y aragonesismo político de izquierdas. En cualquier caso, estas vivencias se acercaron a la lectura económica del nacionalismo que hacen los *modernistas* (Smith, 1997), aunque con la tendencia a mantener vínculos con el Estado de forma que, según apunta Keating (1996: 266), queden en condiciones de influir en la política estatal:

"[...] el agua es instrumento integral de desarrollo, factor de reequilibrio territorial y un valioso patrimonio ecológico. [...] los recursos hídricos son cada vez más importantes para atraer industrias, diversificar cultivos de regadío, desarrollar nuevas formas de turismo, generar servicios y fijar población" (Eiroa, E. Discurso San Jorge, 1993: 4).

"La conciencia del atraso, la pobreza y la postración del territorio aragonés encuentra uno de sus símbolos fundamentales en el agua y su inspiración en los principios de la política hidráulica por los que tanto clamó el propio Costa. El Aragón del siglo XX se ha definido políticamente y con intensidad por la reivindicación del agua como una pieza esencial para la configuración de su futuro" (Mairal, 78).

"Integrar culturalmente Aragón es, entre otras cosas, crear una infraestructura cultural correctamente distribuida por su territorio y circuitos por donde circulen símbolos creativos" (Bada, 1995: 117).

"[...] la existencia de canales autonómicos en determinadas Comunidades es una muestra más de las desigualdades que propicia el actual Estado Autonómico. [...] el sistema audiovisual español acentúa las diferencias de calidad de vida y de oportunidades en un campo tan importante como la comunicación audiovisual" (Eiroa, E. *Una televisión para todos los aragoneses* en Especial TVA. Diciembre, 1991).

El hecho de que este discurso sobre la igualdad de oportunidades y sobre la lucha por los recursos se trasladara al debate sobre la televisión sugiere que una parte de la construcción nacional se jugó también en el espacio público de comunicación y cultura de la sociedad aragonesa. De ahí que, si la centralidad del espacio público mediatizado en la reivindicación autonomista adquiría valor nacionalista porque reforzaba el proceso de construcción social de lo aragonés, el conflicto empresarial y político generado alrededor del convenio televisivo aparece como la quiebra de ese mismo proyecto nacionalista aragonés: Igual que había articulado la relación entre las instituciones de autogobierno y la sociedad, el espacio mediático distorsionó esa sintonía comunitaria y puso las

condiciones para que ese proyecto político supuestamente nacionalista fuera sustituido por otro *españolista*. En un primer momento, los medios opuestos al convenio televisivo se apropiaron de la autonomía plena para racionalizar ante su audiencia el apoyo que dieron a la moción de censura votada por un tráfuga y encabezada por un candidato denostado por ellos durante los años anteriores; con posterioridad, el nuevo Presidente usó la autonomía plena para legitimar socialmente su gobierno, a lo que colaboraron los medios opuestos al convenio, destacando su compromiso con la autonomía plena (*Marco promete la autonomía plena para Aragón*, D16, 15.9.93; *Marco promete la autonomía plena sin retractarse de sus críticas al 23 A*, Heraldo, 15.9.93).

Brass (1997: 80) considera "de capital importancia" para el éxito de una movilización nacionalista que un partido "controle la representación" de las reivindicaciones comunitarias frente a los rivales políticos. Sin embargo, esa organización política nacionalista debe ser "capaz de ofrecer continuidad" a esa movilización hasta que consiga sus objetivos políticos. El PAR no llevó la dirección de la reivindicación, pero aprovechando que en esos años presidía la Comunidad Autónoma consiguió capitalizar para sí los meses de reivindicación. Así lo prueban los beneficios que obtuvo del realineamiento electoral producido en 1993. Sin embargo, el convenio audiovisual devino en un pulso de poder en el espacio público mediatizado, en el que el nacionalismo moderado acabó demonizado por una lógica discursiva e intencional similar a la que había hecho posible su mitificación durante la reivindicación autonomista. La demonización del PAR [ahora 'neonacionalismo aragonés' y antes 'regionalismo primitivo, españolista y un tanto cazurro'] se concretó en las sombras legales e irregularidades administrativas del convenio o de la gestión del gobierno y en una supuesta traición a los intereses de Aragón y a su proyecto nacionalista. PSOE y medios centraron su estrategia de desgaste del PAR en su nacionalismo, al que llegaron a presentar como lo contrario de las expectativas sociales ("*El nacionalismo del PAR es lo contrario de la autonomía plena*", Heraldo, 15.9.93: 3).

Cuando señala las condiciones para que un movimiento nacionalista culmine con éxito, Brass (1997:76) apunta la exigencia de que las élites que la iniciaron procedan adecuadamente a los intereses de aquel, aunque también advierte que puede agotarse si sus principales reivindicaciones son atendidas por el sistema estatal. En el proceso aragonés apenas fue necesario esperar a que las Cortes Generales aprobaran la reforma del Estatuto en los últimos días de 1996, porque el convenio audiovisual y la moción de censura la habían desactivado mucho antes. Las transferencias de voto habidas en las Elecciones Generales de 1993 se invirtieron a favor del Partido Popular en los comicios de 1995 y 1996, lo que confirma que la movilización había mutado ya de sentido o quedado

desvalorizada. Si el grado de realineamiento político mide la fuerza nacionalista de una movilización social (Hetcher, 1975; Máiz, 1997), el proceso social aragonés quedó limitado en sus efectos y abortado antes de su consolidación. La sociedad aragonesa acompañó con el silencio la tramitación y aprobación del Estatuto reformado por las Cortes Generales. Su homología con la afirmación de Woodrow Wilson "ayer no éramos una nación; ahora ya lo somos", tras ser aprobada la Constitución federal norteamericana, denota que los aragoneses no se imaginaron como nación a partir de ese acontecimiento. Esta realidad social demuestra el carácter estructurante que en la movilización aragonesa desempeñó la oportunidad política (Máiz, 1997). Esa lógica valida la centralidad de la moción de censura en la desmovilización de la sociedad aragonesa o la paradoja, constatada por Garcés (1997: 136), Aragón ha "accedido a su mayor grado de autonomía cuando tanto en esta Comunidad Autónoma como a nivel del Estado gobierna el Partido Popular o, dicho de otro modo, la derecha tradicional" que se opuso a la autonomía aragonesa hasta su institucionalización. En cambio, excluye el maximalismo nihilista de que, tras la sustitución del Justicia Emilio Gastón, "Aragón no dijo nada" porque "no existe" (Bada, 1995: 156) o que los tres mil metros cuadrados de bandera aragonesa desplegada ante el Congreso "un gesto desenfadado, como el de un niño contrariado que saca la lengua" (Ibídem):

"[...] Si las instituciones no están a la altura de este impulso popular perderán toda autoridad moral. En tal caso, despidámonos de la Autonomía plena" (Trasobares, J.L. *El fracaso estratégico*, Heraldo. 29.8.93).

"Puede comprenderse el nacionalismo saharauí e incluso el cubano, pero no el nacionalismo cachirulero aragonés" (EP, 15.9 extracto discurso censura)

"Marco calificó el nacionalismo del PAR de 'estrambótico y cachirulero' y afirmó que es lo opuesto a la autonomía plena" (Haldo, 15.9: 3);

"[...] En Cataluña no tienen presidentes asturianos, no convierten en pamemas sus candidaturas a ser sede olímpica, no hacen hoy una cosa y mañana la contraria" (Trasobares, J.L. *El ejemplo*. 11.8.93).

"Ha desmontado el movimiento nacionalista que tanto inquietaba al PSOE. [...] Marco supo desde el principio aliarse con los poderes fácticos" (Bardají, R. "Un hombre que tiene a todos acotolados". Heraldo, 6.6.94: 4).

Sin asumir las tesis de que, a diferencia de otras identidades como la vasca o la catalana, la aragonesa ha acabado disolviéndose en lo español (Peces Barba, 1994: 221) o de que el nacionalismo aragonés responde bien a una estrategia política para acceder al poder (Pinilla, 1994), esta movilización

nacional se benefició del efecto *mimético* de lo catalán (Garcés, 1997: 119) y del debate político interestatal (Llobera, 1996: 288). En su explicación antropológica de los nacionalismos europeos (147), Todd (1995: 69) atribuye a la provincia de Huesca el mismo tipo de nacionalismo étnico que al resto de España donde desde 1500 ha dominado la familia matriz. En cambio, caracteriza las provincias de Zaragoza y Teruel como zonas dominadas por la ideología liberal militarista por el predominio secular de la familia nuclear igualitaria. En su *nation building* el nacionalismo catalán ha primado, por un lado, el autogobierno, la lengua y la cultura y, por otro, la política económica, la sociedad civil y las relaciones exteriores (Keating, 1996: 164). La forma de *hacer país* que pusieron de manifiesto quienes impulsaron la movilización social aragonesa apenas incidió en la diferenciación identitaria; en cambio, enfatizó la reivindicación de derechos y la promoción de una política territorial. Al dejar fuera del debate político la formalidad o la lengua y concentrarse en la correlación que mantienen autonomía política y competitividad territorial, este sentimiento aragonés se alejó del tradicionalismo que hasta entonces había primado en el nacionalismo aragonés y, en general, en la reflexión comunitaria sobre lo aragonés. En la medida que, como evidenciaron discursos y comportamientos institucionales (148), se promovió lo aragonés o se defendieron los derechos comunitarios en el marco de la globalización cultural y económica, dibujó un esfuerzo modernizador e impulsor de proyectos de desarrollo, en la línea que Keating (Ibíd, 33) reconoce a algunos nacionalismos minoritarios, como Escocia y Cataluña (149).

4.2. La hegemonía

Señala Bada (1995) que, como representación de uno mismo, la identidad presupone el empeño subjetivo de ser a un tiempo siempre el mismo y de ser ante los otros. La traslación de esa hipótesis a las identidades comunitarias implica continuidad y coherencia en la conducta social. De ahí se infiere que, a la manera apuntada por Llobera (1996), esa construcción de identidad adquiere valor en la larga duración. En ese horizonte los aragoneses se han vivido secularmente a partir de una serie de atributos identitarios, de forma especial la mitificación de sus libertades, personificadas en los Fueros y sus instituciones (4.1.1.1), y del sentimiento de privación relativa del que se ha responsabilizado bien a lo castellano, bien a lo catalán, bien al centralismo del Estado. Como los poderes establecidos y los sin poder se disputan sus posiciones a través de los discursos, esas vivencias de uno mismo y de algunas alteridades se han trasladado con frecuencia a la cultura escrita, de forma especial a la historia, a la literatura y, de forma más reciente, a los medios de comunicación. En esos espacios lo aragonés ha sido regionalizado como español a lo largo de la modernidad y en ese proceso se han

aculturado no pocos de los valores o creencias sociales que lo caracterizaron mientras tuvo el soporte político de sus instituciones y de su soberanía. Al faltar estos y quedar en posición marginal respecto a la nueva hegemonía del estado centralizado, lo aragonés ha vivido múltiples dificultades para, siguiendo a De Certau (en Grandi, 1996: 231), construirse un lugar propio desde el que gestionar la exterioridad. Esa voluntad es movimiento, acción y reacción, procesos sociales a través de los cuales se ha hecho y mestizado la identidad de los aragoneses.

Repensar la diferencia cultural y comunitaria a través de las nociones de jerarquía y hegemonía supone, según Gilroy (1998: 83), acercarse a la comprensión política de la identidad y de los complejos procesos mediante los que se hacen posible las diferentes identificaciones sociales. Señala Vidal (1986:45) que "la jerarquía y el poder constituyen en sí mismos una provocación para el aragonés, que tiene entrañada, en lo más hondo de su ser, una aversión invencible a la autoridad y una proclividad nativa a la anarquía". En lo que tiene de estereotipo, esta forma de imaginarse la comunidad actualiza la mitificación romántica de lo aragonés y otras lecturas de lo aragonés desde la historia: Según Lacarra (1972), una parte de la oligarquía aragonesa asumió la conversión del Reino en provincia del Imperio Habsburgo y, siglos después, sectores importantes de la burguesía aragonesa se inclinaron por los beneficios de integrarse en lo español, sin embargo, Cañellas (1984) y Ubieta (1991) anotan que la nobleza aragonesa vivió marcada por la disolución de la identidad política del Reino y el aragonesismo político y literario dominante en el periodo 1870-1930 enfatizó esa tendencia a vivirse comunitariamente a partir del sentimiento de ser menospreciado y olvidado en favor de otros pueblos y territorios del Estado. Con todo, también sugiere que las relaciones de poder median una parte importante de la vivencia social de la identidad aragonesa. De hecho, si el nacionalismo se ve favorecido por la existencia de desigualdades o por la percepción subjetiva de ser agraviado (Brass, 1997: 73) e, incluso, si el sentimiento de derrota encierra potencial nacionalista (Máiz, 1997: 182-4), el imaginario aragonés presenta condiciones propicias a un sentir nacional.

El hecho de que las instituciones políticas y mediales aragonesas o de que los participantes en las manifestaciones construyeran la movilización autonómica e hidráulica a partir del sentimiento de desigualdad sugiere que la vivencia identitaria de la autonomía plena se formuló como una reivindicación de derechos o de apego a la libertad. Como la hegemonía se pone en juego en los comportamientos sociales y en los discursos (Ang, 1997), las conductas y declaraciones de quienes participaron, a un lado y otro, en la movilización aragonesa denotan la conciencia de librar un pulso político, que incluía relaciones de poder dentro del Estado y en el marco de la competencia entre partidos (4.2.1; 4.1.2). Incluso, si se atiende a las lecturas que las principales organizaciones sindicales o al protagonismo que adquirieron instituciones sociales como la iglesia o las confederaciones

empresariales, cabe admitir que también se pusieron en juego importantes relaciones de poder en el interior de la sociedad aragonesa (4.2.3). En ese caso, se habría cumplido la hipótesis enunciada por Ang (1997: 89) de que en una perspectiva secular o actual esa lucha por las significaciones reenvía tanto a procesos de hegemonía territorial como sociales. El posible carácter burgués de la movilización se entrecruza así con el fuerte pulso que el aragonesismo político y una parte de la sociedad aragonesa echaron al Estado centralizado, que en aquellos momentos personificaba el PSOE. Lejos de expresarse en términos de violencia o de imposición autocrática, en ambos procesos el poder se reveló como mecanismo social y no sólo jurídico o institucional, a la manera que dibuja Foucault (1978a):

"Aragón debe tener idénticas posibilidades de progreso y crecimiento económico que las regiones de su entorno" (Cámara de Comercio, Diario del Altoaragón, 21.4.92).

"Dudo de la virtualidad efectiva de un triste acto folklórico instrumentalizado por el Gobierno de la DGA"(La incongruencia de la DGA, Carta al Director, Diario del Altoaragón, 17.4.92).

"son más bien las desigualdades en la construcción de la España autonómica, tal como aquí se experimentan, las que han situado de nuevo a Aragón en circunstancias históricas en las cuales preguntarse sobre la propia identidad" (Mairal, 1995: 16).

"es justo que reclamemos también a los Poderes Centrales que se nos considere como parte esencial del Estado español. Con demasiada frecuencia, venimos siendo tratados como un elemento secundario del Estado. [...]. El Pacto Autonómico, catorce años después de aprobada la Constitución, es el mejor ejemplo de lo que es un acuerdo pensado, diseñado y ejecutado desde el Centro" (Eiroa, E.1992a: 31).

Según Hall (1998), las identidades sociales están sujetas a una doble articulación: La que une clase, raza y género y la que entrecruza el territorio con las diversas formas de soberanía política. Y, si atendemos a Gilroy (1998), la identidad tiene una enorme capacidad para hacer visibles las conexiones entre la cultura y la política, pero como fuerza social que opera sobre los grupos o los individuos está mediada por las relaciones económicas e históricas (Ibíd, 72). Desde esos referentes, la vivencia aragonesa del Plan Hidrológico Nacional y del Pacto Autonómico denota que la producción de identidad o de un discurso nacionalista no quedó mediada por valores de sexo o raza, pero sí de clase o de territorio; y, como entre sus significaciones preferenciales destacó la percepción de un agravio y el sentimiento de ser periférico y ambos fueron usados para contrarrestar o subvertir las prácticas hegemónicas, se infiere que este proceso adquirió valor político a partir de las

significaciones, pero también de las relaciones económicas puestas en juego. Martín Barbero (1993: 110) anota que sin circulación cultural no hay hegemonía. Y, en el marco del *Interior colonialism*, Hechter (1975) considera la diferencia cultural como causa primera de desigualdad. Por el contrario, G. Myrdal (1959) prima el componente económico en su análisis de las relaciones de poder y dependencia en el interior de los estados. La naturaleza simbólica de este proceso, y el hecho de que la reivindicación se concentrara en el espacio público mediatizado, no oculta los valores económicos que subyacieron a la movilización y que afectaron al pulso por el poder y a la pluralidad de hegemonías que se pusieron en juego.

Simbolizada en el lema *ni más ni menos*, la aspiración aragonesa a la igualdad implicaba a la vez un rechazo a las diferentes formas de asimetría que, como señala Moreno (1997: 150), auspician en España las Administraciones Públicas o el Estado y a que las oportunidades económicas se concentraran en las zonas del territorio que, siguiendo a Brass (1997) o Hardin (1997), interesaban al centro político y al desarrollo industrial. Garcés (1997: 135) destaca que en España la movilización identitaria más intensa se ha dado "donde han existido problemas específicos de carácter político y cultural y no donde se han apreciado situaciones evidentes de dependencia socioeconómica". Sin embargo, el grado de desarrollo de Aragón y la simultaneidad temporal entre la movilización aragonesa y la recesión abierta en el otoño de 1992 avisa de que en esa estructura de oportunidad política la lucha por las oportunidades y los recursos pudo ayudar a que ese sentimiento de agravio se viviera de forma aún más reivindicativa frente al Estado o frente a otros territorios más avanzados. De hecho, el Gobierno de Aragón, el nacionalismo moderado o algunos medios usaron el discurso de la competitividad territorial para interpretar aquel acontecer social desde los flujos (4.2.2.1); por su parte, los trasvases y la televisión autonómica, dos de los conflictos intergubernamentales abiertos, reenviaron al debate sobre las redes técnicas y, sobre todo, a los aspectos económicos de esa dependencia y de los efectos políticos que esta tiene sobre la hegemonía (4.2.2). Esa acentuación de la lucha por la hegemonía a partir de la coyuntura económica obliga a comprender hasta qué punto los ciclos Kondratiev (151) o si las diferencias entre grupos sociales o territorios vividas desde la crisis mediaron esta reivindicación (4.2.2), a la manera que apunta Tortosa (1994: 63).

El hecho de que la movilización aragonesa compartiera tematización mediática con la recesión económica (*El INE certifica que la economía española entró en recesión en el último trimestre de 1992*, Diario 16, 13.3.93) explica que impulsores o detractores de la movilización aragonesa adaptaran su discurso a la coyuntura económica e, incluso, se apropiaran de los datos para competir por el poder social mediante lecturas ideológicas de lo real (152). Igual que el Presidente de Aragón

presentó la autonomía plena y el aprovechamiento del agua como la respuesta económica que Aragón necesitaba, el PSOE esgrimió los datos oficiales de desempleo, primero, para contrarrestar la reivindicación e, incluso, disolverla y, luego, para justificar la moción de censura. Con todo, la fuerza con que aumentó el desempleo (según el INEM, 2.458 parados más en enero de 1993; 1.616, en febrero) y la tematización mediática (*El superávit comercial de Aragón cae un 36 %*, El Periódico, 2.3.93; *La renta agraria de Aragón cae el 18 %*, El Periódico, 7.3.93) hizo que impulsores y opositores a la autonomía plena librasen un pulso político sobre la capitalización de los efectos negativos de esa crisis económica; como se puso manifiesto a lo largo de la manifestación celebrada en Zaragoza el 23.4.93, la polémica hidráulica o el intento socialista de que el paro fuera elegido como lema de la manifestación acabó reforzando la movilización; en cambio, en la polémica televisiva la tematización mediática del despilfarro económico por parte del Gobierno dañó su posición política a favor de la oposición parlamentaria. En uno y otro caso, la noticiabilidad y los discursos sociales reescribieron sobre un imaginario que, como señala Garcés (1997: 114), ha interiorizado en las últimas décadas una cierta idea de Aragón como región de reserva.

Hechter (1975) valora el desarrollo desigual dentro de los estados como una de las causas de los movimientos etnonacionales. Durante la transición democrática el aragonismo de izquierdas que representaba *Andalán* alentó ese tipo de vivencia identitaria a partir del expolio de los recursos y de la lógica de la dependencia que soportaba Aragón. En esta movilización la preeminencia política e institucional del centro derecha no impidió que se esgrimiera ese mismo discurso, lo que sugiere una cierta vampirización ideológica como forma de lograr la adhesión social y, en consecuencia, la preeminencia política. En el periodo 1981-91 el valor añadido neto industrial del Valle del Ebro creció a un ritmo del 4,2 % frente al 2,7 del resto de España, mientras que entre 1991-93 Aragón padeció la mayor desaceleración industrial, con un 0,5 de crecimiento frente al 0,9 de Navarra y La Rioja. Sobre esas variables económicas instituciones y medios hegemónicos construyeron un uso interesado del colonialismo interior que, por un lado, explica en qué terrenos libraron el pulso con quienes dominaban políticamente el Estado, pero, por otro, también aclara por qué y cómo las clases medias urbanas se convirtieron en vanguardia social de la movilización hasta darle la fuerza de su hegemonía social. Hobsbawm (1991: 178) ve el nacionalismo "inspirado por intelectuales y eruditos" e, incluso, "imponiéndose en la burguesía urbana culta antes de encontrar eco en amplias capas de la población". En esa lógica el discurso de la competitividad territorial o de la igualdad de oportunidad (DGA, 1992b) aparece como un guiño ideológico a esas clases medias zaragozanas, cuyo protagonismo en la movilización (Ansó, 1993a/b) hizo posible a un tiempo el pulso político a la

dominación de lo estatal y el reforzamiento del bloque económico social que dirigía la sociedad aragonesa:

"El Valle del Ebro que tuvo mayores tasas de crecimiento que el resto del país en el quinquenio expansivo, entre 1985 y 1991, ha sufrido la recesión más fuerte que el total de España en el trienio recesivo que va de 1991 a 1993" (Angel de Uña, Herald, Suplemento de Economía, 15.1.1995: 1).

"[...] el grado de convivencia y tolerancia de Zaragoza, porque conviven culturas diferentes y no hay antagonismos sociales significativos" (Ebrópolis, 1996: 89).

"[...] hacer compatible la inevitable concentración de actividad económica y riqueza en el Corredor del Ebro con nuevos focos de desarrollo a lo largo del territorio. Queremos, pues, pasar del Zaragoza contra Aragón a un reequilibrador y esperanzado Zaragoza con Aragón" (Eiroa, 1992b: 65).

Braulio Foz relata en el prólogo al V tomo de la Historia de Aragón de Antonio Sas que en 1838 senadores y diputados aragoneses pidieron al Gobierno español un mejor trato para el Reyno, recibiendo como respuesta que únicamente se reconocía la existencia de Huesca, Zaragoza y Teruel, por lo que el nombre de Aragón "debía relegarse y olvidarse por completo". En 1760 algunas élites sociales de Aragón ya habían pedido en el Memorial de Greuges que las diversas magistraturas del Estado fueran gestionadas de forma equitativa entre aragoneses y castellanos. Esta tendencia a denunciar la construcción del Estado y lo español a partir de lo castellano, que se deja sentir ya en la épica de los primeros siglos medievales (153), ha sido una constante del aragonesismo político más reciente y ello avisa de su posición central en el imaginario identitario aragonés. Pero, si se atiende al protagonismo del agua y los recursos económicos en el discurso aragonesista de este siglo (Garcés, 1997; Zapater, 1994), esa forma de imaginarse a partir de la dependencia y del sentimiento de derrota denota una cierta asunción social de que, como anota Garcés (1997: 115) al hablar del colonialismo interior, "la expansión de una región conduce al estancamiento de otras" (Garcés, 1997: 115). Desde esa lógica a la centralidad de la hegemonía castellana se ha sumado la referencia de lo catalán, presente en el episodio del Privilegio General en la Edad Media (4.1.1.1), pero más aún en el irredentismo que Mairal (1996) atribuye al aragonesismo político de este siglo o en el victimismo que Embid (1987) o Bada (1995) reprochan al aragonesismo conservador por su fijación con el desarrollo económico y social de Cataluña cuando se han opuesto a cualquier trasvase del Ebro.

En la polémica hidráulica los promotores del Plan Hidrológico Nacional formularon el debate como el conflicto entre la España húmeda y seca; por su parte, el Gobierno autónomo y el sistema medial aragonés lo leyeron como una pugna de intereses entre el Mediterráneo desarrollado y la España interior agraria. Desde esa lógica internalizada por los medios aragoneses, cuando la polémica trasvasista empezaba a ser tematizada (5.1.93), Heraldo tituló que *Cataluña quiere el trasvase del Ebro para crear más industrias en Barcelona* para dar cuenta de un informe de la Generalitat. En general, en la medida que se alimentó de un sentimiento de privación relativa, la movilización aragonesa se formuló como una afirmación ante el Estado, pero también en relación a las Comunidades Autónomas de mayor desarrollo económico y autogobierno. De hecho, ese vivir el acontecer desde la lógica de la desigualdad esquematizó la percepción que los aragoneses tuvieron de lo catalán o lo vasco e, incluso, de los partidos que en aquel contexto político mejor los representaban (154). Partiendo de que, tal como apunta Perceval (1996: 118), una cultura causa admiración en cuanto que se percibe como algo superior o antipatía por lo que tiene de dominación, algunos discursos mediales e institucionales de Aragón enfatizaron la aversión a lo catalán, al mismo tiempo que asumían y hasta envidiaban su superioridad. A esa lógica reenvió la conducta de Heraldo en relación al acuerdo televisivo firmado por el Gobierno con un multimedia de ámbito estatal.

Hobsbawm, (1991: 41-2) recuerda que, en los comienzos de este siglo los principios del umbral y del reconocimiento como nacionalidad fueron usados por los estados hegemónicos para decidir qué naciones eran cultural y económicamente viables. El debate sobre el reconocimiento de Aragón como nacionalidad o las acusaciones sobre el ruralismo aragonés actualizaron esa misma relación de poder en el ámbito del Estado español. Al comienzo de la polémica hidráulica, La Vanguardia destacó que el agua que se trasvasaría a Cataluña suponía menos de una décima parte de la que iba al mar (*El Gobierno de Aragón se opone al trasvase a Cataluña que propone el Plan Hidrológico*, 15.1.93 [abre edición]); y los grupos parlamentarios de CIU se opusieron en las Cortes Generales a que el Estatuto reformado de Aragón incluyera el carácter de nacionalidad, alegando que diluía el hecho diferencial catalán. Como discursos políticos, ambas posiciones se revelan como un acto de superioridad y de poder en el entramado político del Estado. Cuando habla de la división cultural del trabajo entre el centro y la periferia, Hechter (1975) Hechter enfatiza el monopolio de las posiciones y el prestigio social por parte del territorio dominante y del perjuicio que se causa a las culturas periféricas, relegadas a papeles sociales inferiores. La caricatura del botijo o la acusación de insolidaridad revela ese esquematismo del poder que, como anota Perceval (1996: 82), personaliza en el otro los atributos que, en su valoración del acontecer, amenazan a la colectividad. Esta forma de afirmar la propia superioridad de lo estatal frente a lo aragonés mediante estereotipos se revela, además, expresión de

la lógica de dominación que ha regionalizado lo aragonés como español a lo largo de los últimos siglos (4.2.1.3):

"[...] Tuvimos que escuchar amenazas a cargos públicos socialistas dispuestos a participar en la convocatoria, acusaciones de autocracia o calificativos despectivos como *baturrada*. Durante dos años, el Partido Socialista utilizó todas las estratagemas y recursos, en Madrid y Aragón, con el único objetivo de neutralizar la movilización aragonesa.

[...] mientras se creaba en la sociedad aragonesa la idea de que los políticos debíamos ser capaces de sacar adelante el nuevo Estatuto, en la tramoya de la política los intereses de los dos partidos centralistas, PSOE y PP, empujaban la consumación del Pacto Autonómico en las Cortes de Aragón y retardaban cualquier avance hacia la Autonomía Plena [...].

Aquella dilación y las tácticas propagandísticas llegaron a preocuparnos, sobre todo, por el posible desánimo o dudas que podía haber producido en la sociedad aragonesa. [...] Como afirmé entonces [...], las dificultades parecían mayores que en 1992, pero Aragón no podía dar *ni un paso atrás*. La sociedad aragonesa volvió a hablar muy claro" (Eiroa, 1995:24/5).

Si se tiene en cuenta la forma en que las instituciones aragonesas asumieron ese tipo de conductas y estrategias de la dominación, cabe hablarse de rebelión abierta en el caso de algunos discursos mediales. Sin embargo, en el extremo contrario, también aparecen reacciones institucionales de asunción de la propia inferioridad. En la polémica hidráulica el Presidente de Aragón esgrimió la oposición que los Gobiernos de Castilla León y Navarra habían expresado a la propuesta de Plan Hidrológico Nacional para presentarse ante los medios de difusión estatal como adalid de la España interior y reiterar que el debate hidráulico ponía en juego el modelo español de desarrollo. Pero, al mismo tiempo, durante sus comparencias -19 y 20.1.93- en los principales medios radiofónicos y televisivos de ámbito estatal reiteró que los aragoneses no eran insolidarios, sino que tenían necesidades históricas de agua sin cubrir. De esa forma, evidenció una interiorización de la imagen de lo aragonés que la hegemonía había expresado y, por tanto, una actitud que favorecía la reproducción de esa dominación. Si se atiende al tratamiento que las instituciones y los medios aragoneses dieron a esos estereotipos, se confirma que, siguiendo a Perceval (1996: 113), asumieron la demonización hasta el punto de defenderse más de ella que de la realidad circundante.

Para Grandi (1995: 121), la hegemonía es "el modo mediante el que los grupos y las formaciones sociales que dominan una sociedad la guían gracias a la compensación entre fuerza y persuasión que se ejerce mediante el ejercicio de un liderazgo intelectual y moral". Leída así, como señala Ang (1997), la hegemonía no existe como algo dado o estático, sino que se hace, rehace y deshace de forma permanente. Aún asumiendo el pesimismo de la Escuela de Frankfurt o el determinismo de algunos análisis culturalistas, ni todo lo que hace o piensa la hegemonía contribuye a su reproducción y refuerzo ni lo que proviene de abajo asegura su reformulación o rebeldía (Martín Barbero, 1993: 85). Igual que la dominación genera un proceso de asimilación que "puede volver a empezar continuamente" (Perceval, 1996: 115), los discursos sociales minoritarios disponen de resistencia y creatividad, bien a partir del bloque histórico formado por el consenso de instituciones y sociedad (Gramsci, 1977), bien desde el principio aprovechate de todo que permite a las subculturas dislocar el sistema (Barker y Beezer, 211) e, incluso, cambiar esas relaciones de poder (Ang, 1997). Ya sea recreada, defendida o modificada, la hegemonía necesita, en expresión de Williams (1992b), ser renovada de forma permanente, aunque para ello encuentre continuas resistencias. En esos procesos vividos operan a la vez complicidades, conflictos por el poder y la seducción (Grandi, 1995) y "relaciones sociales alienadas, prostituidas por la lógica de la dominación" (Marín, 1979: 112).

Si en los procesos institucionalizados los actores sociales acaban asumiendo roles (Berger y Luckmann, 1997), quienes impulsaron la reivindicación aragonesa y, luego, quienes la respaldaron socialmente asumieron su posición de débiles. Tanto la pretensión de ser un gran equipo como la promesa de la semilla, ejes de comunicación del Gobierno de Aragón en las dos movilizaciones, presuponen la conciencia de que aún no lo eran; esa percepción de lo aragonés como identidad superviviente y proyecto de futuro se dejó sentir, sobre todo, en la actualización del pasado que dominó durante el acontecer autonomista, como prueba que la Constitución Federal del Estado Aragonés de 1783, primer intento por recuperar la personalidad política de Aragón, fuera calificada de "resistencia de algunos aragoneses a perder su identidad histórica" (DGA, 1992a). Además de las instituciones públicas, las clases dirigentes aragonesas enfatizaron la necesidad de hacer frente a decisiones injustas de un poder superior que ponía en peligro los intereses comunitarios. Estas conductas denotan la interiorización de la inferioridad, pero sugiere también que el sistema aragonés de poder hizo de esa conciencia de debilidad y agravio una estrategia de rebeldía (4.2.1.1). Hobsbawm, (1991: 115), la identificación del Estado con una nación comporta el riesgo de crear nacionalismos subestatales "en regiones donde antes eran desconocidos o entre pueblos que hasta entonces sólo tenían interés para los folkloristas". En este caso, la ostentación de poder de quienes

representaban la centralización del Estado unitario propició esa estrategia de asumir el papel del débil, así como el discurso del agravio, y por ello facilitó la adhesión social a la reivindicación.

Además de rubricar que la lógica de la coyuntura es el arte del oprimido (Martín Barbero, 1993: 107), este doble juego de poder entre quienes se mostraron como expresión de la hegemonía política y social de lo estatal y quienes se escudaron en el papel de dominados maltratados hizo que el rechazo al Pacto Autonómico y al Plan Hidrológico pudiera justificarse, siguiendo a Brass (1997: 72), en términos de la opresión existente. Días después de la primera manifestación el Presidente de Aragón, E. Eiroa (1992a: 33), afirmó en el Club Siglo XXI que el proceso seguido por PSOE, PP y Gobierno Central para elaborar el Pacto Autonómico "violentaba el espíritu constitucional y el propio proceso autonómico como hecho político surgido desde el pueblo y no impuesto por el legislador". Destacó asimismo que aumentaba las desigualdades dentro del Estado porque "transfieren de manera inmediata 16 nuevas competencias que tienen una importancia relativa; dilatan en el tiempo las únicas dotadas de contenido y presupuesto y, por último, excluye cualquier concreción de plazo para que se igualen las Comunidades históricas y las de la vía lenta" (Ibid, 35). Si tomamos como referencia a Brass (1997: 93), este discurso confirma que, cuando las autoridades estatales no satisfacen las demandas de la minoría territorial, esta responde reclamando la descentralización administrativa y política del poder; si seguimos a Moreno (1997: 163), esta conducta rubrica que en el modelo autonómico español las relaciones intergubernamentales interfieren de forma decisiva en los movimientos nacionalistas. Tematizado como desigualdad, menosprecio o agravio, este discurso de la inferioridad y la dominación protagonizó la comunicación del Gobierno de Aragón o los manifiestos del Justicia, los medios de comunicación y las organizaciones sociales, desde la Iglesia hasta los partidos nacionalistas o los sindicatos. Se convirtió así en una de las ideas fuerza que impulsó la reivindicación aragonesa y que permitió articular el consenso social necesario para su éxito político. De esa forma, rentabilizó la capacidad que Ang (1997: 90) reconoce a la sociedad dominada para apropiarse en función de sus intereses la materia prima que le ofrece la cultura dominante:

"[...] quisiera hacer una nueva llamada en favor de que los aragoneses reivindicemos la autonomía plena y el agua desde la unidad y, también, para que el encuentro de mañana se alimente de la esperanza, de la confianza en el futuro, no en la desunión o la frustración" (San Jorge, 93: 2).

"O el pueblo aragonés es muy grande o sus enemigos son muy poca cosa, ya que la distancia que les separa es abismal" (Liso, M.A. *iQué buen vasallo si tuviese un buen señor!*. El Periódico 25.4.93).

"**P.** Eiroa dice que el convenio fue la excusa, que a ustedes les aterró el ascenso del PAR. **R.** ¡No fue una excusa, fue una poderosa razón!. Pero también es cierto que, cuando analizamos en profundidad con IU los resultados electorales del 93, vemos con preocupación que han saltado las alarmas...El PAR había sabido rentabilizar su pequeña acción de gobierno y en el PSOE reflexionamos sobre el riesgo de que se creara un norte nacionalista frente a un sur solidario"(Samitier, E. *Ex Presidentes: José Marco. El PSOE, desde el 95, es una catástrofe*. Heraldo.. Entrevista. 6.4.97: 4 y 5).

Nagel y Olzak (1997: 25) anotan que una movilización nacionalista necesita algo más que el agravio para consolidarse. El reconocimiento explícito del éxito social de la movilización por parte de quien representó el principal opositor (*Ex Presidentes: José Marco. El PSOE, desde el 95, es una catástrofe*. Heraldo. 6.4.97: 4 y 5) avisa de que otros factores, como la estructura de la oportunidad política o el contexto socioeconómico y el tipo de imaginario social sobre el que escribió este acontecer, se sumaron al menosprecio en esta puesta en juego del poder. El deterioro socialista favoreció de forma decisiva la movilización de una sociedad escasamente articulada y consciente de su debilidad, actualizando las virtualidades nacionalistas otorgadas por Máiz (1997) al contexto sociopolítico. La recesión económica ayudó también al potencial nacionalista de la lucha por los recursos y las oportunidades en las sociedades urbanas que cita Brass (1997). Sin embargo, la colaboración del Gobierno Autonómico con el sistema aragonés de poder, de forma especial el medial, sugiere que se cumplió la exigencia de intereses nacionales comunes entre instituciones políticas y sociedad civil que Gramsci (1977) considera condición necesaria para imponer una nueva hegemonía. Esa posibilidad sitúa este malestar social dentro de la compleja dinámica que produce y hace funcionar la hegemonía en el Estado español (Máiz, 1997; Moreno, 1997) y, siguiendo a Champagne (1993), plantea hasta qué punto y cómo el poderoso fue fagocitado; en la medida que esa lógica de dominación de lo estatal integra elementos territoriales y sociales (Moreno, 1997; Fox, 1997), esa puesta en juego del poder a través de la identidad y lo nacional aragonés exige aclarar si, a la manera apuntada después por uno de sus protagonistas, existió el riesgo de que se creara un norte nacionalista frente a un sur solidario (4.2.1) o, incluso, si la recuperación de la autoestima colectiva y la dignificación de lo aragonés ocultó, como sugirieron las principales organizaciones sindicales y como puede deducirse de los comportamientos de algunas instituciones sociales, algún tipo de rediseño de las relaciones de poder existentes en la sociedad aragonesa (4.2.3).

Como formación política histórica, el Estado nacional superó por sus virtualidades a las ciudades estado, a la federación entre ciudades o a los imperios supranacionales, contribuyendo a un tiempo a

la modernización económico social y a conformar el estado moderno. En la formulación liberal de la Revolución francesa, la conversión del pueblo en nación creó un nexo de solidaridad entre personas hasta entonces extrañas entre sí, pero sobre todo proporcionó una base democrática sobre la que apoyar la dominación política. Como señala Habermas (1997: 176), facilitó a un tiempo un modo de legitimación del poder político y una forma de integración social. Esta primera forma moderna de identidad colectiva sirvió de sustrato cultural a la unidad de organización jurídica del Estado, pero, en lo que tuvo de relaciones de poder, se construyó a partir de los valores y normas de los estamentos dominadores (Ibíd, 177). De esa forma, por un lado, se construyó una nueva hegemonía de la centralización política como instrumento de modernización y desarrollo económico (Hobsbawm, 1991); por otro, se ahondó la fragmentación entre lo popular y lo culto que el pensamiento racionalista y científico (155) ya había iniciado desde los albores del Renacimiento (Bajtín, 1995) y sobre el que se ha construido la hegemonía de lo burgués (Martín Barbero, 1993). Y, si se traslada a España la preocupación por definir el carácter nacional que se extendió por Europa en la segunda mitad del siglo XIX (4.2.1), esa doble lógica de dominación se reprodujo a través de los dispositivos que, la historiografía, el sistema escolar y el pensamiento literario, construyeron lo español. Fox (1997: 12) indica que la historiografía defendió y acabó imponiendo el principio de que existía una mentalidad nacional perdurable durante siglos, mientras que la literatura o la historia devinieron en espacios donde a un tiempo se indagó en el pasado para comprender la identidad nacional y se imaginó el perfil de lo español que difundieron luego el sistema escolar y la comunicación de masas (Ibid, 21).

En ese proceso secular los aragoneses dejaron de vivirse como parte de un estado soberano para pasar a sentirse parte de una región de un Estado nación unitario. Esa mutación identitaria constituyó todo un mestizaje político y cultural que, tal cual apunta Beltrán (1995: 126), se revela mediado por las relaciones de jerarquía y dependencia articuladas, primero, alrededor del Estado nación español (4.2.1) y, segundo, alrededor de la lógica económica del capitalismo (4.2.2; 4.2.3). A lo largo del siglo XVII el fuerismo aragonés fue vaciado de sentido político y sustituido por formas religiosas de identificación españolas o locales, como el culto a la Virgen del Pilar o a las vírgenes de cada municipio (Mairal, 1996; Bada, 1995); en los siglos XVIII (Beltrán, 1995) y XIX (Gil Encabo, 1986) se construyeron una gran parte de los tópicos que acompañan a lo aragonés y los símbolos que lo representan: En cuanto liberal y burguesa, la racionalidad ilustrada anticipó los mecanismos políticos y culturales que un siglo después aculturaron lo aragonés en los campos del derecho (4.2.1.1) y de las lenguas (156) o lo resemantizaron asimilado a lo español a partir de nuevos atributos, como la Hispanidad o la Jota (4.2.1.2). Según Fernández Clemente (1994: 317), la pervivencia ocasional de las

viejas instituciones del Reino durante el s. XVIII indican que "como pueblo diferenciado" los aragoneses no habían sido "absorbidos ni sometidos desde Madrid"; para Mainer (1995), la invención institucional de lo español durante los dos últimos siglos hizo de Aragón "una región marginal" que apenas aportó "alguna solitaria figura destacada"; y Beltrán (1995) anota que, integrado en lo español, lo aragonés hasta llegó a representar mediante lo baturro estereotipos culturales de la España rural interior (4.2.1.3). Por más que Unamuno sostuviera que lo español se había construido a través de un pacto de *patrias chicas* (Fox, 1997: 118), ese pasar de vivirse como aragoneses a sentirse españoles no siempre ha seguido la lógica de aceptación de la modernidad que apunta Hobsbawm (1991): Si Jerónimo Borao o José Siesso de Bolea se sintieron orgullosos de que el habla aragonesa pasara a enriquecer "el acervo común de la sin par lengua española" (en Alvar Ezquerra, 1991: 33); nacionalistas como G. Torrente o J. Calvo Alfaro o autores más recientes han calificado esa aculturación como una dominación apoyada en la coerción política y social (Vidal, 1986; Mairal, 1996).

En la medida que escribieron sobre ese imaginario social y sobre ese pasado histórico, la desvalorización de las lenguas aragonesas (ver 4.1.1.2) que adujeron Andolz y Nagore durante la movilización o el abandono del aragonés en favor del castellano por parte quienes buscaban promoción social, tal cual apuntó E. Vicente de Vera, supuso una interiorización crítica de esa hegemonía de lo español y lo estatal que asimiló las culturas minoritarias y las redujo al terreno de lo privado, mientras reservaba el espacio público para la lengua, la literatura, el pensamiento y la cultura oficial (Moreno, 1997). Por el contrario, la apropiación del *patriotismo de estado* y de la legitimidad social que supone por parte de quienes pusieron en marcha o apoyaron el Pacto Autonómico y el Plan Hidrológico o la puesta en circulación del discurso del ruralismo aragonés que llevaron a cabo esos mismos actores reduplicaron esa misma lógica de poder que ligó el proyecto nacional al desarrollo del Estado democrático y, por tanto, a "un orden civil, un sistema de justicia y una estructura económica" (Fox, 1997: 21) o, según Hobsbawm (1991), al aparato administrativo (correos, burocracia y el censo) al político (policía o Guardia Civil) y a las comunicaciones (ferrocarril, carreteras y telecomunicaciones). A esta lógica de poder territorial y social que, en palabras de Martín Barbero (1993: 165), hizo de los medios de comunicación el instrumento político que nacionalizó las masas populares reenvía incluso el hecho de que los media de ámbito estatal no recogieran o dieran escaso valor informativo a las manifestaciones autonomistas celebradas en Zaragoza, pese a que en ellas participaron un diez por ciento de los aragoneses, y en cambio abrieran sus ediciones o cabeceras de los informativos con la presencia de diez mil aragoneses congregados a las puertas del Congreso:

"La gente, la lengua o la cultura pequeña encajaba en el progreso sólo en la medida que aceptara la condición subordinada de alguna unidad mayor o se retirase de la batalla para convertirse en depositaria de nostalgia y otros sentimientos: en pocas palabras, si aceptaba la condición de viejo mueble de familia que le asignó Kautsky. [...] No morían sin que nadie les llorara, pero una generación que inventó el concepto y el término de folklore podía distinguir entre lo presente y vivo y las reliquias del pasado" (Hobsbawn, 1991: 51).

"Aragón, aunque nos duela el decirlo, se halla en un estado de inferioridad con relación a los demás pueblos españoles en casi todos sus aspectos...Nuestra decadencia procede desde que Aragón se federó con Castilla" (Gaspar Torrente, 1930).

"en esta tierra que fue una gran nación hace quinientos años, el sentimiento de comunidad actualmente no pasa del clan, de la tribu, del pueblo, de la aldea. Los aragoneses hablan de sus aldeas y se sienten identificados con sus costumbres, sus historias y sus tradiciones, pero jamás hablan de su Pueblo, porque han perdido hace ya demasiado tiempo sus señas de identidad. Aragón ha pasado a ser [...] una simple palabra" (Vidal, 1986: 115).

"Al término españolismo le atribuyo el significado de considerar que Aragón no tiene otra entidad, sino es la que corresponde de la integración en España, poseyendo eso sí algunas peculiaridades regionales, pero en cualquier caso su naturaleza es la de ser una parte de España" (Mairal, 1995: 98).

Baudrillard (1974) ya hizo notar el valor del intercambio lingüístico como instrumento de dominación social o territorial; en línea con el discurso de Foucault, y en general del postmodernismo, Marín (1974: 54) apuntó también la alienación que se deriva de que la hegemonía controle los códigos. En esa clave de lectura adquieren valor el predominio del castellano en los intercambios simbólicos de la movilización o la emergencia ocasional de algunos relatos en fabla porque explicitan los efectos de la concepción uniformista de la identidad nacional que, en palabras de Moreno (1997: 142), aplicaron en España los impulsores de la centralización política a imagen de la Tercera República Francesa. A ese uso nacionalista de la lengua (157) reenviaron también todas las numerosas conductas sociales que demostraron el monopolio de la lengua oficial como instrumento de comunicación literaria y administrativa (Fox, 1997: 21) e, incluso, de selección laboral y social (Brass, 1997: 85; Hardin, 1997: 122). De la misma forma, la marginalidad de la industria editorial en aragonés, los premios concedidos por el Gobierno autónomo a obras en aragonés y catalán o los beneficios que pudieron obtener las

editoriales aragonesas a partir de la exaltación identitaria se revelan conductas o estrategias de resistencia, y por tanto de respuesta, a la hegemonía que, tal como prueba (Fox, 1997), creó una comunidad española imaginaria a partir de la creación de una política editorial o de un canon literario y de la estandarización de libros de texto.

Y, si se atiende al protagonismo que lo aragonés tuvo en el espacio público mediatizado de la sociedad aragonesa y de la española, esa tematización se revela como una ruptura con la lógica que en los últimos ciento cincuenta años ha emasculado las identidades territoriales a través de la cultura de masas: En lo que pudo tener de dignificación social de lo aragonés o de recuperación de la autoestima colectiva (4.1; 4.1.1), esa noticiabilidad permitió subvertir algunos de los dispositivos que, incluso en el periodo democrático, han consolidado la realidad periférica de Aragón y la percepción social de lo aragonés subordinado e integrado en lo español. Martín Barbero (1993: 96-7) sitúa a los medios en el centro de la lógica liberal que, en gran parte de las sociedades occidentales, asoció la modernización con el cambio "del plural de los pueblos a la unidad del pueblo convertido en nación" mediante la imposición de la cultura nacional y la atribución de un "sentimiento de culpabilidad, de inferioridad" a las culturas. En esa lógica, que como señalan Llobera (1996) y Fox (1997) en España ha tenido continuidad durante el franquismo y la democracia, el protagonismo de elementos folklóricos, como los tambores, los cantautores o la jota, aparece como una renacionalización de la cultura popular: Al convertirlos en instrumento de identificación, los impulsores de la movilización y sus principales actores sociales usaron el folklore para deconstruir prácticas, ritos o costumbres populares que, siguiendo a Martín Barbero (1993: 96-97), la hegemonía burguesa despolitizó de forma que los pueblos minoritarios sólo pudieran usarlas como resistencia conservadora a manera de reliquia del pasado.

Este uso de lo popular explicita que en este proceso social convivieron varios procesos de dominación no necesariamente convergentes y que, por tanto, las relaciones de poder derivaron más bien en un entrecruce de hegemonías articulado, bien alrededor del territorio y las instituciones públicas, bien alrededor de la clase y de los actores sociales. Hobsbawm (1991: 102-115) detalla que el patriotismo de estado acostumbra a apoyarse en la burguesía liberal e industrial, mientras que el minoritario encuentra eco preferente en la pequeña burguesía y clase media baja (158). El hecho de que las organizaciones empresariales se adhirieran desde el principio a la movilización o que los sindicatos principales recelaran de los intereses de clase que podían enmascararse tras la

reivindicación sugiere que la puesta en juego del centralismo político y de quienes lo representaban, el PSOE, afectó también a las relaciones internas de poder de la sociedad aragonesa y a algunos aspectos de la dominación de clase. Con el discurso de la competitividad territorial o la ligazón entre desarrollo colectivo y autonomía plena, el tejido empresarial aragonés vistió sus intereses de valor comunitario; y, además, encontraron esa protección en momentos de crisis económica, de forma que el desempleo creciente fue imputado a los agresores exteriores y no a la lógica de las relaciones económicas propias (4.2.3). De ese escenario ideológico participaron los propios medios de comunicación, que hicieron de la noticiabilidad sobre este acontecer un producto mediático de alto valor económico, pero también una estrategia de poder social: La fase de implantación que vivían algunas ediciones aragonesas, como El Periódico, ABC o Diario 16 Aragón, explica la estrategia de marketing editorial que pudieron llevar a cabo las empresas informativas aragonesas; pero, además, la colaboración que les demandó el poder político les dio fuerza suficiente para hacer frente al Gobierno democráticamente elegido, cuando este tomó una decisión que contravenía sus intereses (4.2.3).

De esa forma, tal como apunta Schmucler (1977a), los medios gestionaron la reivindicación aragonesa frente al Gobierno Central y el convenio audiovisual no tanto por cuestiones ideológicas o éticas como en función de las oportunidades y peligros empresariales que les ofrecía. De hecho, sus reproches a los medios de ámbito estatal por la escasa valoración noticiera de las movilizaciones o el pulso que mantuvieron entre ellos sobre quienes habían apoyado primero la movilización se revelan conductas tan complejas como ideológicas. Al mismo tiempo que se afirmaban como actores sociales autonomistas o aragonesistas se mostraban también como empresas en competencia por una parte del espacio público mediatizado. Su uso del sentimiento de agravio, similar al que activó el aragonesismo político, aclara entonces la sofisticada retórica a partir de la cual se articuló la adhesión social, en especial la de las clases medias urbanas de Zaragoza que lideraron el proceso. Si se tiene en cuenta que su nivel de riqueza y calidad de vida supera la media española (Montero y Oñate, 1995), esa retórica de los sentimientos activada por los medios hizo posible que se cumpliera la tesis de Nagel y Olzak (1997: 25) de que, cuando han recibido beneficios económicos y sociales, las periferias avanzadas favorecen la movilización nacionalista. Más aún, pese a que en la reivindicación había expectativas no siempre convergentes entre el mundo rural y el urbano o entre unas provincias y otras, ese enmascaramiento de lo particular bajo el simulacro de la armonía social propició que en la vivencia de las audiencias y del resto de la sociedad se impusiera lo comunitario, aún a costa de reforzar la dominación de determinadas élites sociales aragonesas (4.2.3):